

INFORME

**SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN JALISCO
- 2010 -**



Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco. 2010

© Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. 2010

Primera edición: Diciembre de 2010

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD)

Asociados. Jorge Barajas Martínez. Sergio René de Dios Corona. Juan Larrosa Fuentes. Francisco Macías Medina. Gerardo Moya García. Jorge Manuel Alejandro Narro Monroy. Carlos Armando Peralta Varela. César Octavio Pérez Verónica. María Guadalupe Ramos Ponce. Jorge Enrique Rocha Quintero. David Velasco Yáñez. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona.

Consejo directivo

Carlos Armando Peralta Varela. Presidente.

María Guadalupe Ramos Ponce. Vicepresidenta.

Francisco Macías Medina. Secretario.

Gerardo Moya García. Tesorero.

César Octavio Pérez Verónica. Vocal.

Dirección ejecutiva y coordinadores de proyectos

Francisco Macías Medina. Director Ejecutivo.

César Octavio Pérez Verónica. Litigio Estratégico.

Coordinación editorial

Paulina del Pilar Gutiérrez Ramírez

César Octavio Pérez Verónica.

Francisco Macías Medina

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC

Corrector de Estilo:

Carlos Armando Peralta Varela

Diseño y Diagramación

Luis Alberto Partida de la Cruz

La información contenida en este informe puede ser reproducida total o parcialmente, siempre y cuando se respete y cite la autoría de todos los que colaboraron en la construcción de este texto. Además, se solicita que en caso de utilizar el texto, se informe a su editor al siguiente correo electrónico: cepad@cepad.org.mx. Las actividades del proyecto y la publicación fue financiado por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)

Impreso y hecho en México.

ÍNDICE

Artículo	Autor	Pág
Presentación		5
Un Balance del Año 2010 desde la visión del Cepad		7
<i>Agresiones contra periodistas y personas que ejercen el derecho a la Libertad de Expresión</i>		
ACOSTÚMBRATE, ASÍ ES ESTO	Jade Ramírez Cuevas Villanueva	16
<i>Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación</i>		
VIH Y DISCRIMINACIÓN: EL ESTADO ACTUAL DESDE LA EXPERIENCIA	José Manuel Salcedo Alfaro, Coautoría: Cecilia Pedroza Veloz, Bertha Venegas Camarena y David Arteaga Godinez	23
<i>Derechos de los pueblos indígenas</i>		
VIDA SIN AGUA	Aminta Barba Ochoa/ Nora Lorenzana Aguilar	32
<i>Derecho a la Seguridad e Integridad</i>		
CICLISTAS, LOS OLVIDADOS	Martha Patricia Martínez Barba	37
<i>Derecho al Debido Proceso</i>		
JUSTICIA	Alfredo Viniegra Martínez	45
<i>Derechos de la Infancia y las y los Jóvenes</i>		
LA OTRA CASA	Adriana V. Rodríguez Salguero	56

PEDERASTIA COMO INEQUIDAD DE GÉNERO	María de los Ángeles Cortes Almaguer	63
<i>Criminalización de la Protesta Social</i>		
TRABAJADORES DE TELESECUNDARIA EN JALISCO	Arturo Contreras Macías	69
Análisis de escenario y prospectivas		
LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO 2009-2010	Francisco Macías Medina/Carlos Peralta Varela	79
ANÁLISIS DE LA TORTURA EN JALISCO 2000-2009. RESUMEN EJECUTIVO	César Octavio Pérez Verónica	92
ÍNDICE DE AUTORAS Y AUTORES		102
INFORMACIÓN INSTITUCIONAL		107
DIRECTORIO DE ORGANISMOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y MOVIMIENTOS SOCIALES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2010		110

PRESENTACIÓN

El Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2010, es el resultado de un ejercicio amplio de compartir experiencias, sobre casos y situaciones que actualmente marcan nuestra entidad, la que por cierto no se encuentra ajena a preocupaciones importantes y violaciones a los derechos humanos que afectan a pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, comunidades que buscan mejores condiciones de vida, a la salud, medios ambiente, al trabajo, a la vivienda digna, al agua potable; defensores, defensoras y periodistas que viven en el riesgo a su seguridad e integridad, personas que han perdido la vida, otras afectadas en su integridad física y psicológica por la inseguridad, así como otras que ven en la protesta una forma de exigir aquello que la autoridad ha decidido hacer invisible.


Cada uno de los artículos refleja la visión y el diagnóstico de personas, organizaciones y movimientos involucrados en la búsqueda de alternativas de solución o en la tarea de hacer visibles casos o temas, muchos de ellos de una permanencia que nos debe cuestionar como sociedad.

La principal característica del Informe, es precisamente su pluralidad de visiones, propuestas e intervenciones, que buscan darnos elementos para primeramente conocer lo que ocurre en Jalisco, para luego acercarnos a esas realidades, muchas de ellas poco mencionadas en los medios de comunicación ó estudiadas desde el ámbito académico, para facilitar nuestra toma de postura ante esas realidades que son defendidas.

A final de cuentas, no puede defenderse los derechos humanos, sin nutrirlos de estos elementos que luego nos faciliten la eliminación de todo aquello que provocan las constantes violaciones e incumplimientos.

También es un informe lleno de esperanza y compromiso, porque es fruto de una experiencia de formación en registro y documentación de violaciones a los derechos humanos impartida por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD), que implicó la realización de cinco talleres, en la que participaron más de 50 personas integrantes de 26 organizaciones civiles ó movimientos sociales, estrategia que fue financiada por el Programa de Coinversión Social de la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su Delegación en Jalisco.

El encuentro, reencuentro, intercambio de preocupaciones, la creación de un espacio de formación conjunta y de intercambio de experiencias, pero sobre todo identificarnos



como defensores y defensoras en un contexto difícil como el de Jalisco, es también parte de los frutos de este esfuerzo conjunto que esperamos se vea reflejado en el trabajo que se presenta y se pone a consideración de ustedes.



UN BALANCE DEL AÑO 2010 DESDE LA VISIÓN DEL CEPAD

1) Una perspectiva general de los sucesos

Han pasado casi cinco años de reflexionar y de actuar a favor de los derechos humanos en Jalisco. Las motivaciones que sostienen nuestro trabajo, sin duda no son las mismas que en origen se consideraron, ahora encontramos un país y un estado marcados por la inseguridad, con ejercicios de gobiernos que resultan insuficientes en sus respuestas ante una sociedad que demanda una mayor seguridad y cumplimiento en la garantía de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La vuelta de la supervisión de organismos internacionales al país lo observamos claramente en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos de Campo Algodonero y Rosendo Radilla, que permiten medir la realidad en la que nos encontramos en temas como crímenes del pasado, desaparición forzada y los derechos de las mujeres.

A nivel local, en la etapa final de un gobierno estatal, pareciera que la entidad se asemeja a una isla aislada, en la que no ha llegado la globalización de los derechos humanos, ni tampoco la inseguridad, y que prefiere guiarse por verdades ajenas a una sociedad plural, verdades tradicionales ya superadas y discutidas hace siglos, desafortunadamente con una clara opción a la eliminación de aquello que consideran diferente, sin importar si se trata de hombres o mujeres; ó si con ello se incrementa más la violencia.

El 2010 para Jalisco fue un año que permite comprobar una y otra vez, que se trata de una entidad que tiene niveles preocupantes de violaciones a los derechos humanos que afectan a pueblos indígenas, mujeres, niños y niñas, comunidades que buscan mejores condiciones de vida, salud, medios ambiente, trabajo, que requieren vivienda digna, agua potable; defensores y defensoras o periodistas que viven con riesgo de su seguridad e integridad; personas que han perdido la vida afectadas por la violencia cotidiana y otras muchas más que ven en la protesta una forma de exigir aquello que la autoridad ha decidido hacer invisible.

En el tema del derecho a la igualdad y no discriminación, los hechos más relevantes tuvieron como telón de fondo la aprobación en el Distrito Federal de matrimonios

entre personas del mismo sexo y su posterior debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en Jalisco provocaron una amplia movilización social tanto de los que estaban a favor como en contra de la medida, sin embargo la respuesta desde las autoridades reflejó un estado lamentable en su apreciación hacia lo diferente.

Las declaraciones homofóbicas y desinformadas del regidor del Ayuntamiento de Guadalajara Gamaliel de Jesús Ramírez Andrade, incluso desde el propio desarrollo de su campaña como aspirante a la presidencia municipal, comprueban que las sanciones a servidores públicos son necesarias como una forma de reparación y que su inaplicación lo único que fomenta es un ambiente que coloca en situación de riesgo a muchas personas.

Por lo menos así lo demuestra la secuencia de atentados a este derecho, que continuaron con los pronunciamientos tanto del cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez y del propio Emilio González Márquez, gobernador de Jalisco, este último quien incluso se declaró en estado de “asquito” ante la existencia de matrimonios entre personas del mismo sexo.

Finalmente la existencia de cursos para “curar” la homosexualidad apoyados desde la Secretaría General de Gobierno, y realizados por algunas organizaciones civiles y religiosas, nos indican el límite al que puede llegar una sociedad que carece de una visión poco tolerante a las diferencias y a sus semejantes.

Nos parece claro que la inexistencia en Jalisco de un marco que prevenga, proteja y sancione este tipo de acciones, no es casual sino que busca perpetuar la falta de protección e impunidad de esas conductas.

Iniciamos el año con hechos que atentaron directamente a los derechos de los pueblos indígenas, cuando policías de Huejuquilla El Alto, establecidos en un retén ilegal pero ajustado a la nueva “política” de seguridad, lesionaron de forma injustificada a un grupo de indígenas Wixárikas que regresaban de recibir un apoyo gubernamental. La respuesta inicial fue la detención de los afectados y la no detención de los servidores públicos, lo que propició que la comunidad tomara las instalaciones del Ayuntamiento.

Es precisamente este grupo que ha puesto el ejemplo en la forma de cómo deben defenderse los derechos humanos, ya que este año se llevó a cabo una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que plantearon la falta de consulta del gobierno de Jalisco en la construcción de una carretera que atraviesa la zona norte, con lo cual colocan a la autoridad en una supervisión internacional y de paso exhibieron la pobre visión de desarrollo de la que partimos los que no pertenecemos a un pueblo indígena.

Igual dignidad la observamos en el pueblo Coca de Mezcala, el cual sigue luchando porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura de Jalisco y el Ayuntamiento de Poncitlán, les consulte la remodelación de la Isla del Presidio, patrimonio que les pertenece como pueblo originario y que paradójicamente fue conseguido en el contexto de la lucha de independencia.

En el tema de los derechos de las mujeres, la realidad no puede ser más desventajosa al comprobarse que Jalisco se encuentra ubicada como la tercera entidad con más feminicidios en el país, de acuerdo a la información del Observatorio Nacional del tema y del Comité Latinoamericana por los Derechos de las Mujeres (CLADEM); lo que se suma al ambiente antes señalado de una desprotección hacia derechos sexuales y reproductivos, basta recordar las declaraciones de Carmen Lucía Pérez Camarena, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, que en respuesta a la solicitud de agrupaciones feministas para que se declarara la alerta de género, la calificó de innecesaria debido a que la mayoría de las muertes de mujeres se debía al ambiente de inseguridad y de delincuencia organizada, lo que exhibe la ausencia de una cultura de género, de la cual indudablemente es responsable el Estado.

Sobre el derecho al medio ambiente, continuamos con la constante amenaza al Bosque del Nixticuil, así como a sus defensores y defensoras, ante el embate de desarrolladores sin escrúpulos pero con intereses manifiestos apoyados por el gobierno municipal de Zapopan, los cuales pareciera que no han entendido que la naturaleza ya es un patrimonio común de la sociedad y no sólo de unos cuantos, quienes a través de estudios de impacto ambiental o de licencias, terminan apropiándose de un bien ajeno.

La protección a la infancia se ha consolidado como parte de un discurso consistente pero vacío desde el poder político. No existe nivel de gobierno que pregone las bondades de su política pública, aunque la realidad supere en mucho esa ficción construida.

El municipio de Guadalajara actualmente se promueve como “amigo de la infancia” para certificar sus acciones a nivel internacional, mientras tanto organiza operativos como el llamado “rescate”, construido desde los pasillos del área de seguridad pública, ahora denominada ciudadana, cuyos resultados fueron solamente mediáticos, recaudatorios, violatorios al derecho a la privacidad de hombres y mujeres, con gran impacto en derechos de mujeres en situación de vulnerabilidad y sin ningún niño o niña rescatado, de eso que denominaron combate a la explotación sexual infantil y que finalmente cumplió con un objetivo no deseado: profundizar aún más el ocultamiento de esa realidad.

En ese caso tenemos nuevas políticas mezcladas con viejas prácticas que ya han sido observadas como violatorias a los derechos humanos.

En cambio, la sociedad de Jalisco fue testigo de la continua presencia de la trata de personas con fines sexuales, cuando policías del municipio de Tlajomulco de Zúñiga detuvieron a varios adultos, quienes fueron sorprendidos abusando de varias menores de edad que continuamente eran llevadas a sus fiestas, por cierto en uno de esos fraccionamientos que más bien parecen villas de abandono y de impunidad. La respuesta de una institución de la que se espera que procure justicia, fue inadmisibile en un estado donde existe emergencia para proteger a la infancia, se dijo que era imposible buscar una sanción penal para los responsables debido a los vínculos de “noviazgo” que encontró entre los adultos y las adolescentes, por lo que el resultado fue solamente consignarlos

por el “gravísimo” delito de robo, lo que desencadenó el reclamo del propio Presidente Municipal.

Dicho asunto, comprueba que en Jalisco no existen garantías para la infancia afectada por la explotación sexual provocada y realizada por adultos. Es necesario recordar que sigue vigente por similares motivos una averiguación previa en la Procuraduría General de la República, en la que se encuentran señalados varios adultos, entre ellos Tomás Coronado Olmos.

2) Defensa activa de derechos

Jalisco tampoco se encuentra ajeno por la lucha del derecho a la identidad y el territorio, reflejada en los pobladores de Temacapulín, pueblo con identidad y dignidad, que mantiene su lucha para no ser inundados por la existencia de un gobierno estatal que no consulta, no escucha y desacata las ordenes judiciales.

La dignidad de sus defensores y de aquellos que se han solidarizado con su causa, nos dice que finalmente los derechos humanos son una lucha ética que nos implica a todos y todas, por eso reprobamos la construcción de la Presa El Zapotillo y la persecución que desde las instancias de gobierno realiza contra pobladores y defensores.

En ese mismo sentido, explotó un conflicto añejo en Tenacatita, Jalisco, manejado desde el Gobierno de Jalisco como un asunto entre particulares que estaban en litigio, pero la realidad demostró que existían pobladores que desde hace décadas se dedicaban a la atención del turismo, contrario a su contraparte, una empresa que igual se dedica a proyectos inmobiliarios y además su representante es dueño de una corporación de seguridad privada.

La sentencia del tribunal, originó el desalojo violento de los pobladores con el consentimiento de la autoridad judicial que permitió incluso la restricción a la libertad de tránsito en una carretera que conduce a la zona e incluso en la playa, con el consentimiento de las autoridades estatales y federales. Vimos entonces a policías estatales cuidando propiedad privada e impidiendo el paso a zona que por la Constitución, debería ser pública.

Los pobladores afectados, algunos de ellos fracturados por los elementos policiacos, retomaron su defensa jurídica con la desventaja de haber perdido su patrimonio, mientras tanto los guardianes del orden consumían lo que sus negocios tenían e incluso se hospedaron ilegalmente en los hoteles.

El conflicto se agravó cuando elementos de la policía auxiliar que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y Readaptación Social, armados y que vigilaban el cierre de la carretera, agredieron a dos diputados federales y un grupo de periodistas que cubrían la visita de los legisladores, causándoles a varios reporteros lesiones de consideración. Finalmente se tramitó en la Cámara de Diputados un Juicio

Político en contra del Gobernador de Jalisco por su actitud omisa en el conflicto, la cual evidentemente ha sido constantemente violatoria de los derechos humanos.

En el tema de defensores, resulta preocupante las reiterados ataques al trabajo de Marco Von Borstel y Jade Ramírez, el primero como defensor de los pobladores de Temacapulín, y la segunda como periodista encargada de su cobertura, hechos repetidos ahora en Guanajuato, donde incluso personal del Instituto Nacional de Migración causó actos de molestia al defensor, aspecto que reprobamos y exigimos al estado una clara protección así como garantías hacia su labor.

Otro hecho lamentable, fue el supuesto robo ocurrido en las oficinas de la organización civil Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad AC (Codise), reconocida por su labor en favor de la diversidad sexual, el cual demuestra la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores y defensoras en Jalisco, hecho reconocido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, y que se ubica como el sexto lugar nacional con más ataques a defensores.

Los conflictos no resueltos desde el Gobierno estatal, ha generado un ambiente riesgoso para personas, organizaciones y movimientos que exigen el cumplimiento de una petición o la exigencia de un derecho, durante el año diversos movimientos han sido sujetos de restricciones como en el caso del conflicto con la comunidad de la Universidad de Guadalajara, o incluso detenciones con un claro abuso de la fuerza, como en el caso del Movimiento de Bases Magisteriales. En ambos casos acompañados de una cobertura mediática negativa para posicionar un mensaje equivocado al elemental derecho a la protesta social.

3) En torno a la inseguridad

En el escenario de la seguridad Jalisco ha dejado de ser una entidad tranquila, ahora figura en el mapa de la delincuencia organizada. Informaciones periodísticas la colocan en el séptimo lugar en homicidios cometidos en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico, muchos de ellos múltiples, como el ocurrido recientemente en Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores.

Las explicaciones mantienen esa tendencia estereotipada de que lo ocurrido proviene de dinámicas ajenas al estado, cuando en realidad reflejan una clara descomposición social y presencia cada vez más activa de diversos grupos de la delincuencia organizada en Jalisco, mientras que las respuestas efectivas no llegan por razones desconocidas.

Prueba de ello es la falta de actualización del sistema de justicia a la reforma constitucional, así como la propia parálisis del Poder Judicial del Estado motivada por conflictos de intereses, sobre todo políticos con su mismo Consejo de la Judicatura, instancia que debiera ser útil como contrapeso a dicho poder, pero que termina al igual que otras instituciones limitada y tomada por intereses ajenos a su función.

Como se aprecia claramente en este breve panorama, en Jalisco existe una crisis en la vigencia de los derechos humanos, provocada sobre todo por instancias que debieran garantizar su protección y ejercicio.

4) Pocos logros y muchas limitantes

Quizás el elemento más crítico y que refleja en mayor medida esta debacle, es la crisis de la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, perdida entre intereses políticos ajenos a su función, con un posicionamiento de defensa distante de la gran mayoría del sociedad, que difícilmente rinde cuentas y peor aún, con una fórmula de defensa ortodoxa y mediática que muy poco sirve al escenario actual.

Como organización de la sociedad civil, deseamos aportar elementos adicionales al diagnóstico a través de algunos de los temas y casos que llevamos en nuestro trabajo cotidiano y que buscan como dice nuestra misión, desactivar los mecanismos que detonan las violaciones a los derechos humanos.

La situación de impunidad no ha disminuido en nuestro país, sin embargo el esfuerzo de personas como la familia Rodríguez Licea nos marca el camino que debemos seguir para lograr el respeto a los derechos humanos.

En el año 2010, ese caso tuvo avances notables aunque insuficientes, ya que a petición de la familia de Néstor Alan Rodríguez Licea, se obtuvo la suspensión de ocho días sin goce de sueldo a la perito médico María del Socorro Méndez Herrera y los químicos Luis Antonio Guzmán Peña y Jesús Reyes de la Torre Villegas, así como cinco días de suspensión a José Luis Morales Ortiz, sin embargo no ha ocurrido lo mismo en la Procuraduría General de Justicia del Estado, ya que no se cuenta con información suficiente respecto al trámite de la supuesta averiguación previa, ni tampoco de la existencia de sanciones dentro del procedimiento administrativo 402/2009.

Nos parece importante continuar con el seguimiento del caso para que exista un verdadero deslinde de responsabilidades de los involucrados, al mismo tiempo vigilar el cumplimiento de las recientes reformas legales que buscan sancionar con mayor severidad a los conductores de autos en estado de ebriedad, puesto que si bien ha disminuido notablemente la incidencia de accidentes, se dejaron para después reformas que combatan la impunidad de las autoridades relacionadas con la investigación de los hechos.

Desafortunadamente hoy podemos decir que la Recomendación 30/2009 emitida hace un año por la CEDHJ, fue de poca utilidad por su contenido incompleto, obvio e ineficaz en la defensa de los derechos humanos.

5) Apuntes en torno a la militarización

Dentro del contexto nacional, encontramos un problema latente en el incremento de efectivos y operativos militares en todo el territorio mexicano; mediante los cuales, continúan registrándose señalamientos por violaciones de derechos humanos en contra de civiles. Tal como sucedió en Jalisco en el 2009.

El 01 de junio de 2009, entre las 12:00 y las 14:30 horas, alrededor de 30 elementos del Ejército mexicano ingresaron a la comunidad rural de Maltaraña y realizaron cateos o revisiones domiciliarias ilegales con el objeto –según comentaron- de buscar drogas y armas. Los militares, que omitieron identificarse o presentar alguna orden por escrito, indicaron a los habitantes que los cuestionaban que “se encontraban realizando un Operativo Nacional por órdenes directas del Presidente de la República”. En grupos de dos, tres o hasta cuatro elementos del Ejército ingresaron a decenas de domicilios sin un acta de cateo que justificara sus revisiones y en la mayoría de los casos el ingreso fue bajo amenazas de ingresar a la fuerza en hogares donde se encontraban únicamente mujeres y niñas.

El 07 de diciembre de 2009, los habitantes agraviados por los hechos descritos y denunciados en el Informe de Derechos Humanos de Jalisco 2009, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). La queja se tramitó en el expediente CNDH/2/2009/5942/Q a cargo de la Segunda Visitaduría de la CNDH.

La CNDH solicitó información sobre los hechos denunciados a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ). Dichas autoridades respondieron que no contaban con información respecto a lo denunciado ni con antecedentes sobre averiguaciones, respectivamente. Asimismo, le fue solicitada información a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Jamay (DSPJ), Jalisco, puesto que acudieron a encontrarse con los elementos militares al haber tenido conocimiento de los cateos ilegales que se encontraban realizando en la comunidad. Estos hechos fueron descritos en el escrito de queja puesto que, al parecer, habían recabado información que identificaba a la unidad de las fuerzas armadas, cuyo personal participó en los cateos ilegales y otras violaciones a los derechos humanos de los y las habitantes de Maltaraña. Con ello, se logró conocer que fue el personal del Batallón 97 del Distrito Federal el responsable de la incursión militar en la comunidad el 1 de junio de 2009, por lo que la CNDH les solicitó información como autoridad presunta responsables.

El 17 de marzo de 2010, la visitadora de la CNDH, Norma Elena Díaz, encargada de la integración de la queja y un psicólogo como su acompañante, realizaron una visita a la comunidad para determinar el daño y recopilar los testimonios de los y las pobladoras, lo que originó que fueran revictimizadas al obligarlas a revivir experiencias

indeseadas que afectan su integridad. Sobre todo al considerar que se trata en su mayoría de mujeres, adultos mayores y niñas.

Hasta donde se ha podido obtener información y aun sin confirmación oficial, en octubre de 2010, siete meses después de la visita a la comunidad, la CNDH envió la propuesta de conciliación a la SEDENA a espera de su aceptación. Dicha propuesta careció de previa consulta a las víctimas en su elaboración, planteamiento o formulación, así como de vista previa a ser propuesta.

En noviembre de 2010, de manera informal se nos comentó que la propuesta de conciliación había sido aceptada por parte de la Sedena donde se establecía el inicio de procedimiento penal y administrativo de quien resulte responsable de los actos denunciados, así como la reparación del daño psicológico a quien se le hubiere causado, conforme a los dictámenes realizados por el psicólogo durante la visita del 17 de marzo de 2010.

Sin embargo, ni las y los habitantes de la comunidad de Maltaraña, ni sus representantes ante la CNDH hemos sido notificados o tenemos conocimiento completo de la propuesta de conciliación por las violaciones a los derechos humanos de mujeres, niños, niñas y personas de la tercera edad perpetradas por elementos militares el pasado 1 de junio de 2010. Por tanto, no podemos referir si la propuesta de conciliación atiende a la naturaleza del caso y a la gravedad de los daños sufridos por las víctimas.

El presente caso da cuenta de la deficiente respuesta tanto de las autoridades como de los organismos encargados de velar por los derechos humanos de las personas en un contexto de militarización que año con año se ha venido agravando. En cifras de la CNDH, se da cuenta de la situación con las 4441 quejas presentadas en lo que va de la presente administración en contra de elementos de la Secretaría, 439 quejas en trámite y 831 concluidas en lo que va del 2010¹, y las 34 turnadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco a la CNDH por casos registrados en la entidad². Estas últimas, referentes al periodo enero-octubre del 2010, mientras que en el periodo enero-julio 2009 se habían presentado 15 ante la CNDH³.

Asimismo, es importante mencionar que México también es objeto de observancia internacional mediante las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos donde se involucra como responsables a militares. En dichas sentencias se obliga al estado mexicano a adecuar sus marcos normativos respecto del fuero militar con los estándares internacionales en la materia, con el fin de garantizar que las personas víctimas de violaciones de derechos humanos cuenten con recursos adecuados y efectivos para impugnar la competencia militar en investigaciones realizadas en casos como el de Maltaraña y los enunciados en las sentencias de Rosendo Radilla⁴, Inés Fernández⁵ y Valentina Rosendo Cantú⁶.

6) Nuestras intenciones

Para el 2011, como organización nos proponemos profundizar nuestro trabajo para lograr cada vez más registros y documentación independiente de casos de violaciones a los derechos humanos, como una aporte para su defensa y para impulsar la construcción de alternativas para las propias personas y la sociedad, sobre todo ante un escenario desalentador de las instituciones que deberían ofrecer respuestas efectivas.

Para fortalecer la esperanza, citamos la invitación de la sociedad civil Las Abejas a la conmemoración de 13 años de la matanza de Acteal:

“Sabemos que unid@s, somos luz como siempre hemos señalado en nuestros comunicados, podemos apagar la impunidad y encender la justicia y la paz en nuestros pueblos originarios donde ha hecho tanto daño el mal gobierno.

Nuestra lucha es constante como el viento que nos sopla la vida, y es diaria y continua como el ciclo de la siembra de la milpa”.

Bibliografía y citas aclaratorias

1. Portal Secretaría de Defensa Nacional. Derechos Humanos. Consultado el 2 de diciembre de 2010, disponible en: http://www.sedena.gob.mx/pdf/otros/der_hum/GRAFICASQUEJAS081210.pdf
2. “Iniciativa para eliminar fuero militar debe consensuarse: CEDHJ”. El Informador, nota del 10 de octubre de 2010. Consultada el 2 de diciembre de 2010. Disponible en: <http://www.informador.com.mx/jalisco/2010/240215/6/iniciativa-para-eliminar-fuero-militar-debe-consensuarse-cedhj.htm>
3. Respuesta de CNDH a solicitud de información. Expediente 2009/659-T, oficio 36899, México DF, 14 de agosto de 2009.
4. Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.pdf
5. Corte IDH. Caso Ortega Fernández y otros vs México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf
6. Corte IDH. Caso Rosendo Cantú y otra vs México Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie C No. 216. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf

“ACOSTÚMBRATE, ASÍ ES ESTO”

De periodista a víctima: la incómoda
y laberíntica circunstancia de vivir
bajo amenaza.

Jade Ramírez Cuevas Villanueva

Era una noche de celebración. Se trataba de una noche para confirmar que la defensa era legítima, que la provocación de las autoridades locales de “vivir la última Semana Santa en Temaca” podía apagarse con una asamblea comunitaria a la luz del día, ante los ojos y oídos de todos aplicando vigor y definición al no interrumpir las ceremonias religiosas, ni la bajada al río para disfrutar la primavera, ni la felicidad de estar con Hijos Ausentes. Yo estaba ahí solo para constatar con mi grabadora en una crónica radiofónica, que esas personas no se iban a salir, que más que nunca defendían sus costumbres, sus fechas emblemáticas y el recinto que les da sentido y cohesión: la Basílica de la Virgen de los Remedios. Los discursos habían salido muy bien. Nadie había fallado en comunicar su posición de rechazo al proyecto que les viene quitando el sueño y, por el contrario, Temaca festejaba que era la primera de las próximas Semanas Santas que vivirían pero fuera de la pesadilla de la presa. Y ahí aparecieron los tres enviados, uno a uno cumplieron con las órdenes recibidas de ir al pueblo para provocar la ira, desesperación y violencia esa noche. Trataron de que todo pareciera un asunto personal, nos habían estudiado bien, pero se equivocaron, en Temaca no se iba a romper ese 3 de abril de 2010, el pacto orgulloso de las siete décadas libres de balazos, violencia y pleitos callejeros. Me hostigaron sí, me acosaron e intimidaron sexualmente sí, me amenazaron sí, increparon en más de tres ocasiones con suma insistencia a mi compañero solidario Marco, le dijeron recio y quedito que “mejor irse por terracería que por carretera” porque “Jalisco es Uno y había que respetar eso”, que “Se iba a inundar el pueblo, la presa se haría y había que respetar la palabra del gobierno”. Todos estuvimos alertas en ese momento y no compramos la idea de enfrentamiento. Iban con todo desde luego, debían cumplir el cometido de atacarnos, les falló el acto y al tiempo, confirmaron con llamadas en la madrugada a domicilios particulares y oficinas, con un email señalándome como reporterita pendeja, con presencias sospechosas y hostigamiento de diversa fuente su apuesta de aniquilarnos.

Una de las razones por las que existe lo que algunos denominamos periodismo social o sociocultural y que aún sigue siendo necesario privilegiarlo en los espacios informativos ya sea de radio, prensa escrita o televisión, es porque se busca un impacto que detone la transformación de circunstancias y conductas en la sociedad que alteran por completo el respeto a los derechos básicos. En un marco donde la justicia, la ley y aplicación razonada de políticas públicas en la materia que elijamos, han perdido peso y cualquiera puede violentar normas o reglas sin consecuencias, sin penas por pagar ni cuentas a rendir, el papel que juegan los medios de comunicación es muy importante para la construcción de una sociedad respetuosa, democrática, sana, incluyente.

El objetivo primario del seguimiento periodístico a partir de casos concretos o de una historia que nos cuenta un cuento increíble de razonar sobre denuncia, acoso, violación de derechos humanos, injusticia o alteración de pactos políticos y reglas basadas en la ilegalidad, es que el otro, que muchos otros, se informen y formulen una posición al respecto. De la simple historia que bien puede quedar como anécdota, viene el paso de la investigación y sistematización del rompecabezas de mil unidades que hilvanadas por una misma aberración social, construyen paradigmas que posibilitan la generación de conocimiento o sencillamente, la evidencia del acto y solidaridad, para ponerse en los zapatos de otros y entender la complejidad de la descomposición social hoy día.

Pero que los medios de comunicación y específicamente el periodismo social y cultural se adentren y catalicen muy aparte de la agenda cotidiana en temas de denuncia, no asegura que lo anterior suceda. Por el contrario, antes de ser debe ganar una batalla interna entre mesas de redacción y jefaturas de información que, bajo el modelo de oferta-demanda, compren la historia, la iniciativa o la idea y acepten el seguimiento informativo de una denuncia. Aun así, en temas de discriminación, injusticia, devastación medioambiental, desplazamiento o despojo, abuso de autoridad, estigmatización de diferencia, convivencia sana, privación de la libertad, imputación de sentencias a modo, entre un larguísimo etcétera, cada vez más, encuentran espacio, seguimiento y compromiso por parte de reporteros y responsables de espacios noticiosos.

¿Pero qué sucede cuando le sucede lo que no debe suceder a un periodista?

No estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada con la persona equivocada. Había terminado de trabajar, estaba en el uso de mi tiempo libre conviviendo con referentes informativos que dejan de ser fuente para convertirse sencillamente en personas con las cuáles también se puede interactuar. No coquette con nadie, no autorice el acoso, no provoqué nada. Pero ahí estaba, acorralada en la barra de un billar con dos individuos frente a mí a diez centímetros de distancia, uno 85 centímetros más alto que yo, otro escupiéndome en el rostro al hablarme e imponiéndome lo desfigurado de su cara, manos, ojos, cuello, dientes por algún tipo de enfermedad gozando mi mirada de miedo. No tuvieron paciencia, en menos de tres diálogos

con monosílabos de mi parte, vertieron en mí una ráfaga amenazante respecto al tema de la presa al que doy seguimiento sobre todo, en las aristas de afectación al patrimonio cultural, fenómeno antropológico y políticas públicas sobre bienes de interés común dentro del más amplio y abarcador concepto de cultura. Revelaron sin pena que habían estudiado mi circunstancia en el pueblo. Tomaron cigarrillos de mi cajetilla sin preguntar, los aventaron de nuevo a la barra, y dejaron que mis ojos emitiera una llamada de alerta a quien también andaban buscando.

La vulnerabilidad no cesa. No es un efecto que progresivamente se aparece en la vida de una persona a quien le han quitado o violentado sus derechos. Por el contrario, en una sola descarga desde múltiples fuentes de emisión –no sólo los agresores son autores de la vulnerabilidad de un individuo-, se presenta la rudeza humana y la terrible sensación que provoca estar cerca de una víctima porque a nadie le gusta serlo, pero tener que rozarse con una es mucho más incómodo que dar el pésame a una viuda.

Lamentablemente no hay un denominador común sobre la manera en que reacciona un periodista después de recibir una amenaza de muerte, más una larga cadena de actos concatenados al mismo hecho y una confirmación de la primera declaración de guerra, menos si en su trayectoria es la primer vez que sucede. Se trata del analfabetismo del caos en el que transitamos los periodistas o al que sanamente decidimos rendirle culto. Podemos ser testigos, dar fe, narrar, capturar un momento precoz o voluntario por muy crudo que sea, para convertir en palabras lo que oídos, ojos y percepción recibe de la realidad y contarlo a los otros, pero hemos vivido en toda la existencia del ejercicio periodístico entendido como profesión, anulando una realidad que ya no se quedó en el oscurantismo o los mitos del periodismo en México, sino es una cotidiana condición de vida: trabajar bajo presión y amenaza constante de muerte o afectación a la integridad física de uno mismo o los nuestros, por revelar información que a todas luces, a unos no favorece.

Las redacciones y estructuras organizacionales de los medios de comunicación no han resuelto, por voluntad propia, cómo proteger y crear una zona segura para sus trabajadores, no sólo en términos de muerte, sino de mínimas condiciones laborales, de salud, de prestaciones, de diálogo reparador de desencuentros. Los periodistas hemos pasado a ser la prostituta menos respetada que lo mismo redacta una fuente un día y es movida por castigo o consecuencia a otra sin previo aviso, el sujeto desprendido de su empleo por diferencias ideológicas o editoriales, el personaje desfigurado por sublevarse con apelo a la transparencia o igualdad de condiciones. No hemos sabido cómo poner fin a los mundillos del poder detrás del poder de facto que da el sólo hecho de laborar en un medio de comunicación. Si hay buena suerte, un periodista amenazado es desdibujado, si hay un marketing detrás el reportero, camarógrafo o técnico que salva su vida después de un atentado, se convierte en producto de extraña calidad que se puede vender bien.

Y es entonces cuando al convertirse en víctima de violaciones de derechos humanos, recibes la estigmatización y trato común de la sociedad: lejanía, diferenciación, indiferencia, señalamiento, persecución, falta de protección y atención integral, pero ahora desde la casa, desde el mismo medio o colectivo del que formas parte. Los silencios valen más que las palabras en un sin número de circunstancias y conceden incógnitas no resueltas que se traducen en molestia, en problemas. Si dentro de una pareja de amorosos no preguntarse adecuadamente “¿cómo estás?” o “¿qué es lo que sientes?”, detona inverosímiles batallas, entre los medios de comunicación al interior y fuera de los mismos no hablar de las deplorables condiciones en las que se está ejerciendo el oficio todos los días e ignorar que tiene entre sus filas a un trabajador bajo amenaza de muerte, se vuelve más delicado que la corruptela de influencias y amiguismos que caracteriza en diferente tipo u orden a los medios de comunicación a nivel local, estatal y nacional.

¿Cómo responde la estructura orgánica ante casos de persecución, acoso, amenaza y hostigamiento a periodistas?

En medio de lo sórdido del momento, no te desprendes del olfato que requieres para tu oficio y consigues una exclusiva. Los ánimos están más que calientes, están esperando una respuesta en falso o un oficial “sí” de su otra víctima para bañar de sangre el lugar. Los otros testigos contienen en sus miradas el coraje de lo que sucede aunque parezca que siguen jugando en las mesas del billar, pero logras una fotografía de los atacantes lanzándote como carne de cañón. Eres la única mujer y eres la mujer que están buscando esos tres enviados que se presentaron como supuestos empleados federales ante ti; sin mucho pensar decides hacerlo en coordinación con tu compañero solidario. Pides una fotografía de grupo y acceden. El tercer enviado sólo vigilaba que hicieran bien su trabajo sus compañeros de ataque se pone a tu lado, te neutraliza apretando su mano derecha sobre tu cuello. Piensas en decirle que te extraña su actitud, intentas moverte pero ni siquiera alcanzas a decir “no”, él te voltea la cabeza al lente y te dice con la mirada de impunidad aprovecha tu idea y registra nuestro rostro. Antes del click acerca a ti a la altura de las nalgas, algo que no tiene vida pero sí sabe cómo quitarla. La textura no era la de un objeto orgánico, se trataba de otro tipo de material que calaba más fuerte en la cadera y te empujaba a no moverte. Lo estaba sosteniendo desde adentro de su pantalón con su mano y no estaba integrado a su cuerpo, no era otra acción de acoso sexual, era un arma que dejaba un último mensaje de ni te muevas que esto va en serio

De 67 homicidios en 10 años, 11 desapariciones inexplicables y no documentadas, sólo 3 casos han sido investigados en la década y 10 homicidios contra periodistas se han cometido en menos de 7 meses este año¹. Las cifras pueden variar según el estado, la localidad, el medio, el cartel, el periodo político, la zona que llaman de riesgo, pero el caso es el mismo: no hay una actitud colegiada entre autoridades locales, estatales y

federales que muestre la mínima voluntad por descubrir el hilo conductor que ha llevado a estos actos. Y es que si en buena cantidad de casos las autoridades están inmiscuidas en actos de ilegalidad ¿por qué querrían respetar y terminar una averiguación previa sobre acciones con la prensa mexicana?

A las horas de asimilar el impacto, logras percibir mejor cada sensación que se presenta en el estómago. No es hambre, no es dolor, nos es angustia, es miedo. Seguir sonriendo y no romper con el ritmo habitual después de recibir una amenaza de muerte es sin duda una de las reacciones clásicas de la víctima, pero aunque seas un experto en actuación, develas inquietud ante otros. Quizá por ello al interponer las denuncias consecuentes de los actos, en la instancia federal, la Delegación de la PGR en tu localidad te brindan la sensación de haber llegado al mejor spa del país: te saludan con cordialidad, rinden reverencia por tratarse de un representante de los medios de comunicación y facilitan los pasos caóticos para formalizar una averiguación previa. Caso contrario a la autoridad estatal que sin acongojo recibe la denuncia y al percatarse que se cuenta con fotografías de los presuntos empleados federales, contienen las ganas de tronarte en ese momento pero no dejan entrever el más mínimo interés por tu circunstancia.

Pasas de ser el reportero de la fuente determinada, a la periodista amenazada, la compañía incómoda y una ciudadana más que apela al funcionamiento de las estructuras gubernamentales para que basados en la neutralidad de su naturaleza, se focalicen hasta las últimas consecuencias a determinar apegados a la realidad, qué fue lo que aconteció, quiénes lo hicieron, por qué motivos, cuáles son las consecuencias y cómo pagarán su castigo. Si bien le va a un periodista y defensor de derechos humanos amenazados de muerte, alguien cercano sugiere capacitación respecto al tema, terapia psicológica.

Miguel Ángel Granados Chapa, periodista que conserva íntegro su honor como periodista, al solidarizarse con la iniciativa **Los Queremos Vivos** que llevó a cabo en 2010 la primer marcha de periodistas en repudio al clima de delincuencia que se vive desde el oficio para rendir homenaje a los compañeros muertos, secuestrados y desaparecidos en la reciente década, se hizo presente en lo que ya pasó a la historia como el día mítico en que los reporteros se unieron en una misma voz sin camisetas ni firmas corporativas en la Ciudad de México y 12 ciudades del interior del país, para decir **Los y Nos Queremos Vivos**. No fue el único de su estirpe, pero sí quien puso el dedo en la llaga: *“no necesitamos más instrumentos para la resolución de actos que atentan contra los periodistas, sino que las que ya existen como la averiguación previa sean atendidas y respetadas por el Ministerio Público como parte de una investigación”*.

México cuenta desde 2006 con una **Fiscalía Especializada para la atención de Delitos cometidos contra Periodistas** y antes de cambiar de nombre este 2010 a **Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión**, no ha presentado el más mínimo informe o avance de provecho que cambie las condiciones cotidianas en las que se ejerce el periodismo. Se ha presentado el

Convenio para la Implementación del Mecanismo de Protección a Periodistas entre la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero al acto no fue invitado ni requerido un solo representante de los periodistas, lo cual, dista de lo que podría interpretarse como la señal vigorosa de respeto al gremio, por tanto su funcionalidad continúa apegada a la discrecionalidad distintiva de los gobiernos actuales, aunado al cabildeo que empresarios y dueños de medios de comunicación sostienen con el ejecutivo federal lejos de las opiniones y posiciones que sus empleados, los periodistas y reporteros tienen al respecto.

¿Qué alternativas quedan para el gremio ante el escenario sórdido y sordo de los contextos post amenaza?

Confesarte que no estoy acostumbrada a las entrevistas y en específico a las de este tipo no sirve de mucho, brincar de ser figura pública felicitada a nota roja o de denuncia no es nada cómodo, pero esta circunstancia ahora me ha permitido, por un lado, aprender algo que puedo aplicar de inmediato en mi ejercicio periodístico y es que me doy cuenta que los reporteros preguntamos lo mismo siempre y, por el otro, que sí hay solidaridad dentro del gremio que viene de colegas que no conoces, viven en otras ciudades, no comparten línea editorial y mucho menos conservan contigo una amistad pero sencillamente están igual de hartos que tú del ataque y violencia a los medios de comunicación y desde sus trincheras te abrazan y acompañan.

Dentro de la realidad que cambia abruptamente, luego de procesarla en lo individual y aislar los arranques de paranoia y miedo lo más posible, se reconfiguran las relaciones personales, se consolidan redes creativas, se destruyen algunas otras y descubres nuevos grupos que sin conocer previamente tu historia apelan al sentido básico de hermandad y te cobijan. Al aprender cómo se vive bajo amenaza de muerte, te sitúas en la realidad que tantas veces has cuestionado, narrado y documentado dentro del periodismo, te desprendes de la soberbia o viejas percepciones y apegos materiales para continuar trabajando pero cuestionando en todo momento cómo se ejerce el oficio, como ha sido tu desempeño; estos podrían considerarse livianamente resultados positivos de la lamentable situación de la amenaza. Pero aparece la incongruencia y la deuda ética cotidianamente dentro de la profesión cuando por años, te has esmerado y comprometido a promover desde las herramientas que brinda el seguimiento periodístico a un acto de injusticia representa, para afirmar que es vital denunciar, preciso quejarse, urgente no claudicar en los procesos legales que implican la burocracia y procuración de justicia en este país. Exhortas a la confianza en ciertos organismos que se han convertido en la última voluntad institucional para reparar un daño administrativo y que quede consignado para sentar un precedente, pero esas mismas instancias acortan su aliento ante casos paradigmáticos donde un defensor de derechos humanos y una periodista

pasan de observadores a víctimas. El liviano “acostúmbrate, así es esto” como resultado de un diálogo con representantes oficiales del respeto y procuración de los derechos humanos en el estado –mismos que a los cuatro meses permitieron se desechara la queja interpuesta en la CEDHJ-, se volvió la más potente respuesta a la pregunta ¿qué sigue y qué le toca vivir al ciudadano cuando es despojado de sus derechos por individuos y gobiernos?

Protocolos de seguridad, alianzas, acompañamientos legales, confrontación y análisis de la amenaza, percepción de actores y factores amenazantes, son nociones o conceptos que han pasado de ser lenguaje aplicable a ciertos casos de seguimiento periodístico a herramienta de vida con la que un periodista y un defensor de derechos humanos cuenta, toda vez que ya son estadística bajo todos los números que los representan en la queja estatal, denuncia penal, averiguación previa nacional. Es la nueva manera de vivir bajo amenaza de muerte por cumplir con cometidos laborales, idearios, compromisos éticos y aficiones sobre el buen desempeño de sus oficios que curiosamente como sucede con los casos e historias que les toca documentar y demandar sean resueltas: no venden. En Jalisco el nuevo deporte que va a desplazar al fútbol es el desconocimiento y vulneración de los derechos humanos, pero acostumbémonos, así es esto.

Bibliografía y citas aclaratorias

1. Las cifras provienen del conteo divulgado por el movimiento social a favor de los y las periodistas denominado “Los Queremos Vivos”

VIH Y DISCRIMINACIÓN:

El estado actual desde la experiencia

*José Manuel Salcedo Alfaro, coautoras Cecilia Pedroza Veloz,
Bertha Venegas Camarena y coautor David Arteaga Godínez
Mesón de la Misericordia Divina A.C.*

Introducción

En 1981, cuando se identificaron los primeros casos de Sida, innumerables medios de comunicación informaron al mundo entero la existencia de una enfermedad mortal y sufrible, propia de la población homosexual. Por consecuencia, algunos sectores le llamaron inmediatamente “la enfermedad rosa”, formando la creencia, fuertemente arraigada, de que ésta era una enfermedad propia de dicha población siendo la causa sus estilos de vida desordenados. La discriminación, producto del estigma y el prejuicio, acompañó a la enfermedad y a quienes la viven en un fenómeno que mundialmente se le reconoce como *la segunda pandemia*.

Posteriormente, la discriminación formó parte de la vida cotidiana de las personas que padecía los efectos de la enfermedad, puesto que quien vivía con el virus era inmediatamente señalado y acusado de haber cometido actos deshonorables, sin conocer siquiera su historia. La negación de servicios médicos y de educación, la imposibilidad de obtener trabajo o la supresión del mismo, la negación del acceso a lugares públicos, su expulsión de grupos sociales incluyendo a las propias familias, entre otros, caracterizaban las vidas de aquellos destinados al oprobio y la segregación. El silencio, pieza clave en todo acto de discriminación, forjó en gran medida ésta realidad; ahora era más difícil denunciar la discriminación y la violencia que sufrían ya que evidenciaba a quien vivía con el virus, siendo más vital para un cuerpo desgastado el mutismo y la negación.

Es por ello que, en el contexto de los Derechos Humanos, se realizaron diferentes declaraciones que hacían énfasis en las distintas garantías constantemente violentadas, surgiendo de esta manera la Primera Consulta Internacional sobre el SIDA y los Derechos Humanos realizada en julio de 1989 en Ginebra, por el entonces Centro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Programa Conjunto de las Naciones

Unidas sobre el VIH y el SIDA (ONUSIDA)¹ en donde se estableció el acuerdo de elaborar directrices que permitieran orientar a las autoridades en el cumplimiento de las normas internacionales de los Derechos Humanos relacionados al VIH y Sida².

En 1996 se celebró la Segunda Consulta Internacional sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos en Ginebra durante el mes de septiembre de 1996. En ella se establecieron directrices orientadas a: 1) Establecer los fundamentos contenidos en una respuesta a la problemática del VIH y del Sida desde los Derechos Humanos y; 2) Elaborar una serie de medidas prácticas que los gobiernos pudieran recuperar para aplicar en sus diferentes áreas de trabajo³.

El VIH y el Sida siguen siendo un problema de salud pública que desafía a la sociedad en su conjunto, demandando respuestas eficientes bajo un esquema de respeto a la dignidad humana. Sin embargo, la realidad evidencia que pese a los esfuerzos realizados la necesidad de seguir articulando la discriminación en el contexto de la enfermedad y los Derechos Humanos tiene carta de actualidad. A casi treinta años de haber identificado los primeros casos, y de las primeras emisiones que delataban su existencia, los actos discriminatorios y el temor a vivirlos forman parte de nuestra cotidianidad.

En ese sentido, hemos procurado recuperar diferentes casos que han llegado a nuestra organización, el Mesón de la Misericordia Divina A.C., para mostrar a ustedes un ejercicio sobre el estado actual del VIH y el Sida y los Derechos Humanos, con el propósito de seguir evidenciando su existencia y relación con las limitaciones en la construcción de una *respuesta social efectiva*. Así pues, partimos del principio establecido en la declaración Universal de los Derechos Humanos que bajo ninguna circunstancia se dejará de respetar y garantizar a todos los individuos el acceso los derechos reconocidos en dicha declaración, sin importar su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política y posición social, origen nacional o cualquiera otra condición social que vulnere su dignidad y ponga en riesgo su integridad física y moral.

Algunas citas epidemiológicas

En México el primer caso de SIDA fue diagnosticado en 1983, en la actualidad el Centro Nacional para Prevenir el VIH y Sida (CENSIDA)⁴ según su informe 2010 estima que existen 225 mil personas viviendo el virus, de los cuales el 29% está recibiendo terapia antirretroviral, el 14% ha sido detectado pero no necesita aún del tratamiento y el 57% ignora su condición VIH positiva. Desde el inicio de la pandemia hasta la actualidad el CENSIDA ha registrado de manera acumulada 143,281 casos de Sida, donde el 82.2% son hombres y el 17.8% son mujeres. El rango de edad más vulnerable está entre los 25 a 34 años de edad, siendo la principal vía de infección la sexual con más del 90% de los casos.

El acceso universal al tratamiento antirretroviral es una estrategia mundialmente reconocida como prioritario en la respuesta a la pandemia para lograr la atención y prevención. De ahí que el gobierno federal dispone del Programa Universal de acceso al tratamiento antirretroviral donde cualquier persona puede acceder a la atención y abasto del medicamento de manera gratuita.

El derecho a la educación

El Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipula que “Los Estados Partes del presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”⁵. La educación es un elemento primordial para el desarrollo social y personal, por lo que su privación limita las posibilidades de crecimiento y adaptación al entorno. Actualmente, los casos de discriminación documentados en niños dentro de sus escuelas refieren la incapacidad del sistema educativo para ofrecer condiciones dignas a niños y niñas con VIH. Los casos que aquí compartiremos sucintamente adolecen de la capacidad institucional en el manejo de la información confidencial y discriminación por VIH.

Graciela es madre de Pablo, quien estudiaba en una escuela primaria con un desempeño destacado. Ella, después de un accidente que éste tuvo decidió comentar su enfermedad con el director, con la preocupación de no exponer a ninguna otra persona a la infección. No obstante, la reacción de la escuela, lejos de ser comprensiva y profesional, fue discriminatoria. La maestra se enteró y separó a Pablo dentro de su aula de clases evitando cualquier interacción con el resto de sus compañeros y compañeras, asumiendo una actitud indiferente a sus tareas y trabajos. Los efectos no tardaron en aparecer con la baja en las calificaciones y la disminución del deseo de acudir a clases. La reacción del plantel fue de rechazo ante cualquier posibilidad de capacitar al personal y con la firme intención de hacer lo posible por facilitar el cambio del menos a otra escuela.

Otro de los casos, también dentro del entorno escolar, hace referencia a un problema de confidencialidad. La Sra. María decide cambiar a su hijo Alejandro a una escuela de educación especial debido a las necesidades físicas que el pequeño tenía. Al presentarse a la psicóloga, quien haría la entrevista, le compartió el diagnóstico de VIH; ésta, en vez de continuar con el proceso decidió profundizar en la causa y los medios por los que se infectó. Posteriormente y al cabo de unos días el personal docente e incluso de intendencia tenían conocimiento del caso, asumiendo una actitud hostil y presionando a la dirección para que diera de baja al menor, argumentando el riesgo al que eran puestos el resto de los estudiantes.

Finalmente don José, quien había asumido el cuidado de su nieto después de la muerte de sus padres, acudió a la escuela para recibir la petición del director de ya no llevar a Aldo a la escuela por el resto del periodo escolar, al que le quedaba poco tiempo para concluir sus estudios de secundaria. La escuela enviaría al adolescente las tareas para que las realizara en casa y sólo asistiría para presentar los exámenes parciales. Lo anterior después de que el director viera al pequeño jugar a *las luchas* con otros compañeros.

Así como estos casos, durante los dos últimos años atendidos en la institución y que aquí se presenta sólo con una breve descripción, existen otros tantos que suceden sin ser identificados y resueltos adecuadamente. La discriminación perceptible en éstos casos, expresa la incapacidad del sistema educativo para enfrentar de manera consciente e informada la situación de un alumno con VIH. Se esperaría de la escuela, y sobre todo del personal docente, competencias adecuadas para la inserción de niños y niñas con éstas condiciones o bien la habilidad para obtener información científica y veraz para una mejor decisión. Aunque no ha sucedido así en todos los casos que tenemos de niños y niñas que estudian, se siguen presentando la discriminación en el ámbito educativo.

El derecho al trabajo

El derecho al trabajo es considerado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 donde señala que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”. Si consideramos que un empleo digno salvaguarda las condiciones de vida de una persona, cualquiera que ésta sea, al proveerle de elementos suficientes para solventar sus necesidades y contribuye sustancialmente al desarrollo personal y social de todo individuo (que se traduce en un medio de subsistencia) éste derecho resulta fundamental para cualquier sociedad.

No obstante, vivir con VIH se ha convertido en razón suficiente para quebrantar dicho principio. La solicitud de estudios como condición para ingresar a la empresa, siendo el de VIH indispensable para tal propósito, y los estudios, algunas veces disfrazados bajo otros propósitos, durante la estancia laboral, son expresiones de políticas laborales que buscan segregar al personal que padecen dicha enfermedad bajo dos justificantes: El supuesto peligro de *contagio* al tener dentro de su planta laboral a personas con VIH y la falta de capacidades para desempeñar el oficio.

Lo anterior se ejemplifica en diferentes casos que coinciden en sus prácticas institucionales: Juan es empleado de una tienda departamental que aspira a ascender y conseguir la planta. Para ello le es requerido el estudio de VIH, mismo que después de un tiempo recibe sus resultados por conducto del médico de la empresa. Juan no

tenía conocimiento de su situación y recibe de manera sorpresiva la noticia: había dado positivo a VIH. El médico comparte la noticia con el gerente y determina la decisión respecto al futuro laboral de Juan. Él no recibió la planta y contrario a ello se le notificó que la empresa no estaba haciendo contrataciones, situación que fuera desmentida por Juan cuando logró constatar lo contrario. El rechazo se debió a su situación positiva.

Una persona que vive con el virus del VIH puede controlar su enfermedad y desempeñar ciertas actividades sin menoscabo a su salud. Por ello resulta incomprensible una decisión de tal naturaleza: ¿qué alternativas de vida digna puede tener una persona que vive con el VIH si no tiene posibilidades laborales? ¿Cuántos casos más existen de empresas que ejecutan similares procedimientos? Algunos son de nuestro conocimiento y otros más permanecen en el anonimato. Lamentablemente forman parte de lo cotidiano y desaparecen bajo su sombra.

Las empresas que utilizan los procedimientos antes dichos tienen como propósito la separación de la fuente de empleo y no la promoción del respeto y el cuidado de la salud. La Organización Internacional del Trabajo, consciente del fenómeno y sus implicaciones para quienes viven con el VIH, emitió en el 2001 una serie de recomendaciones para el ámbito laboral. En ellas expresa la necesidad de promover en las empresas la prevención y brindar condiciones favorables para que las personas que viven con el virus tengan lo necesario para el cuidado y atención de su salud⁶, logrando una vida más longeva y productiva.

El derecho a la salud

El Derecho a la Salud se encuentra contemplado dentro del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como también en la Constitución Política Mexicana, mismos que consideran su importancia y trascendencia como parte fundamental de la vida de una persona, ya que de no hacerlo se pone en riesgo de muerte.

El VIH y Sida es una enfermedad de alto índice de mortalidad si no se cuida y atiende oportunamente. Según el CENSIDA durante el 2009 fallecieron en nuestro país 4,831 personas a causa del Sida y en el 2010 han muerto por esta misma razón 4,8807 a pesar de tener el Programa de Acceso Universal. Por éstas razones resulta fundamental el cuidado del derecho a la salud, pues teniendo los beneficios actuales la negación del mismo se traduce en prácticas discriminatorias que vulneran la integridad física y psicológica de las personas exponiéndolas a la muerte o a padecimientos agónicos. En éste sentido podríamos ofrecer al lector una amplia variedad de casos, sin embargo por cuestiones prácticas enfatizaré solamente algunos de ellos.

La discriminación en el sector salud ha sido, paradójicamente, muy recurrente. La desinformación, los prejuicios sociales y la burocracia han entorpecido la acción eficaz como se comparte a continuación. Los primeros dos casos hablan de dos extranjeros que por diferentes razones deciden vivir en el país. El primero de ellos es oriundo de Centroamérica, del cual sólo recuerda algunas imágenes y muy pocos datos ya que desde hace más de treinta años habita ilegalmente en México. A sus casi 45 años de edad se declara más mexicano que los mexicanos pues ha vivido en diferentes Estados y ha recorrido la mayor parte del país. Enrique recibió el diagnóstico de VIH en condiciones que no le permitían recibir una atención adecuada pues su mayor dificultad ha sido la carencia de papeles que acrediten su identidad y nacionalidad. Su vida ha sido en las calles y se ha dedicado al sexo comercial. En octubre del 2010, fue ingresado al hospital donde recibió atención médica y logró estabilizar su salud después de un proceso prolongado de recuperación. Aunque ha recibido el tratamiento antirretroviral de manera irregular, Enrique recibió en varias ocasiones la amenaza de deportación debido a su condición de *ilegal* y el rechazo a la prestación de servicios médicos por su condición de extranjero.

Otro caso similar lo encontramos con un sudamericano de nombre Jorge, quien llegó al país hace casi cuatro años. Forma una familia y en febrero del 2010, junto a su pareja, recibe el diagnóstico de VIH. Su salud declina y es hospitalizado en marzo del mismo año, situación que logra superar después de recibir la atención médica. Cuando concluye su proceso y es “dado de alta” lo derivan a valoración⁸ donde se le informa que por no contar con Seguro Popular no le será entregado su tratamiento antirretroviral, situación que lo enfrenta posteriormente con la burocracia. Finalmente logra que le sea otorgado el tratamiento pero a la postre recibe una llamada de un médico quien le solicita la devolución del mismo, ya que es una persona en estado *ilegal*. Jorge no podría tener una atención de su salud si no logra regularizar su situación legal en el país; sabiendo de su estado delicado de salud acude a Migración donde se le solicita estar casado con una mexicana (para el trámite de matrimonio le solicitan permiso de permanencia en el país), tener más de dos años trabajando formalmente (los empleos formales le solicitan la solución de su situación migratoria) y finalmente el pago de una multa.

Ambos casos han tenido un seguimiento afortunado, sin embargo queda pendiente resolver la garantía que tiene un extranjero en situación *ilegal* para que le sean garantizadas condiciones para el cuidado y la atención de su salud. Hemos de considerar aquí que aunque exista una situación irregular legalmente hablando, ¿no debería el Estado facilitar condiciones para que su salud no se ponga en riesgo y su vida no sea expuesta? ¿Es acaso prioritario el cumplimiento de una ley de ésta naturaleza cuando vulnera la vida de una persona? Enrique, el primero de los dos casos, se sintió amenazado y durante un tiempo decidió partir a otro rumbo permaneciendo como ilocalizable, al margen de los servicios de salud y prevención.

Pero no todos los casos corresponden a extranjeros en situación *ilegal*. La discriminación también atañe a los nacionales quienes en muchas ocasiones se han visto en situaciones críticas debido al estigma y la discriminación. Lo que le sucedió a Karla es una muestra de ello. Ella se encontraba programada para tener un parto por cesárea el 7 de octubre ya que forma parte de uno de los programas de prevención de nuestra organización, mediante el cual la posibilidad de infección de la mamá a su bebé se reduce hasta el 1 ó 2% de posibilidades, sin los cuidados necesarios puede llegar a tener un riesgo, sobre todo al momento del parto, del 60%. Ella decidió acudir un día antes por el fuerte dolor que tenía. Al llegar al hospital su atención se prolongó de manera drástica, los médicos no le prestaban suficiente atención e incluso comenzó a ser interrogada respecto a su salud y a la manera en que se infectó. Posteriormente fue recibida pero le notificaron los médicos que, debido a la dilatación, no podría ser intervenida mediante la cesárea, exponiendo con esto la salud de su bebé.

Acompañada de tonos burlescos respecto a su diagnóstico con VIH positivo, finalmente dio a luz mediante el parto natural y durante el mismo, relata Karla, tocó por accidente a un médico quien de inmediato le reprochó pues podía *contagiarlo*. Los comentarios no cesaron al término del parto. Al llegar a una de las habitaciones, relata, la enfermera preguntó al resto de las mamás que se encontraban si aceptaban a una persona con VIH, de inmediato se negaron por el temor de que sus respectivos bebés fueran *contagiados*. No conformes, el personal la presionó para que accediera a firmar la autorización para que fuera operada y así evitar tener más hijos, ya que “los demás no tenían la culpa de mi enfermedad, que ellos (los médicos) no tenían la culpa de que yo estuviera teniendo y teniendo hijos”.

Las personas que viven con el VIH y que han desarrollado el Sida ven mermada sus condiciones de salud gracias al prejuicio social existente que “reconoce” su situación culposa. Siendo producto de su irresponsabilidad el estado actual de salud no existe otra alternativa sino asumir las consecuencias: bajo esta consideración cualquier acto de violencia, discriminación, abuso, juicio, dolor y sufrimiento se encuentra completamente justificado.

La discriminación en las autoridades

En junio del 2010, al término de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Ayuntamiento de Guadalajara, el regidor Gamaliel de Jesús Ramírez Andrade declaró en una entrevista que fuera difundida en medios informativos, gráficos y electrónicos, a tan sólo unos días de haberse realizado la marcha de la diversidad sexual en Guadalajara, “...*porque no es la Guadalajara sidosa que queremos*”. El contexto de la expresión está relacionado con su rechazo a las marchas de la diversidad sexual, sin

embargo durante su afrenta vincula la homosexualidad con el Sida mediante la expresión *sidosos*.

Las declaraciones son desafortunadas no sólo por la expresión en torno a la diversidad sexual, sino en relación a las personas que viven con el VIH, reiterando, una vez más, el mito de que la enfermedad es exclusiva de la población homosexual, creencia que ha dado como resultado un fuerte prejuicio social en contra de quienes viven con el virus y el sentimiento de inmunidad que tienen *los que no son homosexuales*. Tras reiterar una y otra vez el *no queremos una Guadalajara Sidosas*, surgen dos planteamientos importantes: ¿Bajo qué criterios las autoridades toman decisiones relacionadas a la vida de sus representados? ¿Cómo, a través del discurso oficial, se legitiman discursos totalmente discriminatorios, desinformativos y prejuiciosos? Y por otra parte, ¿cuál es la importancia que tiene el uso de un lenguaje correcto en la construcción de una cultura incluyente?

El uso de un lenguaje correcto ha sido destacado por ONUSIDA. Las palabras permiten construir una realidad, por ello su vital importancia en el contexto del VIH y Sida donde su evolución y construcción es muy productiva apostando por códigos más precisos e informativos.

Conclusión

La discriminación de quienes viven con VIH es aún vigente, pese a la cantidad de información y referencias disponibles tanto de instituciones internacionales, nacionales y de organizaciones de la sociedad civil. Es parte de nuestra vida cotidiana y al serlo se corre siempre el riesgo de naturalizar, es decir, de considerar el acto como normal e incluso esperado. Este es el caso del fenómeno del VIH y Sida.

La tendencia a culpabilizar a las personas por un supuesto acto deshonesto e incluso perverso ha generado todo un discurso lacerante que justifica, irremediablemente, las prácticas discriminatorias: “si está así es porque se lo merece”, “por su culpa”. La discriminación es, por lo tanto, una especie de justicia, o bien, una manera de redimir a todos aquellos que llevan un estilo de *vida desordenado*.

Las citas anteriores pretenden expresar la realidad de algunas personas que viven con el virus y que como ellos existen cientos de casos en diferentes lugares y de quienes no recuperamos su experiencia ¿cuál es el destino de todas esas personas que sufren la discriminación y que aprenden a vivir con ella como si fuere un elemento constitutivo de la realidad humana y por tanto de sus vidas? Las diferentes expresiones de desatención médica, la negación de servicios, la privación de derechos, el rechazo familiar, la acusación de los líderes religiosos, son en su conjunto expresiones de la discriminación asociada a VIH.

Aunque conocemos una cantidad mayor de casos de discriminación y suponemos la existencia de otros, consideramos que son siempre insuficientes para plasmar una realidad que se caracteriza por su complejidad. Para la mayoría de los afectados denunciar implica asumir un proceso para el cual no están en condiciones de responder pues requiere hacerse evidentes cuando lo que se quiere es el anonimato para recibir sus bondades: evitar cualquier tipo de expresión o conducta que sea aún más lastimosa. No es posible generalizar las situaciones pues dentro de éstas experiencias encontramos situaciones reales de inclusión y respeto, de profesionalismo y compromiso social, tanto en los sectores gubernamentales, privados y públicos. Sin embargo, la acusación encara una situación que es reprochable aún en su mínima expresión.

Así pues, el ocultamiento es parte de la realidad, el negar la enfermedad o bien, como aquí se ha expresado, mantenerla en el anonimato produce efectos nocivos y contraproducentes para los fines de atención y prevención: casi el 60% de personas que viven con VIH desconocen su situación, de igual manera, aproximadamente un tanto igual conoce su diagnóstico hasta cuando las enfermedades oportunistas han generado daños irreversibles.

Bibliografía y citas aclaratorias

1. El VIH/SIDA y los Derechos Humanos: Directrices Internacionales. ACNUDH y ONUSIDA.
2. Acta HR/PUB/90/2
3. Acta E/CN.4/1997/37
4. CENSIDA, El VIH/sida en México 2010, de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Puede consultarse en la página: www.censida.salud.gob.mx/
5. Muñoz de Alba Medrano, Marcia; Cano Valle, Fernando; *Derechos de las Personas con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. SIDA-VIH*. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura; Universidad Nacional Autónoma de México (México) 2001
6. Recomendación No. 200: Para mayor información se puede consultar en la página de internet en www.ilo.org/global/topics/hiv-aids/lang-es/index.htm
7. Informe CENSIDA 2010.
8. Revisión médica.

VIDA SIN AGUA

Aminta Barba Ochoa/Nora Lorenzana Aguilar

Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas A.C., AJAGI

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 28 de julio de 2010, una Resolución que reconoce al agua potable y al saneamiento básico como derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos¹. El agua ha sido reconocida como elemento esencial para la supervivencia de todas las formas de vida conocidas, líquido vital para la subsistencia humana y para cubrir sus necesidades básicas. El agua al ser indispensable para el hombre, se vuelve parte inherente del “Derecho a la Vida”.

Sin embargo, para la Comunidad Indígena Wixárika (Huichola), de San Sebastián Teponahuatlán, que se localiza en los municipios de Mezquitic y Bolaños al norte del Estado de Jalisco, este derecho ha sido violentado gravemente desde hace varios años de diversas maneras: contaminación, despojo y mercantilización del líquido vital que se encuentra dentro del territorio wixárika. El agua, los ríos, bosques y manantiales, además de ser elementos importantes desde un punto de vista ambiental, forman parte esencial de la cultura wixárika. El agua es considerada por los Wixaritari como la sangre de la madre tierra, sin ella ninguna vida pudiera sobrevivir.

Es importante señalar que la relevancia del presente caso no sólo radica en una cuestión de territorialidad o en la importancia de que sea asegurado el acceso efectivo de los pueblos a las “esencias de la vida” (forma en que también se refieren los Wixaritari a los recursos naturales), que se encuentran dentro de su territorio; sino que además, evidencia una violación estructural al derecho a la libre determinación de los pueblos.

Las violaciones a este derecho elemental, comenzaron con una problemática que como una ventana al abrirse, deja ver en su totalidad la complejidad y magnitud de la situación a la que se enfrenta la Comunidad.

Contaminación

Históricamente su núcleo agrario ha sido invadido en distintas regiones del territorio ancestral, la más grande fue en el Ejido Puente de Camotlán, localizado al sur de la Comunidad wixárika, en el Municipio de La Yesca, Nayarit. Sin embargo, y después

de 10 años de litigio ante los Tribunales Agrarios, en el 2004 fueron restituidas alrededor de 22, 000 hectáreas, reduciendo así la invasión del referido ejido, a aproximadamente 800 hectáreas. En esta zona el poblado estableció su principal infraestructura: pista de aterrizaje, Bodega CONASUPO, basurero municipal, baño garrapaticida y una planta de tratamiento de aguas residuales. Estas instalaciones han traído como consecuencia la contaminación grave y creciente de uno de las principales fuentes de abastecimiento, el río Camotlán, perteneciente al Río Chapalagan, afluente del Río Santiago.

El río Camotlán es el principal afluente del cual se provee de agua a la Comunidad de San Sebastián Teponahuaxtlán para cubrir sus necesidades básicas, dar de beber a su ganado, bañarse, lavar ropa, etc. Y en menor medida se abastecen de los manantiales que nacen dentro del territorio de la Comunidad.

En octubre de 2007 comenzaron a aparecer peces muertos en las orillas del río, así mismo comenzaron a manifestarse problemas de infecciones dermatológicas en la piel de los niños del albergue de la Comunidad, quienes acostumbraban bañarse en el río. Ante esta circunstancia, autoridades tradicionales y agrarias de la Comunidad comenzaron la investigación para encontrar y detener la fuente de contaminación causante de tales efectos, por lo que, en primer lugar realizaron un recorrido por el río.

El 2 de diciembre del 2007, las autoridades comunitarias se percataron que la problemática tenía su origen en la Planta de Tratamiento del Sistema Lagunar del Ejido Puente de Camotlán, del Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, localizado en la colindancia sur de la Comunidad de San Sebastián. Esta planta de tratamiento generalmente funcionaba por medio de un tanque de oxidación para tratar las aguas contaminadas. Sin embargo, en esta visita se constató que dicho tanque de oxidación se había detenido y estaba completamente seco, es decir, la planta de tratamiento no se encontraba funcionando. Se percataron también de la existencia de un drenaje de aguas negras proveniente del ejido Puente de Camotlán. Dichas aguas negras continuaban corriendo ininterrumpidamente por una zanja de tierra *que desembocaban directamente al río Camotlán*. Esas aguas negras no ingresaban a la planta de tratamiento para ser saneadas, la contaminación llegaba directamente al río con el cual la Comunidad cubre sus necesidades básicas.

En el lugar de la descarga observaron una capa de lodo negro en el margen y en el fondo del río Camotlán, así como un fuerte y fétido olor característico del agua con altos contenidos de drenaje. Asimismo, es importante destacar que la Comunidad sabe que existen otras fuentes contaminante al río Camotlán, las cuales son el Basurero Municipal del Ejido Puente de Camotlán y el baño garrapaticida, localizados en la misma zona de la planta de tratamiento de agua del referido ejido. Ante esta indignante y preocupante situación, que ya había tenido repercusiones en la salud comunitaria, con fecha del 10 de enero de 2008 se interpuso una denuncia ante el Organismo de Cuenca Lerma – Santiago– Pacífico, misma que fue remitida a la Dirección Local Nayarit para su trámite.

Fue sin embargo, hasta el 12 de mayo de 2008 que dicha autoridad informó (mediante oficio) de la realización de una visita de inspección a la zona afectada. Mencionaron que en la diligencia se pudo constatar que la totalidad de las aguas que provenían del sistema de alcantarillado sanitario de Puente de Camotlán eran vertidas en el Sistema Lagunar. Esto es que en la inspección no detectaron irregularidades y por lo tanto no había contaminación.

Ante la inaceptación de la respuesta emitida por la autoridad competente, en la medida que persistía la problemática de la contaminación al río, la Comunidad decidió interponer diversas denuncias ante autoridades en materia ambiental, a nivel Estatal y Federal; con la finalidad que dichas autoridades realizarán verificaciones del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables a cada una de las fuentes contaminantes. El 04 de marzo 2009 se presentó denuncia y solicitud de verificación ante la Dirección Local de Nayarit contra la Planta de Tratamiento de Agua, el basurero y el baño garrapaticida. El 24 de marzo 2009 ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Delegación Nayarit, respecto a la disposición final de lodos y biosólidos generados por la planta de tratamientos de Sistema Lagunar del Ejido Puente de Camotlán. El 19 de junio 2009 se presentaron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Nayarit, ante la Secretaría de Medio Ambiente de Nayarit y ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación Nayarit respecto al cumplimiento de especificaciones de protección ambiental para la selección de sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias del basurero municipal y baño garrapaticida que dan servicio al Ejido Puente de Camotlán.

El 05 de noviembre de 2009, la Dirección Local de Nayarit notificó a la Comunidad sobre el trámite dado a la denuncia presentada el 04 de marzo 2009. En el oficio informa a la Comunidad de una inspección realizada en atención a la contaminación del río Camotlán, comunica que dicha acta de visita sería analizada y de ser procedente se abriría un expediente administrativo. Hasta la fecha del presente escrito la Comunidad no ha tenido respuestas concretas ni de esta, ni del resto de las instituciones ante las que fueron planteadas las denuncias, evidenciando por un lado la grave problemática que enfrenta el derecho ambiental mexicano en materia legislativa y por otro su difícil aplicabilidad, pues no existen los mecanismos ni las instituciones suficientes para garantizar la protección al medio ambiente. De igual forma, denota la parcialidad de las resoluciones emitidas dentro de estos procedimientos, en la medida que la Comisión Nacional del Agua es juez y parte del conflicto, su imparcialidad se ve claramente afectada. A causa de la misma contaminación se ha extinto el pez sagrado para la cultura, el M+xi (Murri), especie de bagre que solía ser utilizada para las ceremonias de la Comunidad

Despojo

A raíz de la reforma realizada al artículo 27 constitucional en 1992, el 1° de diciembre de esa anualidad fue publicada la Ley de Aguas Nacionales, la cual regularía desde entonces la administración de los recursos hídricos de la nación. Esta nueva administración ordenaría la distribución de las aguas nacionales mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo. Esta reforma fue desconocida por los pueblos indígenas, toda vez que la referida ley obliga a los usuarios del agua, antes de su uso y aprovechamiento, a la obtención de una concesión administrativa la cual tiene como obligación jurídica el pago de derechos por los recursos.

Una vez iniciadas las acciones para mitigar la contaminación del río Camotlán, en segundo lugar, la Comunidad inició una investigación en el Registro Público de los Derechos de Agua, para identificar a los concesionarios que se encuentran vigentes ante la Comisión Nacional del Agua, dicha búsqueda fue con la finalidad de localizar algún permiso de descarga otorgado a favor de la Planta de Tratamiento del Ejido de Puente de Camotlán. En dicha búsqueda, no se encontró ningún permiso vigente de descarga de aguas residuales, lo que es ilegal, pero además la Comunidad pudo detectar que existían 84 concesiones otorgadas bajo distintos rubros a Ayuntamientos y particulares, sin que para ello hubiere sido consultada la Comunidad, ignorando de esta forma los derechos que desde tiempos inmemoriales tienen los wixaritari, sobre su territorio y los recursos que se encuentren dentro de él.

Mercantilización

De igual forma, dentro de la investigación realizada, la Comunidad se percató de que la problemática enfrentada, no sólo es cuestión ambiental o territorial, sino que trasciende a las cuestiones comerciales. Señalamos que para la Comunidad el agua representa la sangre de *Tatei Yurienaka* (La Madre Tierra) por lo cual es sagrada y no puede venderse o comprarse.

Sin embargo y a pesar de no haber concesionado sus manantiales, la comunidad enfrenta una problemática de abastecimiento. Derivado de la política privatizadora que se estableció en las reformas de 1992, se han realizado concesiones y excavaciones profundas a los mantos acuíferos en el Ejido Puente de Camotlán, menoscabando así los recursos de la comunidad. Las autoridades gubernamentales y el Ejido ignoran que al tratarse del mismo manto acuífero al que pertenecen los manantiales de la Comunidad, se genera una sobreexplotación de estos mantos y se provocan sequías de los manantiales más pequeños. Esta problemática ya se ha manifestado en las localidades cercanas al ejido, ante lo cual la Comunidad queda imposibilitada para dar de beber a su ganado y se han visto en la necesidad de venderlo. Al mismo tiempo los ejidatarios, quienes

tienen como actividad económica principal la ganadería, al incrementar su número de cabezas aumentaron sus requerimientos de agua, por lo cual han realizado actividades de excavación. Cuestión similar ocurre con el manantial “El Artesano” del cual el ejido extrae agua para la purificadora, embotellarla y venderla a la Comunidad que tiene recursos para comprarla, pues existen temporadas en donde la comunidad ni siquiera tiene agua para beber.

Libre determinación

Podemos concluir que los derechos fundamentales de los pueblos indígenas no son respetados en México. Ni la legislación, ni las autoridades han garantizado que casos como el que ocurre en San Sebastián, no se generen a lo largo del territorio nacional.

Los pueblos indígenas tienen derecho a su territorio ancestral, así como al uso y aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentren dentro de ese territorio. Sin embargo en México, las violaciones a estos derechos fundamentales comienzan por las leyes, debe observarse que ni siquiera la Constitución Política del país reconoce a los pueblos como sujetos de derecho.

Lo anterior es sumamente grave toda vez que estos reconocimientos legislativos son necesarios para que los pueblos puedan ejercer y alcanzar el desarrollo desde su lógica cultural. No necesariamente un desarrollo como lo conocemos, planeado, formulado e impuesto desde el escritorio de alguna dependencia gubernamental. Se pretende un desarrollo planteado desde las comunidades, que sean ellas en el ejercicio de sus derechos quienes establezcan los parámetros del desarrollo, las que se determinen libremente.

La aplicación de políticas y legislaciones insuficientes, y violatorias de derechos humanos, que no contemplan las visiones de las comunidades indígenas, dificultan cada vez más el establecer las circunstancias idóneas para que una comunidad se desarrolle. Al parecer las políticas nacionales más que buscar el bienestar generalizado, están establecidas para beneficiar a las lógicas de mercado, e ignoran que la vida no es un producto que se pueda comprar o vender.

Bibliografía y citas aclaratorias

1. Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 64/292. El derecho humano al agua y al saneamiento.

CICLISTAS, LOS OLVIDADOS

“Los derechos humanos se detienen al pie de los derechos de las máquinas. Los automóviles emiten impunemente un cóctel de muchas sustancias asesinas”, Eduardo Galeano.

Martha Patricia Martínez Barba
Movimiento Bici Blanca

José Abraham González, un adolescente de 13 años, circulaba por la calle Pedrera, de la colonia Las Juntas, en Tlaquepaque; iba en una bici rodado 20 cuando un conductor de la ruta 61 lo arrolló. José Abraham no estaba muerto, sólo herido. Hizo el intento de levantarse y una mujer (María Esther González) le gritó al camionero: “¡No le des! ¡Espérate!”.

En su declaración, el chofer aseguró que se dio en reversa, porque pensó que pasaba sobre una piedra¹. Los ciclistas y los peatones son los usuarios del espacio público más olvidados por las autoridades de todos los niveles. No hay inversión suficiente para garantizarles seguridad ante los vehículos motorizados.

Vivimos en una realidad contradictoria. El progreso de la ciudad se basa en una política de alto presupuesto para construir infraestructura vial que permita alcanzar la máxima capacidad para desplazarse en auto. En aras del desarrollo, las modificaciones a la vía pública la han convertido en el espacio de mayor peligro para los usuarios más vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas. La principal causa de muerte de hombres jóvenes en México, son los accidentes de tránsito.

La paradoja continúa. La mayoría de intervenciones para reducir la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito se enfoca en conductores y pasajeros de automóviles particulares y poco o casi nada, en el resto de los actores de la ciudad, lo cual aumenta la desigualdad y vulnerabilidad de peatones y ciclistas.

En México 39 por ciento de las personas que fallecen por lesiones causadas en el tránsito son usuarios vulnerables, mientras que 47 por ciento son ocupantes de vehículos automotores. El caso se vuelve más alarmante al descubrir un subregistro de información sobre la seguridad vial en nuestro país. Por cada muerto en accidente de tránsito, hay 70 casos que desconocemos (OPS, 2009).

Guadalajara y el Área Metropolitana son el reflejo de la estadística nacional. En 2008, 68 por ciento de los accidentes ocurrieron a automovilistas y 31 por ciento a los usuarios vulnerables (Gobierno Federal, 2010). Las acciones del gobierno estatal se concentraron en impulsar la Ley de Diversión Responsable, bautizada coloquialmente como Ley Antiborrachos, que pretende regular el nivel de alcohol en los conductores para reducir los accidentes automovilísticos.

De rebote, la reforma debería reducir los riesgos de que peatones o ciclistas sufran un accidente con un conductor ebrio involucrado. Esto revela que el tema de seguridad vial carece de una visión de políticas integrales y de un enfoque sistémico. Acciones que incluyan redes viales eficientes, y fomentar el uso de medios de transporte más seguros y sustentables, como los desplazamientos a pie o en bicicleta.

Los usuarios de la ciudad

La forma como crece la ciudad es el efecto no planeado de una urbanización enfocada a la expansión periférica. Este crecimiento desmesurado y desigual va acompañado de políticas de infraestructura vial orientadas al uso del vehículo particular.

Actualmente en Guadalajara y el Área Metropolitana existen alrededor de 4 millones de habitantes y 1.6 millones de vehículos en circulación, a estos se suman cada día 380 nuevos vehículos².

Los autos conducen 2 millones 739 mil 170 viajes diarios; esto representa 28.3 por ciento del total de viajes. La mayoría de desplazamientos se realizan a pie, 37.4 por ciento; el resto es en transporte público 27.2 por ciento; y en bici, 2.2 por ciento (Gobierno del Estado de Jalisco, 2008).

Los costos externos de incentivar al grupo de los vehículos particulares se reflejan en implicaciones ambientales: 68 por ciento de la contaminación atmosférica se atribuye a los autos (CEJ, 2009).

El problema ambiental es parte y consecuencia del modelo de crecimiento urbano que disloca la relación natural entre espacio de trabajo, esparcimiento y vivienda obligando a los habitantes a depender del auto para sus largos desplazamientos. En la Zona Metropolitana de Guadalajara existen 710 autos por cada kilómetro cuadrado, lo cual equivale a un auto por cada 2.7 habitantes (CEJ, 2009). De acuerdo a estimaciones de consultores en movilidad, el escenario previsible es que en los próximos diez años aumente al doble el número de autos.

Del presupuesto de 6 mil millones de pesos para obras públicas durante 2010 en los municipios metropolitanos de Guadalajara, 4 mil millones fueron destinados a la construcción de 74 nodos y puentes para acelerar el tránsito automovilista. Es decir, 83 de cada 100 pesos se destinaron para beneficio de los usuarios de coche particular³. La tendencia apuesta a atender el rezago de infraestructura vial y al modelo de movilidad

motorizado e individual. El ejemplo más claro está en la reciente propuesta del gobierno estatal para construir la Vía Expres, un viaducto elevado de 23 kilómetros y de cuota, que cruzará entre oriente poniente de la ciudad, y el cual requiere una inversión de 6 mil 500 millones de pesos.

El informe sobre seguridad vial

El año pasado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicó el “Informe sobre el estado de la seguridad vial en la Región de las Américas”. Devela que cada año fallecen alrededor de 130 mil personas, más de 1.2 millones sufrieron traumatismos, y cientos de miles resultaron discapacitados. En América Latina y el Caribe los peatones son el grupo más vulnerable, y también suelen ser los más pobres. En Estados Unidos y Canadá son los ocupantes de vehículos motorizados.

Entre los propósitos de dicho documento está mostrar la situación de seguridad vial y señalar las deficiencias para ayudar a los países a definir sus prioridades de intervención.

Las recomendaciones insisten en ubicar el tema de seguridad vial como una prioridad de salud pública; incluir a las organizaciones de la sociedad civil con interés en el tema como socios con visión compartida y formadores de opinión pública; promover el avance de leyes integrales; y favorecer el registro de información necesaria para documentar lo que está ocurriendo con los usuarios más vulnerables de la ciudad.

Movilidad a pie y en bicicleta un derecho humano emergente

Jorge Medina conducía su auto por el acotamiento del Periférico rumbo al norte. Cuenta que sintió un golpe contra el cristal del parabrisas y se asustó, pero no se detuvo a revisar por qué se fracturó el vidrio.

Llegó al cruce de Periférico con camino a San Isidro, se estacionó e hizo las primeras llamadas de una mentira mal armada. Jorge se apresuró a recoger sus cosas del auto, y mientras eso ocurría una patrulla de la policía local llegó al lugar; él se adelantó a contarles que le robaron su auto y casualmente lo encontró en ese lugar.

Su mentira no cuadró con el brazo derecho de alguien, atorado en la llanta de lado del copiloto, ni con los cristales rotos, aún clavados en su cabello.

Jorge Gabriel Medina, de 24 años de edad, había atropellado al ciclista Francisco Javier Acosta de 17. En su última declaración ante el Ministerio Público dijo que sólo sintió un golpe contra el cristal del parabrisas y no vio al ciclista circular⁴.

El derecho a la seguridad de peatones y ciclistas depende de lo fortuito. Guadalajara y el Área Metropolitana carece de las condiciones mínimas que garanticen circular de manera segura y, con ello, olvida el más inalienable de todos los derechos: la vida. Hoy día

la agenda de los gobiernos municipales en el tema de seguridad vial contempla acciones mínimas y aisladas. También desarticuladas de las pocas y adormiladas propuestas de otros niveles de gobierno.

El problema comienza por la falta de reconocimiento en el marco legal. La Ley de Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, sólo define a la bicicleta como un vehículo de autopropulsión, pero no se le atribuye ninguna obligación ni derechos⁵. Tenemos una Ley únicamente centrada en el uso del automóvil y su relación con la ciudad y sus habitantes.

En este contexto, el derecho a la ciudad no sólo se trata de una garantía que defienda el espacio físico de los habitantes, sino de las condiciones para que la gente pueda alcanzar un desarrollo humano de calidad y esto aplica al sector de ciclistas urbanos. “El derecho a la ciudad es en este sentido la concreción de los derechos humanos en los territorios globalizados” (Un-Habitat, 2008).

Ser ciclista en Guadalajara y el Área Metropolitana es por voluntad y riesgo propio. No existen ni las condiciones físicas ni legales que garanticen su seguridad, por lo tanto, la vida pende de la suerte. El problema se agrava cuando ser ciclista es un acto obligado, porque ante la falta de un sistema de transporte asequible, eficiente y articulado la única opción que queda es usar la bici o caminar. Esta población, que al día realiza 212 mil viajes en el Área Metropolitana (Gobierno del Estado de Jalisco, 2008), es generalmente la más pobre y, por lo tanto, la más desprotegida.

Los desafíos que plantea Guadalajara son similares a los de otras ciudades del continente. Esta realidad impulsó a organismos de la sociedad civil reunidos en el Fórum de las Culturas Barcelona 2004 y Monterrey 2007 a desarrollar la Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes, la cual se construye de las experiencias y luchas de la sociedad civil y, se pretende que sirva como un complemento a los instrumentos existentes. En ella se menciona:

Artículo 7. El derecho a la democracia participativa. Todos los seres humanos y toda comunidad tienen derecho a participar activamente en los asuntos públicos y a disfrutar de una administración democrática en todos los niveles de gobierno. Este derecho humano fundamental comprende los siguientes derechos: El derecho a la movilidad local y a la accesibilidad, pues toda persona tiene derecho a un tráfico ordenado y respetuoso con el medio ambiente y a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana. Toda persona discapacitada tiene derecho a que se facilite su movilidad y a la supresión de todas las barreras arquitectónicas.

Tener derecho a la movilidad local significaría que acciones como cruzar por un paso de cebra y por las esquinas fuese un acto inviolable por los conductores de

automóviles, pero la Ley se sobrepone a lo que la cultura sugiere y permite la vuelta a la derecha continua y con precaución. La precaución es más responsabilidad del peatón o ciclista que quiere cruzar, que del automovilista que tiene los privilegios para conducirse sólo con el límite de la velocidad.

El diseño de políticas

El papel de los organismos de la sociedad civil en este contexto de inseguridad vial es crucial ya que desarrollan acciones de concientización sobre los accidentes de tránsito y un registro de las víctimas.

Bici Blanca es una iniciativa ciudadana que recupera la historia de los ciclistas que mueren por accidente en la vía pública. Por cada uno se instala una bicicleta pintada de blanco en el lugar donde murió y una placa a manera de epitafio. Además de un memorial, es un símbolo de denuncia en la ciudad. Se denuncia la inseguridad, desigualdad y exclusión a la que se condena a un grupo vulnerable y numeroso: los ciclistas. Y, a la vez, es una insistente demanda de políticas integrales que se reflejen en acciones como la construcción de infraestructura de vías ciclistas, la generación de indicadores que permitan evaluar continuamente a la movilidad no motorizada y la articulación de dependencias, para convertir este tema en un asunto de salud pública.

En el año 2008 la Secretaría de Vialidad y Transporte registró que en Guadalajara y el Área Metropolitana ocurrieron 146 accidentes ciclistas, sólo ocho fatales (Gobierno Federal, 2010). Sin embargo, cuando los colectivos GDL en Bici y Ciudad para Todos iniciaron la campaña de Bici Blanca, en cinco meses instalaron diez memoriales. Es decir, las estadísticas no garantizan el reflejo de la realidad, y por lo tanto, la verdad sobre la violación a los derechos de peatones y ciclistas.

El Informe de la OPS sobre el estado de la seguridad vial, aduce que los Organismos de la Sociedad Civil (OSC) realizan una valiosa contribución en materia de seguridad vial, aunque todavía muy poco en prácticas de cabildeo. “Ello demuestra la necesidad de promover y formalizar acuerdos de colaboración con los gobiernos de manera efectiva y sostenible. Para ello es necesario conocer las razones que hay detrás de las prácticas exitosas de los OSC y sistematizar sus acciones”.

El diseño de las políticas sobre seguridad vial, hasta ahora está basado sólo en las necesidades que capta la institución gubernamental a cargo. La relación con los OSC es incipiente y su incidencia se limita a denunciar de manera activa las muertes (33 entre enero y el 17 de noviembre de 2010)⁶. Esta es la fortaleza principal de Bici Blanca: el monitoreo constante del problema y garantizar un registro fiel de los fallecimientos por accidentes de tránsito.

Para evaluar la seguridad vial se requieren datos rigurosos y confiables que den cuenta de la magnitud del problema, advierte la OPS. “Observados adecuada y

regularmente, pueden dar cuenta a los gobiernos de las intervenciones necesarias y las estrategias de seguridad vial más pertinentes”.

Cuánto se invierte en seguridad vial

Un par de cifras descubren la política sobre seguridad vial. En la Región de las Américas, Costa Rica es el país que más invierte en seguridad vial: 7.38 dólares por habitante. Luego Estados Unidos 2.74 dólares por habitante. En México la inversión por cada persona es de 0.08 dólares (OPS, 2009).

En Jalisco el Presupuesto de Egresos del Poder Ejecutivo para 2010 rebasa los 71 mil millones de pesos, de los cuales para inversión pública se destinarán 6 mil millones⁷.

Esto implica que cerca del 10 por ciento del presupuesto se gasta en infraestructura. Si contamos únicamente los mil 500 millones de pesos asignados al Fondo Metropolitano, el 83 por ciento se etiquetó para obras destinadas al tráfico particular⁸; el resto es para obras diversas, no necesariamente para movilidad no motorizada.

Entre las decenas de programas operativos que tiene por obligación elaborar el Gobierno estatal se encuentran dos relacionados directamente con la seguridad vial.

El programa “Seguridad en la utilización de las vialidades por peatones y conductores”, adscrito a la Secretaría de Vialidad y Transporte, que cuenta con un presupuesto anual de 36 millones 250 mil pesos, lo que representa el 0.006 por ciento del gasto para infraestructura en 2010⁹.

El dato es más preocupante cuando se conoce el programa y se observa que el principal indicador para valorar si se están cumpliendo con los objetivos es el número de licencias de manejo expedidas por la Secretaría y la cantidad de cursos de capacitación para los aspirantes a obtener una licencia.

El otro programa está sectorizado en la Secretaría de Salud y es el realizado por el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes del Estado de Jalisco (CEPAJ), cuyo presupuesto en 2010 asciende a 15 millones 330 mil pesos¹⁰. Sus tres objetivos en el año son realizar una campaña de prevención de accidentes, operar un Observatorio Estatal de Seguridad Vial y capacitar a los jóvenes en prevención de accidentes.

Hasta noviembre se reportó una campaña de prevención realizada y un observatorio operado, aunque no se sabe qué acciones ha realizado dicho órgano. En cuanto a la capacitación, se tenía una meta de 32 mil 084 jóvenes, pero el reporte señala que habían capacitado únicamente a 910 personas.

La campaña de prevención se llamó “Si tomas, pasa el volante”. Nada hay destinado a concientizar a los conductores de su responsabilidad ante los peatones y ciclistas.

Conclusiones

No existe un registro preciso y confiable de los accidentes que ocurren con ciclistas en la vía pública. Hoy en día, la información suele perderse por la falta de coordinación entre la diversidad de fuentes que registran las muertes, lo cual plantea un desafío de coordinación entre dependencias gubernamentales y sociedad civil. Contar con un registro fiel permitiría generar indicadores de monitoreo, dimensionar el problema de un sector numeroso y vulnerable, definir intervenciones de infraestructura necesarias y estrategias de seguridad vial. Mientras tanto, las muertes ciclistas continuarán anónimas y sin el peso estadístico que puede influir en el rediseño de políticas que garanticen el derecho a una ciudad segura, equitativa e incluyente.

Los esfuerzos en el registro de accidentes ciclistas también deberán acompañarse de reformas al marco legal, implicará modificar la Ley de Servicios de Vialidad y Transporte del Estado de Jalisco y definirla como una norma integral que priorice la seguridad de peatones y ciclistas, respecto a otros modos de transporte; y a su vez, que garantice y defina sus derechos y obligaciones.

El cambio más urgente es visibilizar el problema. Evidenciar que una de las consecuencias de una ciudad que prioriza la circulación del automóvil son las muertes de ciclistas. En esta tarea los organismos de la sociedad civil han desarrollado acciones de concientización y prevención. Sin embargo, aun falta establecer vínculos y formalizar acuerdos de colaboración con los distintos niveles de gobierno y dependencias, para mitigar los problemas de inseguridad vial, sus costos sociales, humanos y económicos.

Bibliografía

- Colectivo Ecologista Jalisco. “Inventario de emisiones contaminantes de los vehículos automotores en la Zona Metropolitana de Guadalajara”, Guadalajara, 2009. (disponible en <http://www.cej.org.mx/descargas/emisiones2.pdf>)
- Gobierno Del Estado De Jalisco. “Estudio de demanda multimodal de desplazamientos en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Encuesta de origen y destino”, Guadalajara, 2008.
- Gobierno Federal. “Perfil de accidentes del Estado de Jalisco”, Ciudad de México, 2010. (disponible en http://www.cenapra.salud.gob.mx/CENAPRA_2010/estadisticas/Jalisco2.pdf)
- Instituto De Los Derechos Humanos De Catalunya. “Declaración Universal de los Derechos Humanos Emergentes”, Barcelona, 2009. (disponible en <http://www.idhc.org/cat/documents/Biblio/DUDHE.pdf>).
- Organización Panamericana De La Salud. “Informe sobre el estado de la seguridad vial

- en la Región de las Américas”, Washington, DC, 2009. (disponible en <http://www.bvsde.paho.org/texcom/cd045364/SeguridadVialAmericas.pdf>)
- Un-Habitat. “Espacio público y derecho a la ciudad”, Bogotá, 2008.

Bibliografía y citas aclaratorias

1. Nota en el periódico Mural, sección Seguridad. “Remata camión a niño”, de Israel Piña. 29 de octubre de 2008.
2. Declaración de Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, el 22 de septiembre de 2010, en el contexto del Día Mundial Sin Auto.
3. Nota del periódico Público, sección El Tema. “Día Mundial Sin Auto 83% de gasto oficial, a obras para el auto”, de Ignacio Pérez Vega. 23 de septiembre de 2010.
4. Nota en el periódico Mural, sección Seguridad. “Pasea brazo de víctima”, de Grettel Rosales. 22 de noviembre de 2007.
5. La referencia se encuentra en el Artículo 43 de la Ley.
6. El registro se encuentra disponible en la página <http://bicicletablancagdl.blogspot.com/>
7. GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal del año 2010. (disponible en [http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/034BA04A8966F5BD862573A800833195/\\$FILE/Presupuesto%202010.pdf](http://app.jalisco.gob.mx/PortalTransparencia.nsf/TodosWeb/034BA04A8966F5BD862573A800833195/$FILE/Presupuesto%202010.pdf))
8. Información obtenida del Comunicado de Prensa del Consejo Ciudadano para la Movilidad No Motorizada, el 22 de septiembre de 2010.
9. GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. Proyectos y programas operativos, 2010. (disponible en [http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gz2djr1AX-EwOLYAsLA8_gUAN3Q7NQQ1cDU_1wkA6zeJ8QHw9jryAjA38TH2MDIzd_H0eXIFcDIIDIG-AAjgb6fh75uan6BdnZaY6OiooAzQCPbA!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTFRMS-DNKUjIwTzRMMzAyRk9MQURSRTA4TzY!/\) \)](http://www.jalisco.gob.mx/wps/portal/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gz2djr1AX-EwOLYAsLA8_gUAN3Q7NQQ1cDU_1wkA6zeJ8QHw9jryAjA38TH2MDIzd_H0eXIFcDIIDIG-AAjgb6fh75uan6BdnZaY6OiooAzQCPbA!!/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfTFRMS-DNKUjIwTzRMMzAyRk9MQURSRTA4TzY!/)
10. GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO. Proyectos estatales, 2010. (disponible en <http://seplan.app.jalisco.gob.mx/table/panelCiudadano/resumen/275>)

JUSTICIA

¿Imparcial, pronta y expedita?

Alfredo Viniegra Martínez

Antecedentes

El nacimiento de un hijo o hija es sin duda un evento extraordinario; desearlo, planearlo y esperar el día de su llegada son momentos usualmente emotivos é inolvidables.

Quizá tengas la oportunidad de elegir Hospital y acudir al ginecólogo que alguna amistad te recomendó. Lo anterior te genera un margen amplio de seguridad y confianza.

Alguna vez hemos reflexionado lo siguiente:

¿En una visita al médico le pedimos, para ponernos en sus manos, una constancia de no antecedentes penales?

Al ser sometido a una intervención quirúrgica o en una emergencia médica, ¿le pedimos al profesional que nos va atender y al equipo que lo acompaña, además nos exhiba su experiencia curricular?

Antes de ser atendidos en un Hospital preguntamos ¿quiénes son los socios o propietarios o cuales intereses se protegen ahí?

Partimos de entregarles a los profesionales de la salud nuestra absoluta confianza.

Creo que así debe ser. Alfredo Emmanuel, “Freddy” como gusta que le llamen, quiere ser Doctor.

Nació el 05 de Julio de 1996, en una institución privada el Hospital Ángel Leño ubicado en la ciudad de Zapopan, Jalisco; el ginecólogo recomendado por una familia conocida, consideró que era necesario realizar una operación cesárea. Así ocurrió, se hizo acompañar por el equipo médico que para esos casos le asistía.

El resultado, un hermoso niño de poco más de 4 kilos y según la información del colaborador del ginecólogo, el pediatra Jaime Bucio Dávalos; **sano**.

El 7 de Julio de 1996, 41 horas después, lo egresa del Hospital según dice el documento autorizado por el pediatra Jaime Bucio Dávalos: **“diagnostico de alta” como “r. n. masc. sano”**. Que debe entenderse como “recién nacido masculino sano”.

Sin embargo, el día 08 de Julio de 1996 empezamos a notar que el niño tenía su piel más amarilla de lo ordinario, el pediatra Bucio Dávalos dice que es “normal” y recomienda “baños de sol tierno a través de un cristal al día siguiente”.

El médico Jaime Bucio Dávalos, no previó, ni tomó en cuenta, tampoco advirtió que había en proceso un evento mucho más grave: la incompatibilidad a grupo sanguíneo ABO o hiperbilirrubinemia¹.

El 09 de Julio de 1996 a primera hora lleve al Hospital Ángel Leño a Freddy más amarillo; es hasta entonces cuando el pediatra decide internarlo y me solicita 10 donadores de sangre “para poder iniciar la atención al bebé” y “la presencia de mamá, para hacerle unos estudios” lo amarillo se resolvería con una “exanguineotransfusión².”

Le siguen en el piso de pediatría del Hospital Ángel Leño, de parte del médico Jaime Bucio Dávalos una serie de acontecimientos que sinceramente resulta difícil imaginar:

Enterarnos al tiempo que en el Banco de Sangre del nosocomio había más de 10 paquetes sangre disponibles; que demoró su aplicación más de 11 horas a partir del ingreso del niño en la urgencia médica para iniciar los recambios sanguíneos, a pesar de tener reportes de laboratorio de 42 miligramos³, de bilirrubina en sangre y que esta aumenta hora tras hora causando daños terribles al cerebro. Encontramos que no existía constancia en el expediente clínico de la aplicación terapéutica urgente en beneficio de Freddy; que nos engañaron sobre el estado de salud en la estancia hospitalaria al grado de no permitirnos verlo hasta el día 11 de Julio de 1996 y darlo de alta el 12 de Julio de 1996 en condiciones de “milagrosamente sano” palabras textuales de Bucio Dávalos, a pesar de que le dije que el niño movía los ojos de manera extraña y se apreciaba descoordinado ofreciendo como explicación que: “es normal por los recambios de sangre”. Existen constancias del propio Banco de Sangre de que aún mantenía altos niveles de bilirrubina y más omisiones y negligencias que a través de las investigaciones han salido a la luz.

Para el domingo 14 de Julio de 1996 en casa, Freddy empezó a comportarse se manera muy extraña, (se estaba convulsionando) aún ahí buscamos al pediatra y dio por instrucciones un medicamento para el reflujo, al no haber mejoría aclaro: “es domingo, estoy con mi familia, y no lo puedo atender”.

Ante esta negativa buscamos a otro pediatra, quien lo ingresó al Hospital San Javier en donde permaneció 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos hasta el 23 de Julio de 1996.

El diagnostico de egreso “Encefalopatía Hiperbilirrubinémica II + Lesión Neurológica difusa y motora + Hipoacusia Neurosensorial secundaria”. Traducir esto significa, haber perdido gran parte de sus neuronas por la impregnación de la bilis en las partes bajas del cerebro, lo que le impediría lograr coordinación motriz gruesa y fina, alimentarlo a través de una sonda, en su momento no controlar esfínteres,

ni caminar, sordera profunda entonces quien no escucha no habla, en resumen dice el documento de egreso del Hospital San Javier: “apto para la vida, incierto para la función”.

Cuántos Derechos fundamentales se violentaron en la humanidad de Freddy y de nuestra Familia.

Desde que salió Freddy de este último Hospital, sus padres nos propusimos y le proporcionamos, además de amor y calidez, todas las atenciones médicas, terapéuticas y de rehabilitación a nuestro alcance y aún más.

Cuidados personalísimos, anticonvulsivos, atención neurológica, psicológica, estimulación temprana, rehabilitación física, ortesis, terapia y evaluaciones de lenguaje, consultas interdisciplinarias, incluirlo en protocolos de investigación, evaluaciones auditivas constantes, aparatos auditivos, educación especial, equino terapia, masoterapia, neurociencias, entre otras, han sido su compañía en estos años.

En Julio 1999 bien atendido Freddy, decidimos, después de muchas consideraciones éticas, sociales, médicas y jurídicas emprender acción legal y presentar formal denuncia criminal en contra del médico Jaime Bucio Dávalos y/o quien o quienes resultaren penalmente responsables de las lesiones graves y permanentes ocasionadas a Freddy, por las omisiones reiteradas en que incurrió el pediatra, quien no actuó de manera profesional, diligente, eficiente, oportuna y omitiendo aplicar procedimientos médicos ortodoxos antes, durante y después de la emergencia médica y así evitar las los daños auditivo, neurológico y motriz que padece Freddy.

Estamos a finales del año 2010, han transcurrido más de 11 años de la presentación de la Denuncia Penal.-

Freddy ha cumplido 14 años recientemente.

Freddy es un joven adolescente, que ha aprendido a vivir y dominar las secuelas de aquellas lesiones que no debieron ocurrir.

Sus padres le hemos dedicado esfuerzos adicionales para que sumado a la dedicación y empeño de él, logre ser un chico independiente. Los esfuerzos y dedicación en su atención dieron frutos.

Con Freddy después del evento, en lo terapéutico casi todo ha sido ganar, pues ha significado ir día a día, terapia tras terapia, medicamento tras medicamento encendiendo un foquito más en su cerebro, eso permite llevar una vida llena de satisfacciones como padres.

Es tener un Ángel en casa.

El Proceso Legal

La convivencia en sociedad es regulada por reglas o normas que conocemos como Leyes, Reglamentos, Códigos, entre otros., y si alguien altera de manera voluntaria o involuntaria alguna de ellas debe enfrentar una consecuencia, misma que va de manera proporcional al daño o menoscabo causado, o al menos así nos lo han enseñado en casa y en la escuela.

Así, si no respetas la luz roja de un semáforo pones en peligro tu integridad y quizá la de otras personas, y resulta más grave si lo haces conduciendo sin licencia o en estado de ebriedad.

Entonces entendemos que lo correcto es conducir sobrio, con licencia y respetar la luz roja, entre otras cosas.

¿Qué pasa si quien conduce tiene licencia y además de chofer, conduce sobrio y sin embargo no respeta la luz roja?

Nos queda claro, si lo atrapa un agente vial es seguro que le aplicara una multa es decir, tendrá una consecuencia y si su imprudencia causo daños los deberá reparar, quizá hasta con cárcel o no es así?

Bueno pues el sistema Judicial de nuestro país y concretamente el de Jalisco, no han logrado desde 1999 hacer que el pediatra Jaime Bucio Dávalos tenga la consecuencia apropiada y proporcional al daño y menoscabo ocasionado a la salud de Freddy y una reparación del daño económico y moral que él y sus padres merecemos y exigimos.

Cada ocasión se repite la misma secuencia, ustedes lo pueden apreciar en la cronología que está páginas adelante, después de un larguísimo proceso el Juez de Primera Instancia, en materia penal, con pruebas contundentes lo condena, la Apelación llega con Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia sensibles la confirman, el médico presenta un amparo y cuando y entonces los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito regresan el asunto para analizar “si algunas pruebas pueden beneficiar a Bucio Dávalos” o de plano buscarle, finalmente reponen el proceso para admitirle una prueba más¹...

Todo lleva a repetir de nuevo el Proceso, sumarle más pruebas contundentes, como lo son Periciales de verdaderos expertos, vuelve el Juez de Primera Instancia a sentenciar a Jaime Bucio Dávalos, y ese trámite llega a la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado donde siempre o lo dejan libre por falta de elementos para procesar o reponen el Proceso Penal.

Y de nuevo volver a empezar, **esta última vez decidieron reponer el Proceso, nada más hasta el 2001, lo que significa un retroceso de 9 años.**

1. Es decir, se nulifican los avances del proceso hasta ese momento para iniciar nuevamente el juicio como si ningún acto hubiera sucedido.

Me pregunto ¿por qué?, y la respuesta es porque los Magistrados de la Sexta Sala así lo ordenaron como también lo habían hecho en 2001, “protegiendo las garantías individuales de Jaime Bucio Dávalos” ahora la razón consiste en que el actuario, dependiente del Juzgado, en la declaración preparatoria no transcribió todos los derechos del pediatra. **Se trata de dejar limpio al médico.** Seguro así ha ocurrido.

He observado que se protegen los intereses de un particular, de un grupo de poder, de un Hospital, de quien está detrás del Hospital donde labora Jaime Bucio Dávalos, así que la Justicia en Jalisco en el caso de Freddy no existe aún.

Cuántos Derechos Humanos de Freddy se violentan, sin duda muchos

El derecho a la salud, a recibir una atención médica oportuna, eficiente, segura, a tener un trato digno, además no fue gratis, todos cobraron, todos engañaron, donde está el acceso a la justicia, a la reparación del daño moral, atención psicológica, a la reparación del daño material.

El Expediente Criminal suma ya 4 tomos y resiste técnica y procedimentalmente cualquier análisis jurídico, por supuesto si se hace de manera objetiva.

Han transcurrido más de 11 años sin justicia y leer que en nuestra Constitución Política se contemplen algunos derechos básicos, entre ellos los de las personas ofendidas en la comisión de un delito, resulta en el caso de Freddy ofensivo y ridículo:

Artículo 17...

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial...

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones...

Y más adelante en el artículo 20...

A. De los principios generales:

- I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

B. De los derechos de la víctima o del ofendido:

- I.** Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
- II.** Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;
- III.** Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;
- IV.** Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;
- V.** Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
- VI.** Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y
- VII.** Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Sí, esta es la Carta Magna, es de donde se desprenden todas las Leyes locales, el Estado de Jalisco esta incluido entre quienes participan en esta Federación que se llama Estados Unidos Mexicanos, es en serio.

Pero aquí en Jalisco lo que realmente cuenta, lo que si vale, lo que pesa de verdad es una llamada telefónica oportuna de alguien medianamente poderoso a la Autoridad Judicial, porque no se requiere ni entrevista, solo “una llamadita”, para que “le den una manita al pobre pediatra” y le hagan larga historia “a ese del niño amarillo...” Así lo he

escuchado en los pasillos de las oficinas del Poder Judicial.

Leer esos preceptos legales, suena a que respaldan Derechos Humanos fundamentales sin embargo, la aplicación cotidiana de ellos, al menos en el caso de Freddy ha sido letra muerta, parece como que son de un país de primer mundo, o mejor dicho de otro mundo.

Suenan muy bien, pero ¡cuántos derechos fundamentales le han negado a Freddy!

Conclusiones

Freddy aprendió a comunicarse oralmente, usa un excelente equipo auditivo, sabe leer los labios, se mantiene estable y vigilado neurológicamente, motrizmente ha logrado excelentes avances, todo gracias a la atención oportuna de su familia.

Freddy continuo esforzándose, en 4° grado de primaria de una escuela pública aprendió a leer y escribir. Durante el recreo jugaba futbol con sus compañeros con un envase de jugo o refresco vacío. Sus compañeros aprendieron a respetarlo y a convivir como iguales, porque entendieron que todos somos diferentes. Fue medio, motor y signo de transformación de esa escuela pública, ahora Integradora de niños con necesidades educativas especiales de todo tipo.

Freddy a estas fechas ya alcanzo el 2° grado de Secundaria con adaptaciones curriculares en una escuela personalizada en donde ha sido bien recibido por los profesores(as) sin embargo, a sus nuevos compañeros les cuesta mucho aceptar a alguien diferente y en consecuencia integrarlo, respetarlo.

Por ahora tiene un nuevo propósito aprender a tocar guitarra su profesor-animador dice que lo va a lograr. Todo lo que se ha propuesto lo ha conseguido.

Mientras Freddy crece y supera sus capacidades diferentes, el Estado Mexicano, concretamente el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito no han tenido la voluntad, no han sido capaces, no han querido proveer Justicia a Freddy.

Han sido sometidos por los intereses particulares de Jaime Bucio Dávalos, del Hospital Ángel Leño y de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

Freddy insiste, quiere ser Doctor, para que ya no ocurra a más niños lo que a él le ocurrió. Quizá también le convenga aspirar a ser Magistrado.

Cronología

23 de Julio de 1999.- Se presenta Denuncia Formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, por las lesiones graves ocasionadas a Alfredo Emmanuel a consecuencia de las negligencias, omisiones y mala praxis médica de parte del pediatra Jaime Bucio Dávalos durante la atención médica a nuestro recién nacido en el mes de Julio de 1996 en el Hospital Ángel Leño.

27 de Abril de 2001.-denuncia administrativa ante la Contraloría General del Estado de Jalisco en contra de los médicos peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense Raymundo Flores Pérez y Enrique González Galván, expediente QDJ-063/2001-A. Y la abre de oficio en contra de la Fiscal integradora Lic. María Dolores Castañeda Camarena.

27 de Junio de 2001.- Se consigna la averiguación previa al Juzgado 7° en Materia Penal en el Estado, por los delitos de Responsabilidad Médica, Responsabilidad Profesional y Lesiones. Expediente 293/2001-B

12 de Julio de 2001.- El Juez 7° en Materia Penal declara prescritos los delitos de Responsabilidad Médica, Responsabilidad Profesional y gira la orden de aprehensión por el delito de Lesiones.

13 de Julio de 2001.- Rinde su declaración preparatoria, y sale libre con una fianza de cien mil pesos (expediente 293/2001-B)

19 de Julio de 2001.- El Juez Séptimo por M. de Ley Guillermo Olivares decreta también prescrito el delito de Lesiones (expediente 293/2001-B)

23 de Julio de 2001.- El ministerio público adscrito al Juzgado Séptimo Penal interpone el recurso de Apelación en contra de la declaración de prescripción del delito de Lesiones.

22 de Octubre de 2001.- Resuelve la Sexta Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia (Toca 966/2001) que el delito de lesiones no esta prescrito, pero decreta auto de libertad por falta de pruebas, regresando el expediente como Averiguación Judicial al Juzgado 7° en Materia Penal.

08 de Abril de 2002.-La Contraloría General del Estado resuelve instaurar procedimientos administrativos contra los médicos peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense Raymundo Flores Pérez y Enrique González Galván y a la Agente Ministerio Público Lic. María Dolores Castañeda Camarena dentro del expediente QDJ-063/2001-A.

30 de Mayo de 2002.- Después de ofrecer el ministerio público y los suscritos múltiples pruebas, el Juzgado 7° con su titular en funciones otorga una nueva orden de aprehensión por el delito de lesiones graves a titulo de culpa.

01 de Junio del 2002.- Mediante Oficio D/2012/2002 dentro de la causa penal 293/2001-B se pone a disposición del Juez 7° al Sr. Bucio Dávalos, tomándole su declaración preparatoria en esa misma fecha el mismo día sale libre con una fianza de cien mil pesos.

03 de Junio de 2002.- Se le decreta la formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de lesiones en agravio del menor Alfredo Emmanuel Viniegra Aceves.

06 de Junio de 2002.- Bucio Dávalos apela la resolución y recusa sin causa al Juzgado 7°, empieza a conocer el Juzgado 8° en Materia Penal con un nuevo número de expediente 286/2002-A.

06 de Noviembre de 2002.- El Director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forense resuelve sancionar a los peritos Raymundo Flores Pérez y Enrique González Galván, con 25 días de suspensión sin goce de sueldo al primero de ellos y 5 días sin goce de sueldo al segundo.

17 de Diciembre de 2002.- El Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco resuelve imponer la sanción de destituir a la Agente del Ministerio Público Lic. María Dolores

Castañeda Camarena.

31 de Marzo de 2003.- Resuelve la apelación la Segunda Sala en Materia Penal del S.T.J., en el Toca 974/2002 confirmando la formal prisión.

27 de Agosto de 2003.- La Segunda Sala en Materia Penal de nueva cuenta le confirma la formal prisión al cumplimentar un amparo promovido por el médico Bucio Dávalos.

Agosto de 2003 a Enero de 2005.- se desarrolla la instrucción, aportando los suscritos a través del ministerio público y favor de nuestro pequeño hijo gran cumulo de pruebas que demuestran definitivamente la responsabilidad penal del médico Jaime Bucio Dávalos.

2004.- Fojas 1021 a 1023 exp., 286/2002-A Juzgado 7°, Pericial Clasificativo Definitivo de Lesiones de Alfredo Emmanuel.- Daños neurológicos, daño motriz, sordera. Lesiones que por su naturaleza si pusieron en peligro la vida del menor y son irreversibles.

01 de Marzo de 2005.- El Juez 8° en Materia Penal pronuncia sentencia condenatoria al médico Jaime Bucio Dávalos por su responsabilidad penal en el delito de lesiones graves a titulo de culpa en agravio de nuestro menor hijo Alfredo Emmanuel Viniegra Aceves, imponiéndole 04 años de prisión y suspensión por un año para ejercer la profesión, en cuanto a la reparación del daño la cantidad de \$604.089.00 pesos y \$35,521.00 dólares.

15 de Abril de 2005.- Apela a la Sentencia el médico Bucio Dávalos.

14 de Julio de 2005.- Resuelve la Sala Auxiliar Mixta del S.T.J., toca de apelación 456/2005 confirmando la Sentencia de 01 de Marzo de 2005 del Juez 8° Penal.

01 de Marzo de 2006.- La Sala Auxiliar Mixta del S.T.J. acatando la resolución de un amparo promovido en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Amparo Directo 420/2005) por el médico Jaime Bucio Dávalos, analiza diversas pruebas de descargo, encontrando otra vez, penalmente responsable a Bucio Dávalos por lo que le confirma la Sentencia de 01 de Marzo de 2005.

06 de Octubre de 2006.- El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito (Amparo Directo 169/2006) declara insubsistente la Sentencia de 01 de Marzo de 2005 y ordena reponer el procedimiento a fin de que el Juez 8° Penal recepcione una prueba consistente en pericial en neonatología y un a vez cumplida continúe el procedimiento.

09 de Marzo de 2009.- Perito en Neonatología Tercero en Discordia, Doctor Eusebio Angulo Castellanos Jefe de Neonatología del Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, concluye que el médico Jaime Bucio Dávalos no solicito los exámenes conducentes de manera preventiva, actuó con negligencia y postergo el tratamiento durante 11 horas en la estancia de Alfredo en el Hospital Ángel Leño, y los daños en el paciente son para el resto de su vida.

Octubre de 2006 a Agosto de 2009.- Este tiempo lleva reponer el proceso para una sola prueba Pericial en Neonatología. Prácticamente 3 años.

18 de Septiembre de 2009.- El Juez 8° en Materia Penal del S.T.J., emite sentencia nuevamente condenatoria (exp., 286/2002-A) al médico Jaime Bucio Dávalos imponiéndole 04 años de prisión y suspensión por un año para ejercer la profesión, a la reparación del daño la cantidad de \$604.089.00 pesos y \$35,521.00 dólares.

El sentenciado apela.

14 de Diciembre de 2009.- La Sexta Sala en Materia Penal del S.T.J. del Estado de Jalisco se avoca al conocimiento y estudio de la apelación interpuesta por el sentenciado Bucio Dávalos asignándole el toca número 1641/2009.

17 de Marzo de 2010.- Se celebra la llamada Audiencia de Vista dentro del Toca 1641/2010

23 de Marzo de 2010.- Con una rapidez inusitada en 6 días naturales o en 3 hábiles después de la Audiencia de Vista, los señores Magistrados de la Sexta Sala en Materia Penal del S.T.J. resuelven la Apelación interpuesta por el médico Bucio Dávalos en relación del Sentencia de 18 de Septiembre de 2009, declarándola insubsistente y dicen, nulo todo lo actuado a partir del 01 de Junio de 2002. Regresan el tiempo procesal 09 años atrás.

02 de Junio de 2010.- El Juzgado Séptimo en Materia Penal en el Estado de Jalisco del S.T.J. le toma su declaración preparatoria al indiciado Jaime Bucio Dávalos, de inmediato solicita la libertad bajo fianza, se retoma el número de expediente 293/2001-B.

04 de Junio de 2010.- Se solicita a través del Agente del Ministerio Público se amplíe el monto fijado a la libertad bajo caución, en base a la probable reparación del daño, se abre incidente y después de más de 06 meses aún no se pronuncia el Juzgado Séptimo. (01 Diciembre 2010)

08 de Junio de 2010.- Avocado en la reposición del Proceso número 293/2001-B el Juzgado Séptimo en materia Penal en el Estado de Jalisco le decreta la Formal Prisión a Jaime Bucio Dávalos el 08 de Julio de 2010. De inmediato apela Jaime Bucio Dávalos esta resolución pero es hasta el 04 de Octubre de 2010 con oficio 7059/2010 de fecha 22 de Septiembre de 2010, el Juzgado Séptimo remite los duplicados del expediente 293/2010 al S.T.J., quien los recibe el 04 de Octubre de 2010, solo este sencillo tramite que les demoro 05 meses. Recurso que actualmente conoce la Primera Sala en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. (01 de Diciembre de 2010)

06 de Julio de 2010.- Gracias a la valiosa ayuda del Abogado Tomas Salas Parra se presenta queja administrativa en contra de los Magistrados integrantes de la Sexta Sala en Materia Penal del S.T.J. del Estado de Jalisco, le correspondió el número 02/2010, les toma más de 04 meses la integración. Resuelven el 29 de octubre de 2010 determinan no admitirla. El Lic. Tomas Salas propone interponer un Amparo a efecto de que la admitan mismo que se interpone el 02 de Diciembre de 2010.

01 de Septiembre de 2010.- Se solicita información al S.T.J. a través de su Unidad de Transparencia relacionada con del Capitulo III de la Ley Orgánica del Poder Judicial que habla de las quejas administrativas que se presentan contra los Magistrados de aquel órgano, no contesta, se interpone Recurso de Revisión en el ITEI, se admite, el S.T.J., no contesta ni entrega la información y el 05 de Octubre de 2010 el ITEI acuerda ordenar al S.T.J., que entregue la información solicitada en los plazos y términos previstos por la Ley de Transparencia. Lo que cumple hasta el 28 de Octubre pasado, con el siguiente resultado: **Quejas admitidas en los últimos 4 años: - 0 -, Sanciones: - 0 -.**

26 de Octubre de 2010.- El Lic. Tomas Salas promueve el Amparo 914/2010 que es tramitado en el Juzgado Noveno en Materia Penal del Tercer Circuito, contra actos del Juez Séptimo de lo Penal del Primer Partido Judicial del S.T.J. del Estado de Jalisco por la falta de acuerdos oportunos dentro del Proceso 293/2001-B, la Audiencia Constitucional se ha diferido en dos ocasiones porque el Juzgado Séptimo no envía completas las copias del expediente, la nueva Audiencia esta señalada para el 09 de Diciembre de 2010.

Alfredo Viniegra Martínez.- Papá de Alfredo Emmanuel Viniegra Aceves, un chico que me fortalece a diario con su amor y caricias, con su tenacidad, disciplina y orden. Y me ha enseñado a no darme por vencido aunque muchas cosas y eventos parezcan adversidad.

Bibliografía y citas aclaratorias

1. Se define como una concentración de bilirrubina que excede los 1.5 mg% en la cifra total, siendo esto probablemente universal en todos los recién nacidos durante la primera semana de vida extrauterina. En el 10 a 15% de los nacidos normales a termino las cifras de ella pueden llegar a ser lo suficientemente elevados para hacerse visible como ictericia ante el examen físico realizado por el médico. En diferencia a otras edades la ictericia neonatal es raramente visible con cifras de bilirrubina que estén por debajo de los 7 mg% en la cifra total. Definición obtenida en: http://www.drrondonpediatra.com/ictericia_recien_nacido.htm
2. Remoción mecánica de la sangre del recién nacido y su reemplazo por sangre de un donador compatible. Terapia estándar cuando los niveles de bilirrubina se acercan a los tóxicos para el sistema nervioso central. Definiciones obtenidas en : <http://www.slideshare.net/lga80/recin-nacido-enfermo>
3. Nivel muy por encima del normal y se mantuvo en dichos miligramos sin intervenir en su control, lo que provocó el daño.

LA OTRA CASA: CALLE Y EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL

Adriana V. Rodríguez Salguero

Las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela... La sociedad trata de corregir este mal, pero el éxito de sus esfuerzos es muy limitado. Solo en un futuro próximo podrán ser reivindicados los derechos del niño y del adolescente para que sean útiles a la sociedad. México la gran ciudad moderna, no es la excepción a esta regla universal; por eso esta película, basada en hechos de la vida real, no es optimista y deja la solución del problema a las fuerzas progresistas de la sociedad...

Voz en off al inicio de la cinta:

"Los Olvidados", Luis Buñuel, 1950, México.

.....

Hablar de niños, niñas y adolescentes en situación de calle nos obliga a considerar que en muchos casos existen algunos que padecen explotación sexual comercial infantil (Esci); pareciera entonces una historia de esas raras, cuando se cree en la seguridad de una casa donde protegerte.

Ingresar a "la vida en la calle" es ponerse lentes para ver lo que nos es invisible; es darse cuenta de como viven o "sobreviven", niños, niñas y adolescentes que no han tenido la promesa de una vida mejor. Donde "soñar" es tener algo que comer, donde los riesgos representan quizás no estar mañana. Aquí se vive de noche, cuando la ciudad duerme y no hay miradas incómodas que te juzgan por ser diferente, ser pobre, vivir en la calle, de que limpies vidrios, vendas tu cuerpo y recurras "al toncho"-drogarte- para aguantar esta vida que les cobra cara la factura.

La pregunta: ¿cómo se llega a la calle?, tiene respuesta rápida: escapando del maltrato psicológico, físico, del abuso sexual, del abuso emocional asociado a la indiferencia, discriminación en razón de género, carencias afectivas, desprotección y de comprensión en la familia. A veces también de la pobreza, del hambre, de la desesperanza... anhelando simplemente estar mejor en otro lugar aunque este sea la calle. Las respuestas se repiten: “*tenia broncas con mis jefes*”, “*se pasaban de lanza*”, “*me golpeaban*”, “*nunca los conocí*”, “*me abandonaron*”, e incluso hay quien narra las peores formas de violencia y agresión sexual. Hablar de ello no es fácil porque duele en lo más profundo. En alguna ocasión pregunté a un niño por su familia y con la mirada perdida me contestó “*que de ellos era mejor no saber, que así estaba mejor*”.

¿Cómo harías para sobrevivir en la calle? Los niños, niñas y adolescentes en situación de ESCI son luchadores permanentes de vida, sobrellevan su sufrimiento de la vejación y corrupción de sus cuerpos con lo que les “*aliviana*”: *la monita, el toncho, el gallo, el tres, el pasón*, son tan solo algunos de sus mejores amigos; esos les ayudan a respirar la fantasía de un día mejor...

Como en toda subcultura el lenguaje cambia: *vaisa, churro, avión, compa, la tira*; las opciones para divertirse son otras, los oficios también: faquir, payasito, franelero, o la comercialización de su cuerpo, a lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nombra “la peor forma de trabajo infantil”¹, sin embargo, más que acto laboral esto representa uno de los peores delitos, convirtiéndose el que lo perpetra en un delincuente o en el último eslabón de la cadena del crimen organizado de la trata y tráfico de personas.

La comercialización de sus cuerpos se da a través de prácticas sexuales de riesgo, como prostitución infantil, pornografía y otros actos de corrupción de menores, siendo muchas veces no retribuidos económicamente, porque en muchos casos no es consensuado entre ambos: el abusador y el infante. Su vulnerabilidad da lugar a riesgos de adquirir infecciones de transmisión sexual, vih/sida, embarazos tempranos, abortos, golpes, vejaciones, y lo que cualquiera pueda hacerles sin su consentimiento.

El costo de afectación es grave, no importando cuanto ganan, sino la lesión a su dignidad y las consecuencias entre las que se presentan: negativismo, ideación e intentos suicidas, abuso de sustancias y psicotrópicos, automutilaciones en piel y extremidades, prácticas sexuales de riesgo, desnutrición, sentimientos de culpa, temores, miedos y vergüenza, depresión profunda, ambivalencia afectiva en la figura materna y paterna de origen, confusión inter-personal con el ofensor, pérdida de memoria y recuerdos, pesadillas y terrores nocturnos, desesperanza y pérdida de la espiritualidad asociado a vacíos existenciales, carencia de asertividad y pobre autoconcepto para relacionarse con otros de manera positiva, conflicto con figuras de autoridad, inadecuado manejo de tiempo libre e incapacidad para plantearse proyecto de vida a largo plazo de forma positiva; estas son solo algunas de sus heridas muchas veces a lo largo de sus vidas.

Todo lo anterior evidencia las múltiples violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes contemplados en documentos nacionales e internacionales, desde los de base como la Convención de los Derechos de los Niños, pasando por Convenciones, Convenios, Declaraciones, Protocolos, Legislaciones que dan cuenta de lo que es, debería ser o hacerse al respecto.

Se desconoce hasta el día de hoy cuantos niños, niñas y adolescentes viven en situación de calle y mucho menos cuantos han muerto en vía pública. Consideramos que por las características propias vividas en calle, su tiempo de vida se ha acortado más rápido de lo que debiera; las causas, igual de injustas y no justificadas.

Es importante al plantear una estrategia de reparación del daño a niños, niñas y adolescentes en situación de explotación sexual comercial (escnna), contemplar que las causales de este fenómeno son directas y asociadas. En las cuales, se presentan factores inductores, diferenciales y/o regulantes, es decir; va más allá del niño y la niña, se compone por un adulto explotador, un entorno cómplice y una sociedad que lo naturaliza.²

En nuestra ciudad esta referencia resulta comprobable, a través de la instalación: “La otra casa, niños en calle y escnna” y la publicación: “Tolerancia Cero: Características de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco”, dan cuenta “*de este secreto a voces*”, del que “*pareciera que no pasa nada*”, donde se normaliza la estadía del niño y la niña en calle y la violencia hacia la infancia. Aún cuando el estado ha reconocido su existencia (haciendo pronunciamientos, creando el Caivesi, llevando a cabo operativos policíacos en zona de comercio sexual como pseudo estrategia, pero en realidad violando garantías individuales de grupos desprotegidos y socialmente estigmatizados) dista de poder ejercer acciones de prevención e intervención eficaces para su erradicación, debido a la complejidad multifactorial (social, política, económica, cultural, familiar e individual) de la problemática.

La siguiente historia se desprende de mi trabajo de campo realizado para la publicación antes mencionada, dando crudo testimonio de las violaciones a derechos humanos hacia las poblaciones callejeras.

“Discriminar”:

Cuando una persona o grupo de personas menosprecian, ignoran o agreden o violan los derechos de un individuo o grupo de individuos por su género, raza, origen, condición física, preferencia sexual, credo religioso, o cualquier otra razón, ocasionando con ello limitaciones en el legítimo ejercicio de sus derechos y lesionando sus garantías fundamentales, reconocidas en la Constitución Federal.

Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación;
Conapred.

Me platicaron de “Juan” un joven en situación de calle con apenas 18 años, estaba hospitalizado, ya que fue golpeado sin motivo por policías quienes le ocasionaron heridas internas graves. Lo intervinieron quirúrgicamente. El se escapo durante su recuperación ya que no quería estar ahí. Tuvo que reingresar debido a la gravedad de su estado, el personal de salud decidió derivarlo a otro lugar, a pesar de que requería la atención especializada, enviándolo a un albergue para niños en situación de calle donde tiempo atrás el había estado viviendo. Siendo ahí donde le conocí. Su condición de salud era muy grave. Tenía una herida que abarcaba desde su pecho hasta el abdomen, casi de lado a lado del tórax. Su cuerpo estaba muy desgastado. En sus brazos había marcas de uso de drogas inyectables. Estaba muy delgado prácticamente en los huesos. Refería sentir mucho dolor. Se encontraba acostado en una colchoneta en el piso, ya que el albergue no contaba con los recursos para brindarle la atención y aceptaron su estancia como un “acto de buena voluntad”. “Juan” necesitaba atención medica especializada, dieta y cuidados específicos que le permitieran recuperarse, debido a las altas demandas de atención que su estado requería, el personal del albergue decidió mandarlo y abandonarlo en un centro de emergencias, como si se tratase de un “paquete”. En ese lugar tuvieron que derivarlo a un centro de atención para personas sin hogar, donde intentaron brindarle la atención medica que requería, sin embargo fue demasiado tarde... “Juan” falleció a los pocos días de estar ahí, solo y como un “paquete perdido”. Nadie sabía a ciencia cierta dónde estaba y que había sido de él. Su diagnóstico: positivo a Vih.

Agravantes: ser pobre, ser joven, no tener familia que vele por ti, sufrir violencia directa y estructural, no tener un hogar.

“Juan” no falleció por el Vih. Falleció a consecuencia de la agresión que sufrió de manos de miembros de seguridad pública. Es verdad que su situación se complico debido a su sistema inmunitario comprometido, sumado a su precaria condición de salud (alimentación, higiene, uso de sustancias adictivas, etc.), y a las condiciones de un sistema e instancias que no se encuentran especializadas en brindar la atención pertinente, o que parecen ignorar, o que fingen no darse cuenta de las implicaciones para la atención de las poblaciones vulnerables, el resultado es así catastrófico.

El caso de “Juan”, es similar al de muchos niños y adolescentes en condición de calle. Llegó muy pequeño, huyendo de un entorno familiar agresivo, ante la poca atención a su caso por parte de las autoridades encargadas de infancia, se vio orillado a recurrir a la Esci para sobrevivir, siendo éste su único refugio y práctica por la cual adquirió el Vih (a los 10 años aproximadamente). En el momento que le conocí, su progresión era avanzada, es decir, técnicamente se encontraba en fase terminal de Sida, suponemos que su diagnostico ya era manejado por el personal de salud. Sin embargo parece que de manera velada el tenía referencia de su condición ya que de forma tardía fue que le

hicieron las pruebas pertinentes, siendo el diagnóstico positivo a VIH el que dio la pauta para que se le transfiriera al albergue ya que si este no lo admitía la opción sería que se quedara a morir en calle.

El albergue, al verse rebasado por la situación, sin tener el conocimiento de su condición serológica, y por el costo que implicaba el apoyar al joven decidió abandonar a Juan en el servicio médico municipal.

En el equipo de investigación nos dimos a la tarea de localizarlo, lo cual fue prácticamente imposible. Tuvimos conocimiento tiempo después de su fallecimiento y del lugar donde se le enterró, algunos de los niños fueron a visitarlo para despedirse. Ante los hechos interpusimos una queja ante la Cedhj, la cual no prosperó, debido a la poca información que se pudo obtener del caso, incluso se nos pidió a los investigadores que les apoyáramos al respecto para armar el expediente y donde las pocas respuestas que obtuvieron por parte de las instancias fue que el hecho se maneja de manera adecuada... la justicia no llegó para “Juan” y tampoco para muchos niños y niñas más.

“El fracaso de las intervenciones gubernamentales se da cuando se tiende a operar en algunos de los hilos de la trama, sin poder reconstruir los derechos vitales y básicos que permitan la sobrevivencia y participación social”.

Alberto L. Bialakowsky

En la calle parece que todo se vale...

Durante el periodo de investigación las agresiones directas e indirectas a los niños, niñas y adolescentes las vimos como una constante no sólo por parte de los perpetradores, sino por las instancias públicas, (miembros de seguridad pública, Procuraduría de Justicia del Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros;), teniendo casos de secuestro no remunerado, detención arbitraria, homicidio, abuso sexual policiaco, malos tratos por parte de los ministerios públicos, y las instancias encargadas de la impartición de justicia, entre otros.

Otro ejemplo lo encontramos en el caso de “Luís”, un adolescente fue golpeado y torturado secuestrado por policías. Cuando por fin estuvo libre, se contactó con nosotros para que le ayudáramos. Requería atención médica y estaba decidido a denunciar, por lo que se le explicó cual sería el procedimiento y él resolvió continuar para presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Después de realizar todos los trámites me comentó que no importaba si no se resolvía la situación desde las instancias pertinentes ya que al final tuvo posibilidad de verles la cara a sus agresores y estaba decidido *“a partirles su madre por lo que le habían hecho”*, no importando el riesgo que le representara lo que importaba era hacer justicia aunque fuese por propia mano, ya que le quedaba claro que nunca llegaría para él.

Las historias son muchas, las voluntades para cambiar las cosas pocas, vivir la calle implica entrarle, no desde detrás del escritorio donde el lenguaje, condiciones y códigos callejeros son ajenos; para llevar a cabo intervenciones, programas, investigaciones y políticas, el espacio inicial es la calle misma.

En palabras del sociólogo José Manuel Grima: *“tendríamos que ubicar que todo escrito científico es a la vez político, en sentido que busca incidir en la realidad concreta a través de prácticas que modifiquen las situaciones dadas”*, es decir es ir más allá de esta crisis deshumanizante, de que no nos importe el otro, de apostar para hacer cambios sociales, a partir de la dignidad y el respeto ineludible a los derechos humanos.



“El patio de mi casa”

Interior de vivienda de niños en situación de calle, la cual se encuentra en el subsuelo.

“mis vecinos son bien importantes, algún día cuando nos conozcamos la vida me ayudaran a cambiar”

Juan

domicilio: ducto de aire subterráneo esq. boca de tormenta.

Nota:

El presente trabajo se desprende de mi participación en el proyecto de investigación: “Tolerancia cero”, Características de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco, el cual fue ganador del Primer Lugar en Investigación del Tercer Premio UNICEF 2010 “Los Derechos de la niñez y la adolescencia en México”, convocado por Unicef México. Dicho premio, debido al plagio realizado por una instancia de la sociedad civil, violando los derechos de los autores, ha sido desconocido por la instancia convocante a pesar de que reconocen la calidad del trabajo. Esto representa una afrenta a la labor seria y profesional en la investigación.

Bibliografía:

- Araya Castelli, Denisse, Corporación ONG Raíces, Chile, (2010), Ponencia, “Estrategia de reparación del daño a niños, niñas y adolescentes victimas de explotación sexual comercial (escnna)”, 2º Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Puebla.
- Bialakowsky, Alberto L; Asociación Latinoamericana de Sociología, Argentina, (2010), Ponencia, La coproducción investigativa en la construcción de conocimiento sobre vulneración de derecho, 2º Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Puebla.
- Chávez Gutiérrez, María Antonia, (coord.), María Rita Chávez Gutiérrez, Daniel Manríquez González, Erika Ramírez Díez, Adriana Verónica Rodríguez Salguero, Tomas Eduardo Trinidad López (coautores), (2010), “Tolerancia cero”, Características de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco. México, Dif Jalisco, “Programa de la calle a la vida” de Dif Nacional, Universidad de Guadalajara.
- Grima, José Manuel, Instituto Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, Argentina, (2010), Ponencia, “Explotación Sexual Comercial Infantil. Derechos Humanos y Políticas Públicas”, 2º Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Puebla.
- Rodríguez Salguero, Adriana Verónica, “La otra casa, niños en calle y ESCNNA”; Técnica: instalación / fotografía, narrativa; Sublimación en tela raso satín, análogo, digital, b&n, formato medio, 16 piezas tamaño 50cm X 50cm, 2007 – 2010.

Bibliografía y citas aclaratorias

1. Organización Internacional del Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, <http://white.oit.org.pe/ipec/pagina.php?seccion=42&pagina=111>
2. Araya Castelli, Denisse, Corporación ONG Raíces, Chile, (2010), Ponencia, “Estrategia de reparación del daño a niños, niñas y adolescentes victimas de explotación sexual comercial (escnna)”, 2º Congreso Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, Puebla.

PEDERASTIA COMO INEQUIDAD DE GÉNERO: El Caso de Margarita.

María de los Ángeles Cortes Almaguer

Alternativas para la Comunicación, la Sexualidad y el Desarrollo Comunitario A.C., Colectivo OLLÍN

¿Son las escuelas públicas espacios seguros para las niñas, los niños y adolescentes? Cada vez más y no por que está de moda o por la accesibilidad de la información en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías, aparecen más casos como el que en breve se presenta. La equidad de género forma parte de los Derechos Humanos y de una cultura de la legalidad que hoy se plantea como un valor social a escala mundial. Sin embargo, la equidad de género no sólo tiene su pertinencia entre iguales alumna-alumno sino, también y más importante, entre maestro y sus alumnas.

El abuso de poder en el ejercicio de las funciones docentes tiene relación con el incumplimiento a la confianza que depositan madres y padres de familia, la comunidad escolar y la sociedad toda, con adultismo y en ocasiones con abuso verbal y el abuso sexual pederasta.

Llama la atención que en la legislación vigente sobre las responsabilidades de los servidores públicos se contemplan valores como *“Salvaguardar la legalidad, la imparcialidad, la eficiencia, la honradez y la lealtad en el ejercicio de sus funciones”*. La Ley de Educación del Estado de Jalisco promueve por su parte los *Ético-Sociales, una cultura de igualdad y equidad de género*, el respeto de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, y que la Constitución además determinó lineamientos de la educación pública a manera de garantías individuales que en estos casos, el adultismo las contraviene y solapa dicho comportamiento.

Cito lo anterior por lo ocurrido a una niña de 9 años en una escuela primaria pública de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como desafortunadamente acontece en otros tantos espacios escolares. Por lo complicado y riesgoso del proceso, usaré nombres ficticios para respaldar la seguridad de las involucradas.

Una mañana se despertó llorosa y diciendo que le dolía el estómago, “no quiero ir a la escuela, me duele la panza” suceso extraño, no es común que dejara de ir a la escuela, dijo su madre a la que le llamaremos María. Este fue el inicio de una serie de quejas y manifestaciones por parte de su hija de desagrado entorno a la hora de la escuela. Si bien

no variaba mucho su actitud, sí se percibía descansada una vez que pasaba la hora de ingreso escolar y se quedaba en casa, continuamente aislada.

¿Qué le sucedió a quien llamaremos Margarita? ¿porque dejó de sonreír? ¿Qué le pasó a la niña que llora con tanta facilidad? ¿Qué le pasó que no quiere jugar y en ocasiones hasta le cuesta ir a dormir? ¿Qué teme? Ó ¿A quién le teme?

Así inicia la búsqueda de María, una madre ordinaria encargada de la atención y cuidado de la familia, del hogar y que busca entre todas sus actividades hacer algunas ventas por catálogo para ingresar algo más en lo económico a casa, pero ahora ni en eso puede pensar. Comienza a hacer preguntas que son evadidas por la niña, lo que afortunadamente no la detiene y sigue preguntado. Va a la escuela a ver como va en clase. ¿Cómo es su comportamiento en el recreo? ¿Cómo se relaciona con sus compañeras y compañeros de clase?, pues asiste a una escuela pública mixta.

En su primer intento no tiene éxito, no hay disposición para el diálogo con el personal docente del plantel, ya que se le indica que tiene que solicitar cita y posteriormente se le atenderá; tampoco la directora puede recibirle para hablar de calificaciones reportadas o conducta. Transcurre un día más sin saber cómo actuar, qué decir o hacer al respecto, la incertidumbre y el dolor de ver a una niña de tan solo 9 años, en tercer grado de primaria con esta actitud, le aflige en demasía.

María sigue cuestionando y abrió por fin el diálogo con una amiga que también lleva a sus hijos a la misma escuela, coinciden que se debe hacer algo y le propone que si la niña no quiere platicar con ella es quizá por pena o miedo, que sería bueno buscar ayuda, y juntas buscan un lugar del que la amiga de María había escuchado y al parecer estaba cerca.

Las afectadas son recibidas en una Institución de la sociedad civil que trabaja con niñas, niños y jóvenes. Al ser atendidas y posterior a la entrevista con Margarita, consideran que es posible la existencia de una agresión en contra de la niña, por lo que recomiendan derivar el caso a otra asociación civil que podría abordar el tema de sexualidad para su manejo. La recomendación es aceptada por la madre de la niña e incluso le acompañan en ese momento haciendo la cita.

Es así como llegan María y Margarita al Colectivo Ollin** donde se recibe a la niña para entrevista inicial y para evaluación. El trabajo con la infante fue difícil debido a las características del caso. La niña se encontraba inquieta, temerosa y sobre todo, manifestó sentir culpa. Constantemente repetía que “era un juego del que no podía decir nada por que entonces ya no podría asistir a la escuela”. Esto evidenciaba que había sido manipulada en un ambiente velado de confianza por quien le representaba autoridad.

En la entrevista con apoyo de algunos juegos y sobre todo con muñecos, en este caso muñecos sexuados, se logró dialogar ampliamente sobre lo que estaba pasando con Margarita. Esto permitió dar soporte e iniciar el abordaje para la resignificación de la

vivencia. Una vez que se sintió segura y escuchada sin amenaza compartió los abusos que le sucedían en el aula, a ella y otras niñas del grupo. La meta de esa sesión fue lograr que la niña comprendiera que el abuso era responsabilidad del agresor únicamente, así como impulsarle para que identificara personas idóneas de su contexto con quienes pudiera tener apoyo y seguridad.

El caso de Margarita nos llevó a conocer de otros casos. No era sólo ella quien resultó afectada y los sucesos acontecían en donde las niñas y los niños debieron estar protegidos, cuidados y respetados: **Las aulas escolares**. El artículo 9 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, al respecto contempla que

*“En la impartición de todo tipo de educación para menores de edad, se tomarán las medidas que aseguren al educando la protección y cuidados necesarios para preservar su **integridad** física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su dignidad. La aplicación de la disciplina escolar será compatible con su edad”*

Siendo esta la línea que debe seguirse en los planteles educativos, ¿Qué es entonces lo que esta pasando para que niñas y niños sean carne de cañón todos los días al interior de estos espacios?

Existen deberes del personal docente y directivo, ya que la ley de los servidores públicos menciona en su artículo 61 que es necesario:

II. Llevar a cabo con responsabilidad, diligencia y prontitud, la investigación, atención, cuidado y protección de personas que se encuentren en una situación de peligro real e inminente de sufrir daño físico o psicológico, en su entorno social o familiar, así como denunciar de inmediato los hechos a la autoridad competente.

Dichas obligaciones se omitieron en el caso de Margarita, puesto que los días siguientes fue difícil el tránsito por el plantel al evidenciarse lo ocurrido. En vez de recibir apoyo y protección, la palabra de la niña fue desacreditada, así como la de su mamá, que decidió hablar del caso y buscar asesoría para levantar una denuncia sobre lo que pasaba. Hecho en donde nuevamente la actitud adultista se hace presente por las autoridades del plantel.

“El trabajo en equipo siempre suena mejor” decía María y comenzó a realizar un poco de diálogo con algunas madres de las niñas que iban en el grado de Margarita con la finalidad de hacer algo para evitar que siguiera pasando a otras niñas más. El esfuerzo fue mucho, pero los resultados muy pobres. Esta situación desmotivó a María, pero continuó preguntando y mientras obtenía respuestas, continuó por su parte buscando apoyo en lo individual.

Margarita continuó con el acompañamiento psicológico por un tiempo, pero le fue difícil a María poder incidir en la familia para la intervención, pues en muchos de estos casos las secuelas están en cada integrante de la familia que se involucra de diferentes formas, es toda una cultura e historia lo que se mueve en torno al abuso o agresión sexual, por lo que la vivencia desde la óptica del padre en este caso, era minimizar lo acontecido para evitar que su hija se fuera a “quedar” ¿Quién se va a querer casar luego con ella cuando crezca?. Esta actitud es parte de la desinformación que se tiene sobre la sexualidad y los derechos sexuales de todas y todos, y son las aulas uno de los principales lugares donde se debe incidir, “*Prevenir con Educación*” dice la declaración Ministerial de la Ciudad de México, firmada por Ministros de Salud y Educación de América Latina y del Caribe,,, *Afirmamos el compromiso con el derecho al disfrute del más alto nivel de salud, a la Educación, a la no discriminación y al bienestar de las generaciones actuales y futuras...* Asegurar el acceso a educación en sexualidad y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad e integral, Tomando este punto, si bien se enfoca mucho en prevención de VIH/Sida que también está dentro de los riesgos que conlleva el abuso sexual infantil. El lema de Prevenir con educación permite visualizar y rescatar la necesidad de formación desde los primeros grados de educación formal en el auto cuidado, respeto y valoración del cuerpo para evitar riesgos y abusos en todos los aspectos, esta formación permite desarrollar conocimientos y habilidades para la vida.

Citar aquí la declaración conlleva el justificar la invitación de que se tome en cuenta, debido a la frecuencia y gravedad de los casos de abuso en infantes y la falta de seguimiento adecuada para el proceso de la persona afectada, como del perpetrador o perpetradora según corresponda; seguir cuestionando si debe tenerse una educación sexual integral en las escuelas suena a tiranía.

Entonces, ¿cómo es que se informarán niños y niñas para exigir sus derechos y prevenir los abusos? Siendo los derechos para todas y todos por igual, no se respetan, más aun ni siquiera se les informa a los niños sobre sus Derechos Sexuales. En el caso de Margarita, la presencia de su mamá ha sido un pilar, y esto, cabe mencionarlo debido a que la ausencia del padre representa en la niña otra pérdida más. La niña siente la no aceptación y el rechazo de su padre debido a lo ocurrido, lo cual no es favorable para el proceso de ella.

Al tiempo de trabajar con la niña y con las recomendaciones para las cuestiones legales hechas por el CEPAD, se dieron algunas sesiones más, hasta que después de un tiempo de apoyo con María menciono que estaba siendo presionada para que no siguiera con el “ruido” respecto al caso. Llegaron una serie de amenazas para la familia y el papá apoyó la moción de dejar todo por la paz, total decía, “si ya cambiaron al maestro de lugar ya no pasó nada”.

¿Qué está pasando con las prácticas docentes que permiten, propician, encubren, justifican acciones de desigualdad?

¿Qué están haciendo las autoridades para determinar y asegurar el perfil psicológico idóneo para la docencia? No nada más el perfil profesional.

¿La Secretaría de Educación en Jalisco cuenta con un departamento de apoyo psicológico a víctimas con esta vivencia?

Desde mi experiencia respecto a casos como este, no se cuenta en su mayoría con el personal capacitado para tratar la sexualidad. Y no solo para sí como profesionales, si no para transmitirlo a las alumnas y alumnos. Falta el conocimiento para un abordaje profesional hacia las personas que han sufrido cualquier tipo de abuso e intimidación e incluso para atender a la persona que lo ejerce.

Por otro lado, no existe una instancia interna que se encargue de auditar y supervisar con imparcialidad el comportamiento docente y directivo en los actos u omisiones que contravienen una cultura de legalidad. Al revisar la congruencia entre la seguridad y la protección que debe haber en las escuelas para las niñas y niños, tal como lo especifica la ley, al interior de los planteles sucede lo contrario en las relaciones educadores-educandos, violentando el respeto y la salvaguarda de la integridad física y psicológica de las niñas y los niños.

Cabe ahora preguntarse, ¿Por qué para algunas autoridades educativas y personal docente la vivencia con respecto a diversidad sexual explícita es una falta de respeto para sus educandos y la pederastia o el abuso sexual no lo es? Por mencionar un ejemplo. Retomando: “Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Y dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico, pues es esencial para el bienestar individual, interpersonal y social” y como lo menciona la cartilla de los Derechos Sexuales de Jóvenes, son derechos (cito algunos de ellos):

1. *Derecho a la libertad sexual*: establece la posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos y excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexual en cualquier etapa y situación de la vida.
2. *Derecho a la autonomía, a la integridad y a la seguridad sexual del cuerpo*: incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la propia vida sexual en un contexto de ética personal y social; están incluidas también la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres de tortura, mutilación o violencia de cualquier tipo.
3. *Derecho a la privacidad sexual*: legitima las decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad, siempre y cuando no interfieran con los derechos sexuales de otros.

Para que las niñas y los niños exijan y respeten estos derechos deben conocerlos.

Entonces podrán decir “alto, esto no está bien”, ellos deben saber que es lo que pasa respecto a su cuerpo y la forma de cómo son tratados.

Margarita es un caso de muchos otros, ¿cuantos más deben conocerse para poder detener estos abusos de poder? Y una vez conocidos o puestos a la luz pública, cuánto debe pasar para que procedan conforme a Derecho y no solo se ajuste a un cambio de lugar de la persona ofensora o la expulsión del centro escolar de la víctima.

Un México seguro... seguros y seguras de que no pasa nada... si seguimos en el silencio.

TRABAJADORES DE TELESECUNDARIA EN JALISCO, UNA DÉCADA DE ORGANIZACIÓN Y LUCHA DIGNA POR LOS DERECHOS HUMANOS LABORALES

Profesor Arturo Contreras Macías
Movimiento de Bases Magisteriales

*Si hay dignidad en los trabajadores, la lucha por los derechos humanos
laborales tiene futuro*

Los trabajadores de telesecundarias obtuvieron la represión como respuesta a sus demandas laborales y profesionales en el año nombrado por el gobierno como del bicentenario de la Independencia de México y del centenario de la Revolución Mexicana.

Este 2010, la respuesta a las demandas del maestro digno de telesecundaria en el estado de Jalisco, fue la represión ejercida por el gobernador Emilio González Márquez, el secretario de educación, José Antonio Gloria Morales, el secretario de Seguridad Pública, Previsión y Readaptación Social, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, y del secretario de Vialidad y Transporte, Diego Monraz Villaseñor; quienes actúan con poca capacidad de escucha y sin titubear utilizan los recursos del erario público, mostrando su menosprecio, llevando al encarcelamiento y propiciando golpes como respuesta a quienes se atreven a pensar y actuar diferente a ellos. Es decir, aquellos que se encuentran en la búsqueda de satisfacer necesidades mínimas para desarrollar el trabajo educativo en condiciones dignas.

El 28 de junio de 2010, de las 11:30 horas a las 14:30 horas, en la glorieta de La Normal, localizada en el cruce de las Avenidas Ávila Camacho y Alcalde, dichas autoridades dieron muestra de intolerancia, salvajismo, y violencia, ante un grupo de aproximadamente 300 maestros que nos manifestábamos de manera pacífica.

Qué el pueblo de Jalisco, y el mundo de cuenta que: los señalo, responsables si mi familia o mi persona sufrimos alguna, presión, lesión o atentado física y/o psicológicamente.

De manera específica pueden señalarse a tres elementos que estuvieron al mando del operativo represor, y del cual se consiguieron testimonios fotográficos y solicitó a la Comisión de Derechos Humanos en Jalisco, que investigue sus nombres y los publique junto con las fotografías para que la sociedad de Jalisco les reconozca y pueda colocarlos en el lugar que la historia les confiere “caníbales de los trabajadores”. Ellos, los policías, los agentes de vialidad y los “mediadores” de gobernación, son el rostro, el cuerpo y las manos que representan a la “autoridad”.

Porque tienen bajo su mando a personal que ciegamente obedecen sus órdenes

El día 28 de junio de 2010, pudo sentirse en carne propia el poder de la injusticia. Cuatro policías estatales, con uniformes “negros” hoy “pintos”, usando todo el poder de la “ley” a la vista complaciente de quienes les ordenan, y con el aval de Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, Secretario de Seguridad Pública, Previsión y Readaptación Social del estado de Jalisco (SSPPRS) quien carece del menor aprecio de la cultura de los derechos humanos en Jalisco¹. lo señalo de manera directa e inequívoca como autor flagrante violaciones a derechos humanos, estoy seguro de que de allí se derivó la orden.

Todos los involucrados en el operativo para evitar la manifestación de maestros de Telesecundarias ignoraron el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la ONU, adoptado por México en 1979, donde se establecen los procedimientos y modales que se deben de usar para hacer cumplir la ley.

Aún con la presencia de los medios de comunicación, de mis indignados compañeros y el testigo mudo, silencioso, del monumento al maestro en el cruce de las avenidas de “Los Maestros” y “Alcalde” de la ciudad de Guadalajara, alrededor de las 14:40 horas, el que escribe fue literalmente arrojado cual piltrafa a la caja trasera de una patrulla de la policía estatal, acto seguido, las rodillas de un policía fueron colocadas una en mi cuello y la otra en la cabeza, para hundirla lo más profundo posible y que mis compañeros no me pudieran ver. Cómo gritaba que me estaban llevando, me decían una y otra vez ¡Ya, cállate! No conformes, otro, colocó sus rodillas en mis caderas y mi estómago a la vez que me decían “te va a cargar la chingada”. Al día siguiente la prensa publicó notas y fotografías, algunas en primera plana que dan testimonio de lo aquí narrado.

Minutos antes de ser sometido me acerqué con los “mediadores”, el discurso mas amenazante fue el referido por el representante del Gobierno del Estado procedente de la Secretaría de Asuntos del Interior, que me dijo: ¡más vale que le bajen!. Otra persona ubicada al lado de los que marchábamos en protesta me decía: “no los van a golpear”.

1. La Comisión Nacional de Derechos Humanos mediante la recomendación pública que emitió a fines de agosto de 2004 Recomendación 104/94 que versa acerca de los traslados injustificados y malos tratos a internos del complejo penitenciario de Puente Grande Jalisco.

Momento después, los granaderos lo reconocen y lo jalan hacia su bando para unirse a ellos y los granaderos nos siguieron empujando con toletes y escudos a compañeros maestros. Una vez estando en el cruce de Avenida Maestros y Alcalde, donde nos impidieron el paso, tuve la oportunidad de platicar con un funcionario más, al que yo le solicité de buena manera un documento que hiciera constar que se habían llevado mi camioneta con el aparato de sonido. Yo les dije que no era posible que se la llevaran sin hacerme un inventario. Con enorme cinismo y lleno de prepotencia contestó: “ya ves; que si se pudo”. Le reclamé su forma de expresarse y endureció su postura, se retiró uno o dos minutos y enseguida comenzaron a golpearnos de nuevo a mí y a mis compañeros de telesecundaria. Acto seguido fue mi injusta detención haciendo uso excesivo de la fuerza llegando a la violencia.

Los policías que me detuvieron, me mantuvieron aproximadamente 30 minutos arriba de la patrulla frente a la Oficina del Registro Civil núm. 1 de Guadalajara ubicada por Av. Alcalde, de ahí giró el vehículo y junto a una tienda cercana, me cambiaron a otra patrulla que me condujo a los separos del edificio de la SSPPRS en la Av. 16 de Septiembre. Destaco que la persona que tomó mis datos a la hora que me ingresaron a las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en lugar de preguntarme mi nombre me llamó “moya” al menos diez veces con ese “mote”. Cuando me preguntó porque lo traen le dije: “por nada” estaba participando en una manifestación con maestros y me trajeron, “ya vez moya para que andas de revoltoso”, me dijo.

Quien tomó el parte médico después de relatarle la razón por la que me llevaron dijo: “No debería estar aquí”, Antes de entrar a la celda pregunté: ¿Cual es el cargo? y ninguno de los presentes contestó, se quedaron mudos, era evidente que no tenían los cargos que me iban a imputar y digo: “voy a entrar voluntariamente sin cargo alguno”

En los separos de la calle 14 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ)

Ya en la “Catorce”,-nombre que le dan al edificio en donde se encuentran las celdas ubicadas en la calle catorce de la zona industrial de Guadalajara-.

Estar en manos del los representantes del estado, se convierte en una experiencia que es dolorosa física y psicológicamente pero estoy seguro me ha permitido crecer en toda la extensión de la palabra. Duele ver, escuchar, sentir, los insultos, los golpes, con los que reciben a seres humanos en centros que se supone deben respetar la integridad de las personas, duele percatarse que en la mayoría de los que trabajan ahí, exista poca capacidad de diálogo y tengan a flor de piel la violencia verbal, física y psicológica, duele ser testigo mudo de que golpeen a alguien sin posibilidades de defenderse por su edad y/o, condición física y tener que guardar silencio por temor a sufrir mayores represalias de quienes son los encargados de “procurar justicia”, lastima en lo más profundo, que

debieran con el ejemplo construir andamiajes y condiciones para que la justicia florezca por donde ellos pasan, sin embargo, por donde ellos transitan, deja un mal sabor de boca, dejan un halo de desprecio, y afloran adjetivos que los dejan en una posición muy frágil pues solo con golpes, empujones y groserías logran someter a quienes requieren apoyo para enderezar sus actos.

Lo más grave es que les enseñan a mentir y golpear, para que alguien; que le es incómodo a quien tiene la estafeta de ser “gobierno” sea señalado incluso recluso en las insalubres, frías y pequeñas celdas donde inicia el martirio de quien pretenden “readaptar”. Te quiebra el sentimiento de impotencia cuando pides agua y a capricho hacen como que no te escucharan, entonces es más difícil que te atiendan cuando solicitas papel higiénico y más aún una cobija incluso te preguntan ¿“de a como no”? y el jabón para evitar infecciones está ausente de estas indignas instalaciones que están aprobadas, entiendo por todos los gobiernos, te sientes pequeño cuando tus palabras, ante los guardianes de la justicia carecen de sentido, y la credibilidad de lo que dices es nada.

Ante ellos siempre eres culpable, duele ver a supuestos abogados de oficio que en lugar de defender al menos el derecho humano de los reclusos, pareciera ser lo mismo que un policía o un celador. Cuándo por algo te distraes al dar tu declaración, te sancionan, y ellos tienen derecho en ese mismo momento a comer, a platicar a bromear, ¡Que injusto, es, la búsqueda de la Justicia! Sin embargo el dolor mayor, es que muchos saben esto, por pláticas por testimonios, por la cercanía a este contexto y pocos o nadie alzan la voz en busca de corregir la situación inhumana en que son tratados, los que con delitos fabricados, o hechos sin conciencia o con ella. Pero duele más, darnos cuenta que hemos hecho poco para que exista una organización sólida en los trabajadores capaz de defender los derechos conquistados a costa de la sangre de nuestros antepasados... duele en lo más profundo ser víctima del sistema verticalista y autoritario que existe en nuestro estado y nuestro país. Porque este mundo es de los que aún; no nacen, demos un paso al frente en busca de conservar un patrimonio que no es nuestro.

La glorieta como pista de motociclistas acróbatas y represores

Hablemos ahora de Diego Monraz Villaseñor, Secretario de vialidad y Transporte del estado de Jalisco, hace gala de sus dotes represivos, pues tiene en su haber un grupo al que le denominan de reacción inmediata, según lo relata el agente, Enrique Misael Herrera Contreras, Oficial tercero 1541 de la Moto-Patrulla R. I-36 de dicho grupo, pues en su informe entregado a la CEDHJ dice haber recibido vía radio comunicación órdenes de dirigirse a la glorieta de la Normal, ubicada en el Cruce de las Av. Manuel Ávila Camacho y Alcalde. Esto prueba que él es un trabajador que cumple órdenes de un superior, por lo que sin lugar a dudas se puede suponer que la autoridad máxima es

Monráz Villaseñor, responsable de la represión psicológica y verbal que sufrimos el día 28 de junio de 2010.

Aproximadamente a las 12:50 horas a una orden los “policías viales” alinearon al menos 18 de sus motocicletas, las encendieron y a gran velocidad se acercaron, avanzaban y pasaban peligrosamente a un lado de donde nos encontrábamos, de forma intimidatoria, una clara falta de responsabilidad, pues por mucho entrenamiento que tengan, bien pudieron ocasionar un accidente.

Consiguieron amedrentar a los manifestantes, pues el sonido intenso que pusieron los agresores en sus motopatrullas, taladraba los oídos; era diferente al que se estila para hacer notar que se está en una situación de emergencia, y por el peligro que veíamos, la mayoría optamos por subirnos a la banqueta, después de unos 10 minutos de usar esa estrategia intimidatoria y represiva.

Estamos ciertos que la principal función de los agentes de vialidad es dar fluidez a la circulación, proteger al peatón. Enorme sorpresa nos llevamos cuando de repente vimos como los policías de vialidad animaban a los conductores para que pasaran por donde nos reagrupábamos autos en circulación por todos los carriles puso en riesgo nuestra vida, cosa que les importó poco. Muy a su pesar logramos reagruparnos y quisimos seguir marchando hacia el Palacio Legislativo, pero lo impidieron los 18 agentes de policía en motocicleta de la Secretaría de Vialidad y Transporte del gobierno del Jalisco, apoyados por aproximadamente 40 policías pie a tierra estatales y municipales de Guadalajara todos, bajo las ordenes de los de la Subsecretaria General de Gobierno para Asuntos del Interior del Gobierno del Estado.

Por esto categóricamente enfatizamos que se han violado nuestros derechos humanos, porque, *el* estado está obligado garantizar nuestro derecho a la libre manifestación de nuestras ideas y además es su responsabilidad garantizarle el libre tránsito a la ciudadanía, y la solución que tomaron los servidores públicos fue impedir la libre manifestación, el libre tránsito y la expresión de las ideas mediante la fuerza, golpeando y apresando a uno de nosotros tan sólo porque no pensamos igual que quien encabeza el gobierno estatal.

Parecieran desconocer que José Antonio Gloria Morales, Secretario de Educación en Jalisco, llamado “El maestro”; a lo largo de la historia de nuestro país, ha probado ser la conciencia del pueblo. Porque en la mayoría de los movimientos sociales aparece como protagonista importante en la búsqueda de satisfactores básicos, para toda la población.

Aunque, cómo lo relata el periodista Salvador Frausto, el maestro digno ha sido perseguido, humillado, mutilado, desorejado, ahorcado, a lo largo de la historia, principalmente en “el movimiento cristero” sin embargo, se mantiene firme, aparece una y otra vez que el pueblo se ve oprimido o manipulado ideológicamente por los enemigos de los trabajadores.

Algunos antecedentes

Esta historia, la han emprendido los maestros dignos que siempre han estado al lado de los campesinos, obreros, jornaleros, asalariados, en fin siempre se han identificado con la clase trabajadora y han enarbolado las demandas que permitan mejorar las condiciones de vida del pueblo trabajador.

Congruentes con el legado histórico que el maestro ha puesto a germinar en las aulas y en la tierra que pisa, aparece hace una década la lucha en relación al maestro de telesecundarias en el estado de Jalisco.

Esta parte del gremio escribe con las letras de los hechos, una historia de lucha constante, en la convicción firme de lograr condiciones dignas de trabajo, para sus alumnos y sus colegas, sin dejar a la zaga al padre de familia quien se convierte en aliado natural del maestro en la lucha social, en este contexto y luego de movilizaciones callejeras, denuncias públicas, un plantón frente a Palacio Legislativo, mesas de trabajo y negociaciones, logra que desde el 8 de julio de 2000, el Congreso del Estado, instruya a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que se integre a los trabajos ya iniciados por las comisiones de Educación Pública y de peticiones, acerca de las demandas que los profesores de Telesecundaria hacen a la Secretaría de Educación Jalisco, cuyos trabajos concluyeron el día nueve de octubre de 2000 con la firma de una minuta.

Algunos de los principales acuerdos, los cito textualmente.

“Se terminó de construir la propuesta de escuela productiva, en lo referente a lo técnico pedagógico y aceptándola como programa imprimiéndose 2000 ejemplares del folleto.

Como resultado del consenso entre las dos partes, sección 16 del SNTE concluyó el programa de escuela productiva en su aspecto económico logrando una compensación que permite llegar a tiempo completo. Beneficiando a un promedio de

- 458 compañeros que tenían hasta mayo de 2000, 36 h -s- m- para llegar en cuatro años mediante la compensación EP al tiempo completo.
- 961 Compañeros de 30 h- s- m- que tenían hasta mayo del 2000 para llegar al tiempo completo en 5 años.
- Los compañeros contratados en 1999 inician con 30 h- s- m y dos horas más en septiembre de 2000 esperando 4 años para volver a continuar con su crecimiento en horas para llegar al tiempo completo en un plazo máximo de 9 años.
- Los compañeros de nuevo ingreso se contrataran con 30 h-s-m- e iniciaran su crecimiento en horas al sexto año de antigüedad, concluyendo en un plazo máximo de 11 años.

Según el comportamiento económico y el crecimiento del nivel, podrá revisarse este programa, mínimo cada dos años, o cuando cualquiera de las partes lo solicite. Esta compensación impactará en aguinaldo y prima vacacional.

XI.- Se acuerda mejorar la comunicación en cada ámbito o responsabilidad para orientar a tiempo y conducir con tino, cada aspecto que incida en la buena marcha de telesecundaria: construcciones, equipamiento, reparaciones, fundaciones.

El esfuerzo del gobierno del estado por conducto de la Secretaría de educación Jalisco, ante la exigencia del Comité Ejecutivo Seccional, se manifiesta a favor de todos los trabajadores de la educación federalizados. En el caso particular de Telesecundarias se ha hecho el mayor de los esfuerzos, esperando en reciprocidad la entrega responsable.

Siendo las veinte horas del día nueve de octubre de 2000, se da por terminada la reunión y firman los que en ella intervinieron.

Por la Secretaría de Educación, Profesor Pedro Díaz Arias, Coordinador general del sistema Federalizado, Profesor Víctor Manuel Preciado Ruíz Director General de Educación Básica, Profesor José Mario Guzmán Chávez, Director de Telesecundaria, Profesor Juan de la Cruz Gutiérrez, Supervisor de la Zona N° 30.

Por los Maestros de Telesecundaria: Ing. J. Guadalupe Ríos Aguirre, Srio. De la Delegación D-II-212. Ing. M de Jesús Arias Hernández Secretaria de la Delegación D-II-132.

Por el Comité Ejecutivo Seccional del SNTE SECCION 16. Profesor Juan Manuel Hermosillo Sepúlveda, Secretario de Finanzas, Profesor Luis Iñiguez García Secretario de Prensa y Propaganda, Profesor Raúl Torres Vargas, Srio. de Organización III, Profesora Rita Meza Gudiño, Secretaria de Carrera Magisterial. Rubrica de todos Excepto, la anotada al final”.

Mucha atención con los Maestros de Telesecundaria, J Guadalupe Ríos Aguirre, y M de Jesús Arias Hernández, quienes fueron los representantes del Movimiento de Telesecundarias, y que se mantuvieron firmes en las negociaciones siempre enarbolando el interés de todos los maestros de telesecundaria, a pesar de que fueron hostigados e incluso se presume que atentaron contra la vida de la ahora fallecida maestra Mari Chuy como le decían por cariño y respeto.

En tanto la comisión negociadora apoyada por los trabajadores movilizados, soportó todo tipo de presiones, amenazas y descalificaciones del comité ejecutivo de la sección 16 del SNTE con Juan Díaz de la Torre a la cabeza, afirmaba que las peticiones de los maestros dignos de telesecundaria eran insostenibles y poco viables. Por eso consideramos que los que se ostentan como los representantes y tienen la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo con la Secretaría de Educación Pública, son traidores a su origen y si bien es cierto, que en la minuta se lee que es en base a la exigencia del Comité Ejecutivo Seccional fue debido a que el Movimiento de Telesecundaria hizo suyos la defensa de los derechos humanos laborales e hizo públicas sus demandas,

manifestándose en las áreas públicas cómo son las plazas y las calles, el logro fue sentar al SNTE y a la Secretaría de Educación Jalisco a la mesa de negociación.

De octubre del año dos mil a febrero de dos mil nueve se mantiene sin alguna revisión la minuta de octubre de hace una década, que establecía revisión cada dos años o cuando alguna de las partes lo solicitara, no obstante se respetaron en cierta medida las conquistas logradas con la lucha.

Inicio de una nueva etapa de lucha

Luego de una serie de recorridos que hizo una comisión de trabajadores por el Estado y de varias reuniones con representantes de distintas zonas escolares, el día 9 de diciembre de 2009 el Movimiento de Telesecundaria presenta, ante el Congreso del Estado, ante la Secretaría de educación y al Gobernador, Emilio González Márquez el documento en el que las demandas del Movimiento de Telesecundaria, quedaron plasmadas en este pliego petitorio entregado conforme al artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

1. Integración y recuperación de Escuela Productiva a los profesores que tiene derecho y no lo reciben.
2. Incorporación del E.P. (Escuela Productiva) al concepto 07.
3. Equivalencia en salario/hora con secundarias técnicas y generales.
4. Regularización de las claves presupuestales E2725, a los directores comisionados y liberación del grupo.
5. Ascenso del personal administrativo y de intendencia como docentes, a aquellos que tengan el perfil requerido.
6. Contratación de personal de intendencia y administrativa a las escuelas que carezcan de ellos.
7. Revisión del Profesiograma de la Secretaría de Educación Jalisco.
8. Construcción de Telesecundarias y de aulas definitivas.
9. Servicio de internet y equipamiento de computadoras actualizadas a todas las telesecundarias.
10. Creación de Jefaturas de Sector.
11. Cursos de actualización de calidad sin costo al profesor.
12. Pago de los días faltantes del año (5 en años normales y 6 en años bisiestos)
13. Pago de los días de permiso económico no solicitados.
14. Revisión de los esquemas de permiso por salud de los trabajadores.
15. Revisión de los criterios del rango alumno-maestro (RAM) para la creación y reposición en función de la calidad educativa.

16. Dotación de útiles escolares, uniformes y desayunos de manera regular y permanente para los alumnos.

En los 16 puntos del pliego, se aprecia que el punto ocho es una demanda que rebasa las pretensiones laborales, lo que demuestra que la lucha de los trabajadores de telesecundaria tiene demandas populares el cual se complementa con el punto 16 en donde se reclaman desayunos, útiles y uniformes escolares para los alumnos, en otras palabras el derecho a la educación, al vestido y a la alimentación.

Sin tener respuesta a este documento hasta el día 9 de febrero de 2010, El movimiento de telesecundaria, solicitó la reapertura de la mesa negociadora con capacidad de resolución inmediata a Fleury Eduardo Carrasquedo Monjaras secretario general de la sección 16 y al ingeniero José Antonio Gloria Morales, Secretario de educación en Jalisco.

De todos los documentos que el movimiento de Telesecundaria ha presentado y entregado a las distintas dependencias lo testimonian los matasellos con la fecha y en algunos casos la hora, por lo que se puede decir que se pretende ignorar la existencia de esta fuerza organizada de trabajadores. Es hasta el 26 de febrero de 2010 y mediante una protesta realizada frente a la torre de educación que la C. María Lourdes Hernández Godínez, en el oficio DGACE014/10, dirigido a los trabajadores del nivel de telesecundaria del estado de Jalisco, remite un documento adjunto sin la formalidad de oficio que constata que es una copia del correo electrónico que Pedro Díaz Arias, Coordinador de Educación Básica de la Secretaría de Educación Jalisco, le envía a la que firma como Directora General de Atención a la Comunidad Educativa.

En pleno ejercicio de la libertad personal, de prensa, de organización y manifestación de las ideas es que se logra esa efímera respuesta, más veamos el cinismo del gobierno.

En dicho documento se aprecia la falta de sensibilidad, y la poca capacidad de dialogo de José Antonio Gloria Morales porque deriva a un funcionario menor la responsabilidad de dar audiencia al Movimiento de Telesecundaria después de casi tres meses de haberlo solicitado, esto prueba el desprecio que siente por unos poquitos que se atreven a pensar y actuar diferente a él y ni siquiera establece fecha y le instruye a Hernández Godínez proporcione el número telefónico para que apenas concreten cita con Joel Arellano.

Se lee con claridad que le niegan la posibilidad al movimiento de telesecundaria, de participar en las mesas de negociación argumentando que quien detenta la relación laboral es el colegiado de asuntos laborales de la sección 16 y la Secretaría Educación tiene “la obligación legal” de atenderle.

Por si faltara claridad, cuando surge un movimiento de resistencia y muy diferente al charrismo sindical que encabeza Elba Esther Gordillo Morales es decir los que dicen

representar a los maestros de Telesecundaria, es debido a que no responden a los legítimos derechos de organizarse para demandar lo que se considera justo.

Quede entonces asentado que todos estos actos y omisiones son responsabilidad del Gobernador Emilio González Márquez que dirige el concierto de acciones en el estado de Jalisco, algunas ocasiones en público y otras en las que ha creído estar en privado cómo la orden de que la policía estatal circulara las playas y terrenos de Tenacatita, importándole poco invadir área Federal o despojar a humildes ejidatarios del lugar, utilizando la legalidad que el estado le otorga, sin duda a eso le llamaremos abuso de autoridad.

Y que por alguna razón hemos conocido, donde sus expresiones de “Señor Cardenal, con perdón de usted, pero esos poquitos, que se oponen, Chinguen a su madre” ó “Los homosexuales me dan asquito” Esto es sólo pequeña muestra de un gobierno que se sirve de los recursos del pueblo para con eso mismos reprimirlo y negarlo.

Dicho sea de paso la CEDHJ, por conducto de la Lic. Elva Aricela Chávez Manzo, Visitadora adjunta a la 4ª Visitaduría protege a los principales responsables que el movimiento de telesecundaria denuncia, así lo hace evidente el oficio 1446/10/IV, fechado en Guadalajara Jalisco, a 19 de julio de 2010, que transcribo parte de manera textual,

“Se recibe un escrito signado por José Casillas Martínez, Juan Carlos Banderas Rentería, Oscar Morales Pelayo, Rigoberto Guzmán, Arce Servando Moreno, José García Sierra, Lázaro Ballardo Panuco, Javier Villalvazo de la cruz Rogelio Aguilar y Ma. Guadalupe Godínez, mediante el cual amplían la queja que el primero de ellos presentó el 28 de junio de 2010 y al efecto refieren que desean agregar como autoridades presuntas responsables al Secretario General de Gobierno al Secretario General de Gobierno del Estado al Secretario de Seguridad Pública a funcionarios de la Subsecretaría del Interior al Presidente municipal de Guadalajara y al director de seguridad Pública de Guadalajara para lo cual argumentan que en los hechos que motivaron la inconformidad participo personal de dependencias a su cargo. A si lo acordó y firma el licenciado Arturo Martínez Madrigal cuarto visitador general de la comisión estatal de derechos humanos ...FIRMO...”

Más en los hechos y a pesar de que tales autoridades estatales y municipal las hemos señalado en los subsecuentes alegatos de controversia con los represores, la CEDHJ además de no haber actuado desde el primer llamado que se le hizo a las doce horas de ese día 28 de junio, ni previo al segundo hecho represivo cuando fui detenido, ahora deja en manos de los agraviados el peso de la consecución de las pruebas, pero además, diseña una rendija para congraciarse con el gobierno de Emilio González Márquez y su gabinete y con ello, le hacen un flaco favor a la elite que regentea el poder políticos y económicos del SNTE y en especial a Elba Esther Gordillo, colocándose con quienes han violado de manera fragante nuestra libertad personal, la libertad de organización y de imprenta.

LA ACTUACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS EN JALISCO 2009-2010

Entre la ortodoxia legal y la ilegitimidad.

Francisco Macías Medina / Carlos Peralta Varela
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.

El año 2010 en Jalisco se encuentra marcado por diversos conflictos relacionados con los derechos humanos, no tan distantes de lo ocurre en el país: ataques a periodistas y defensores, luchas por el respeto al territorio y al desarrollo, como en el caso de los pobladores de Temacapulín y Tenacatita, así como un adelgazamiento en la seguridad, reflejada en el número de homicidios vinculados a dinámicas de la delincuencia organizada que colocan a Jalisco en el séptimo lugar a nivel nacional, con alrededor de 800 vidas perdidas, según información periodística¹.

Esas realidades debieran reflejarse en una defensa más enfática a los derechos humanos desde la sede pública, sin embargo esto no ha sido así, más bien se ha consolidado lo que hipotéticamente se ha venido mencionando en las semblanzas anteriores: se trata de una Comisión de Derechos Humanos que se guía más por intereses políticos que por las necesidades de una sociedad que reclama con urgencia su protección.

Una reflexión cualitativa sobre el Ombudsman

En su publicación sobre “Los Organismos Públicos de Derechos Humanos en México, Nuevas instituciones, viejas prácticas” elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, se propuso evaluarlos a través de cuatro ejes: a) proactividad, que se refiere a agotar todas las posibilidades para alcanzar su objetivo, con creatividad y bajo una idea amplia de protección a los derechos humanos; b) eficiencia, entendida como realizar las funciones de forma correcta, obteniendo resultados deseables con costos mínimos; c) transparencia, pensado bajo la lógica de ofrecer toda la información posible

antes de que la soliciten; y d) pluralidad, contar con profesionales dentro de la estructura de la organización que permiten apreciar las violaciones a los derechos humanos desde distintos ángulos², los cuales tomaremos como referentes para expresar algunos de los hechos que demuestran lo incompleto de la actuación de la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)

En relación al rubro de proactividad, encontramos como ejemplo negativo lo ocurrido en septiembre en el marco de la aprobación de la llamada “ley salvavidas”. Dicha ley busca prevenir y sancionar con mayor severidad a las personas que conducen en estado de ebriedad. En el proceso legislativo participó ampliamente la sociedad civil organizada incluso para vigilar su cumplimiento, lográndose por primera vez en muchos años consolidarse la figura de usuarios simulados que posibilitaran la denuncia de actos de corrupción, en este caso de agentes de vialidad.

Se pensaría que la reacción principal de un organismo encargado de proteger los derechos humanos sería la de apoyar y ofrecer información desde la defensa de los intereses de la sociedad civil, sin embargo la reacción de su presidente fue inexplicable porque ante los operativos ordenó el inicio de investigaciones oficiosas para evitar la violación a los derechos humanos pero en este caso de los servidores públicos, como una forma de reaccionar políticamente ante un esfuerzo organizado de la sociedad, donde hay que decir la CEDHJ no tenía injerencia³. El apoyo a priori a los servidores públicos se identifica como totalmente lejano a los principios que rigen a los organismos públicos de protección a los derechos humanos.

En el rubro de eficiencia, se puede mencionar que sobresale el reclamo social de exigir austeridad en este tiempo de crisis económica a quienes se encuentran en la función pública. Se pensaría que los sueldos excesivos son un asunto ajeno a los organismos públicos autónomos, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos, pero para sorpresa de muchos se hizo público que su presidente se aumentó el sueldo en tres años en un 46%, es decir, cuando asumió el cargo en 2007, percibía 85 mil 518 pesos y en la actualidad recibe 124,983 pesos sin descontar impuestos.

El titular expresó como justificación que la mayoría de los *Ombudsmen* en el país ganaban igual o más que un magistrado, por lo que era necesario que percibiera lo mismo que un funcionario de “primer nivel”⁴. Cabría agregar que no aumentó en 46% la emisión de recomendaciones o el número de quejas resueltas por conciliación.

Por otro lado debe mencionarse que dejaron de emitir su revista *La Gaceta*, a lo cual se suma lo complejo que resulta obtener información sobre las quejas y otros aspectos relevantes. Todo esto nos parece que refleja poca voluntad en rendición de cuentas y transparencia, y en perspectiva, una pobre evaluación de su labor y del contexto social.

Aunado a lo anterior, los trabajos que realiza la CEDHJ, claramente se encuentran caracterizados por la carencia de un instrumento de planeación en el que se definan metas e indicadores específicos de la gestión que abandonen aspectos cuantitativos

en relación a una agenda de temas prioritarios: los únicos trabajos de planeación que actualmente existen tienen como único fin el requerir mayor presupuesto, el cual una vez otorgado no merece una evaluación de los logros obtenidos, ni mucho menos de su impacto en la sociedad. Como ejemplo cabe mencionar que solicitó la cantidad de 140 millones de pesos, proponiéndose solamente la asignación de 95 millones, situación que inmediatamente fue calificada como poco clara e insuficiente. Sin elementos suficientes el ombudsman advirtió que quedaría pendiente la regionalización además de la capacitación para “prevenir delitos y violaciones a los derechos humanos”⁵.

La deficiente planeación propicia un incentivo para la realización de acciones efímeras, como por ejemplo la apertura espontánea de una oficina de recepción de quejas en el Ayuntamiento de Guadalajara, que consiste en un escritorio que se ubica en la sala de espera de la Secretaría General, en este montaje no se cuidaron aspectos como la intimidad o confidencialidad de las personas denunciantes⁶, así como la capacitación y supervisión del personal del propio gobierno que captarán los reclamos para evitar la parcialidad en su manejo.

En torno al rubro de la proactividad, insiste en emitir Recomendaciones con la petición de reparación del daño pero sólo en forma económica con base en dispositivos legales internos (como el derecho civil o laboral) pero distantes y superados por la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Deja a un lado otro tipo de medidas como aquellas necesarias para evitar que los hechos se repitan o de proponer la modificación de leyes o prácticas que protejan los derechos humanos⁷. Se insiste demasiado en las resoluciones en aspectos como los procedimientos de responsabilidad administrativa y solicitud de investigaciones penales, que aunque son una forma de reparar la violación al derecho conculcado, como se verá más adelante, la mayoría de las determinaciones son emitidas años después de la presentación de la queja, lo que coloca en riesgo su viabilidad tanto en la obtención de evidencia, como en los plazos para que prescriban dichas acciones.

En otros casos no muestra una voluntad clara para defender los casos, como en el episodio del discurso de Emilio González Márquez, gobernador del estado, dictado el 21 de septiembre en el marco del II Congreso Iberoamericano de la Familia, donde el funcionario afirmó que las bodas entre personas del mismo sexo le daban “asco”.

En respuesta grupos ciudadanos y defensores de la diversidad sexual, presentaron más de 300 quejas ante el organismo, sin embargo la respuesta de la CEDHJ fue de inmediato solicitarle al Gobernador una disculpa por sus afirmaciones, con ello abrevió ilegalmente el procedimiento y de nueva cuenta omitió dictar otro tipo de medidas. Debía tomarse en consideración que en meses anteriores se generó un caso similar con un regidor del Ayuntamiento de Guadalajara que realizó una serie de expresiones homofóbicas y que por tanto se requería de acciones y medidas con mayor contenido de defensa del derecho a la no discriminación.

El gobernador no formalizó una disculpa pública⁸, y obviamente la respuesta formal desde la autoridad responsable (curiosamente a través de una oficina de Comunicación Social), fue: No se contestaría hasta que existiera una Recomendación. Finalmente las quejas fueron rápida e ilegalmente archivadas al defender el Gobernador su “derecho” a la libertad de expresión, cuando en realidad se trata de un acto evidentemente discriminatorio⁹. En conclusión, no existió ni defensa ni reparación alguna.

En relación al rubro pluralidad, puede hacerse referencia a la falta de visión y la desinformación en la defensa de algunos derechos. Específicamente puede mencionarse que se cuestionó a Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, en su papel de presidente de la organización que aglutina a los organismos públicos de protección a los derechos humanos en todo el país, por su postura en el debate sobre la iniciativa presidencial relativa al fuero militar. Mientras que organizaciones como Human Rights Watch señalaron que la propuesta era incompleta para atender violaciones relevantes, él se limitó a decir que no podía entrar al debate porque los *Ombudsman* tenían que fijar su postura, aunque agregó: “que cualquier reforma o iniciativa que busque eficientar la sanción y combatir el índice de 98% de impunidad que prevalece en México, sería favorable”¹⁰, declaración que además de ser ambigua, no toma en cuenta los resultados del Examen Periódico Universal llevado a cabo por la ONU y como apreciamos es totalmente permisiva e ignorante de las denuncias constantes sobre los abusos a los derechos humanos por parte del personal militar, que por cierto en Jalisco ascienden a 36 casos; entre ellos el de la Comunidad de Maltaraña en la ribera de Chapala.

Para cerrar este apartado debemos hacer alusión a la renovación del Consejo Ciudadano de la Comisión, recientemente realizado. Por parte del Congreso del Estado debe decirse que el plazo para presentar aspirantes fue reducido y existió poca publicidad de la convocatoria. Además, aunque a las y los aspirantes se les practicó un “examen de conocimientos” realizado por universidades públicas y privadas de Jalisco, no existió una evaluación pública de sus historias de vida, ni de propuestas para mejorar el funcionamiento del organismo, lo cual resulta importante dado, que el Consejo debiera ser un órgano representativo de la pluralidad de la sociedad. Finalmente resultaron electos, un ex visitador de ese organismo, y dos consejeros que no obstante concluir su encargo volvieron a postularse para un segundo periodo.

La novedad en este punto es la práctica de “reelección” de consejeros que aunque permitida por la ley, posibilitó que se mantuvieran consejeros afines al ombudsman y por otro lado, impide la inclusión de otras visiones y expresiones reflejo de pluralidad de la sociedad. Esto se menciona debido a que, cuando menos en el caso de la ahora consejera Norma Edith Martínez Guzmán, se reconoce como pariente del actual Secretario General de Gobierno de Jalisco, además de que pertenece y es promotora del movimiento de la iniciativa popular “en favor de la vida”, que sin consulta pública fue aprobada por la pasada legislatura y que atenta contra los derechos humanos de las mujeres¹¹.

La reelección de consejeros además al incluir a ex funcionarios, posibilita la probabilidad de que el Consejo sea utilizado como un mero trampolín para cargos internos ó en la búsqueda de una sucesión en la institución a la usanza de los partidos políticos, ya que por lo menos entre los integrantes del pasado Consejo Ciudadano, uno de ellos antes de concluir ya tenía trabajo en la propia institución, sin que le hubiera sido autorizada su separación del consejo¹².

A lo anterior, hay que añadir que entre el personal de la Comisión existe servidores públicos que tienen vínculos familiares con actores políticos y con los propios consejeros. Según notas periodísticas, la Directora de Relaciones Públicas de la CEDHJ recientemente se desposó con Eduardo Rosales Castellanos, ex presidente del PAN en Jalisco¹³; por supuesto, a esa celebración asistió el Presidente de la CEDHJ.

Finalmente, el 23 de noviembre de 2010, dos consejeros ciudadanos propietarios Francisco Pérez Chagollán y Alberto Bayardo Pérez Arce, así como una suplente, María Emma Valadéz Cruz, todos ellos cercanos a las inquietudes de la sociedad civil, presentaron su renuncia con carácter de irrevocable al Congreso del Estado. En el texto de su renuncia, señalan la pérdida de fuerza y legitimidad de la CEDHJ, sobre todo desde el proceso de elección del que resultó electo Felipe de Jesús Álvarez Cibrián como presidente, el cual se caracteriza por su falta de transparencia y carece de un perfil adecuado para el cargo. Le falta convicción en la defensa de los derechos humanos. Califican el modelo del funcionamiento actual de la CEDHJ, como de intermediación silenciosa y de gestión de indemnizaciones, “como si fuera un área de conciliación” sin que esa actividad lleve a evitar que vuelvan a cometerse las violaciones a los derechos humanos.

Cabe mencionar que se niega el diálogo, las discusiones sobre la interrupción legal del embarazo o el reconocimiento legal a las uniones conyugales entre personas del mismo sexo, no se llevaron a cabo por la respuesta “opaca, cerrada y autoritaria” que la CEDHJ y parte de su consejo dieron al caso. Más aun se ordenó el cierre de las puertas de una sede pública a un grupo de ciudadanas que había solicitado audiencia con el fin de debatir sobre estos temas. El abuso de una mayoría al interior del Consejo Ciudadano, finalmente impuso decisiones que justificaron la exclusión y discriminación “evitando discusiones abiertas y con base en argumentos”.

Los exconsejeros también señalan en su renuncia la falta de transparencia en la información relevante de ese organismo, la cual dejó de presentarse ante el Consejo. Tal sería el caso de las Recomendaciones, mismas que conocían a través de los medios de comunicación.

Otro de los aspectos, fue el relativo a la “suplencia irregular” de la entonces consejera Maité Cortés sin que fuera aceptada su renuncia, en medio de presiones a consejeros y con la obstaculización para que Paola Lazo (su suplente), ejerciera la titularidad, lo que originó que se defendiera mediante el trámite de un Juicio de Amparo tramitado con la asesoría del Cepad, que finalmente fue concedido.

Lo anterior sugiere que la participación ciudadana con visión independiente y crítica, está paulatinamente eliminándose de ese organismo. Se aprecia, sobre todo a partir de la renuncia de los consejeros, que se profundiza la carencia de legitimidad en sus acciones aspecto del que también es responsable el Congreso del Estado.

Con este breve panorama, sobre el contexto en el que ha girado el trabajo de la CEDHJ en este año, entramos al análisis cuantitativo sobre su funcionamiento.

Una reflexión cuantitativa

Durante el 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco registró según da cuentas en el informe anual 2009, la cantidad de 15 800 quejas, lo cual supera el histórico de quejas recibidas desde la fundación de la Comisión. Tan sólo en diciembre recibieron 6767 quejas y es de observar que esa sola cifra duplicaría el número de quejas recibidas en todo 2007.

La CEDHJ interpreta el incremento como un aumento de confianza de las personas en la institución¹⁴, dato que merece apreciarse con cautela ante la falta de medición de todos aquellos hechos que atentan contra los derechos humanos y que no son denunciados por las personas, además deben apreciarse elementos como el tiempo en que es resuelta la inconformidad y si su finalización realmente reparó la libertad fundamental violentada.

El incremento exponencial de las inconformidades a nuestro juicio, se debe a un ambiente de conflictividad en el respeto a los derechos humanos en Jalisco, y por otra parte no existe una verdadera alternativa que permita a las personas ver protegidas sus libertades, es decir, efectivamente la gente denuncia porque fueron violentados sus derechos y acude a la comisión porque no tiene otra instancia adónde acudir, resulta su última posibilidad, circunstancias que como lo veremos más adelante no implican una respuesta eficiente y afortunada por parte de esta instancia pública, a las quejas de los ciudadanos.

Es necesario precisar que las 15 800 quejas recibidas, son divididas internamente para su investigación y conclusión entre las cinco visitadurías de la CEDHJ. De acuerdo a su propia información el 44% de ellas se encuentran en la Quinta Visitaduría General y el 19 % en la Cuarta Visitaduría, el porcentaje restante se encuentra distribuido en las tres visitadurías restantes, aunque sobresale que la Segunda Visitaduría General sólo tramita el 4 % de las quejas recibidas, no obstante de que se encarga de investigar a los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Policía Investigadora, Dirección General de Seguridad Pública del Estado y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Cabe advertir que el incremento anual de inconformidades se usa por parte de la CEDHJ, como un argumento para solicitar “el incremento de recursos materiales, humanos y financieros”¹⁵, por eso es importante su análisis.

El supuesto grado de “confianza” al que hace referencia la CEDHJ en su informe de labores, se ve traicionado o cuando menos cuestionado al conocer el pobre número de expedientes de queja concluidas.

En el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2009 del Cepad16, señalamos que sólo uno de los casos emblemáticos en Jalisco, que se refiere al donativo otorgado en 2008 por el Gobernador de Jalisco para la construcción del santuario de los mártires cristeros, significó la presentación de 6549 quejas, de las cuales nunca se informó formalmente de su forma de resolución. A través de la propia información de la CEDHJ, encontramos que inició 2009 con 312 quejas correspondientes a 2008¹⁷, lo que significa que las inconformidades originadas por el llamado limosnazo fueron resueltas sin embargo la sociedad no se enteró de la forma en que se concluyó, que evidentemente no fue una Recomendación.

El propio Informe de actividades de la CEDHJ, al especificar sobre el número de quejas pendientes, reconoce (en la tabla respectiva) la existencia de 6 578 quejas, pero al hacer la suma total solamente identifica 31218. Las quejas tampoco aparecen en la gráfica llamada quejas resueltas. Nos preguntamos ¿error aritmético ó caso de opacidad dolosa?. A pesar de ser más de seis mil quinientas quejas no se le dio una respuesta transparente y pública a este tema. Este caso da muestra de que dicho organismo funciona como una eficiente oficialía de partes, y no como una defensora de los derechos humanos de la sociedad.

Una constante similar la encontramos en los restantes conceptos de conclusión de las inconformidades, ya que como se aprecia en el cuadro (1), para el 2009 encontramos que por conciliación se resolvieron 144 inconformidades. A pesar de haber recibido el número de quejas más alto en su historia, tuvieron la cifra más baja de conciliaciones en los últimos seis años.

En total se resolvieron 1478 inconformidades, que en comparación con las 15 800 quejas que admitió, podemos ampliamente concluir que el personal de la CEDHJ solamente resolvió el 9.35% de las que acepta; cifra que aunque se incrementa levemente en comparación con el 2008, sigue siendo baja desde 2003.

Se trata entonces de una Comisión de Derechos Humanos, que ha posicionado un discurso de incremento infinito de quejas, como si el trámite de cada queja continuara de forma individualizada, pero con la salvedad de que mantiene cifras bajas de resolución de las inconformidades a través de los mecanismos de conciliación o Recomendación.

La CEDHJ luego de admitir las quejas y al identificar que estas se presentan por las mismos hechos o contra las mismas autoridades presuntamente violatorias de los derechos humanos, acumula los expedientes de queja con la intención de atender un número reducido de expedientes, situación que ocurre en 13 732 casos, que significan el 86.9 % del total de quejas que recibe en trámite.

Es decir, de cada 10 quejas que recibió la CEDHJ durante 2009, prácticamente 9 de ellas se acumularon en un número reducido de expedientes, lo grave del caso es que se desconoce si fueron resueltos en este período de tiempo. Mientras que 0.9 % de las quejas son resueltas a través de conciliaciones, recomendaciones o fueron archivados por no haber encontrado pruebas de un atentado a una libertad fundamental.

Cuadro 1: Relación de quejas, conciliaciones, recomendaciones y quejas archivadas

Año	Quejas	Quejas resueltas	Conciliaciones y recomendaciones	Quejas resueltas en rubro diversos motivos ¹⁹	Quejas recibidas en relación con las quejas resueltas
2003	2,899	3,014	643 (633+10)	2,030	67.35 %
2004	3,064	2,949	707 (696+11)	2,087	70.76 %
2005	3,129	2,932	572 (558+13)	2,002	68.28 %
2006	2,793	3,155	565 (557+ 8)	2,025 ²⁰	64.18 %
2007	3,058	3, 211	471 (455 ²¹ +16)	1,881	58.58%
2008	10,415	853 ²²	476 (442+34)		8.2 %
2009	15,800	1478	180 (144+36) ²³	1298	9.35 %

Nota: no concuerdan algunas cifras proporcionadas en el Informe anual con cifras aparecidas en las Gacetas trimestrales 2007.

Respecto a las Recomendaciones la CEDHJ informó que incrementó su emisión en un 125% en comparación con las emitidas en 2007, calificando el hecho como “el mejor indicador de la intensificación de labores y de la participación ciudadana”.

De las 36 Recomendaciones emitidas, se informó que 30 fueron aceptadas, 4 se encuentran pendientes de aceptación y dos fueron rechazadas, tres de ellas fueron impugnadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sin embargo no se ha transparentado el grado de cumplimiento de cada una de ellas, con lo que puede presumirse que se encuentran en seguimiento de su fase inicial. Puede considerarse que existe opacidad en relación al cumplimiento de las recomendaciones, ya que tanto el Informe Anual de actividades como la página de la CEDHJ carecen del dato preciso; lo que hace pensar que en la práctica el procedimiento de queja concluye con la aceptación de la Recomendación y no con el cumplimiento total de la misma.

En la medida que la información que ofrecen no permite identificar si las recomendaciones fueron total o parcialmente aceptadas, no podemos analizar como lo hemos hecho en informes anteriores, qué porcentaje importante de ellas fueron parcialmente aceptadas. Es muy importante este dato dado que con la aceptación parcial de una recomendación se puede caer en un juego de simulaciones, por un lado la Comisión se vanagloria de un trabajo realizado, al tiempo que las instituciones presentan en forma pública una imagen de acatamiento a los derechos, sin embargo no se generan

cambios de fondo para que no vuelvan a ocurrir las violaciones. Así entonces, la falta de información impide detallar si las recomendaciones en verdad se cumplen.

Es importante destacar, que la Comisión recibió el año pasado 8764 quejas (cuadro 2), que tienen relación con cuestiones ambientales, lo cual es un número muy significativo de quejas en torno a una problemática relevante. Sin embargo solamente por ese tema emitió tres Recomendaciones, que si bien se refieren a asuntos de trascendencia como el caso del Río Santiago ó la construcción de la presa en Temacapulín, sigue siendo un número comparativamente bajo con lo exhibido en la recepción de las inconformidades, esto sin entrar al análisis sobre la calidad de las Recomendaciones y su grado de cumplimiento.

Otro dato interesante, es que el 83 % de las resoluciones que se hicieron públicas en el 2009, tratan de hechos denunciados en años anteriores, es decir se trata de violaciones a los derechos humanos que no fueron resueltas por ese organismo en una temporalidad razonable.

Cuadro 2: Quejas más frecuentes en los últimos cuatro años

Quejas más frecuentes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 ⁴
Ejercicio indebido de la función pública						8280	8785
Violación a los derechos ambientales							8764
Violación al derecho a la libertad de tránsito y residencia							7469
Violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica						7013	608
Violación al derecho a la integridad y seguridad personal							1731
Discriminación						6981	
Falta de fundamentación o motivación legal						6881	
Detención arbitraria ⁵	951	958	997	976	929	588	485
Prestación indebida del servicio público	819	737	1001	945	1021	1061	5266
Quejas más frecuentes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 ⁴
Lesiones	608	824	798	691	714	400	359
Incumplimiento de la función pública en la Procuraduría	255	294	355	303	390		

* Una queja puede contener más de un tipo de violación

El contexto de Jalisco que da pie al incremento en la presentación de quejas, debiera imprimir un reto en los deberes de la CEDHJ, sobre todo en relación al tipo de presuntas violaciones a los derechos humanos como en las autoridades que frecuentemente son

señaladas, ya que, como se aprecia en los cuadros 2 y 3, encontramos entre los primeras menciones presuntas violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, así como autoridades más relacionadas con el sistema de transporte público, lo cual crea una distorsión en relación al otro tipo de violaciones graves que históricamente se generan a los derechos humanos y sobre las instituciones involucradas en ellas, como es el caso del comportamiento de las corporaciones policiacas y la Procuraduría General de Justicia del Estado, por ejemplo, en relación a atentados graves como la tortura.

Cuadro 3: Autoridades frecuentemente señaladas por presuntas violaciones

Autoridad	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Centro Estatal de la Investigación de la Vialidad y Transporte-							6559
Sistema de Tren Eléctrico Urbano							6549
Secretaría de Vialidad y Transporte							4533
Secretaría de Salud del Estado							3563
Gobernador de Jalisco- Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco						6459	2670
Secretaría General de Gobierno						669	1159
Procuraduría General de Justicia del Estado	725	792	764	700	718	651	596
DSP de Guadalajara	351	311	266	270	236	231	1042
SSP Prevención y Readaptación Social	263	329	264	262	231	241	
Secretaría de Educación del Estado	204	182	182	182	234	194	
DSP de Zapopan	151	151	156	192	129	108	

Existe una alta probabilidad de que la mayoría de las inconformidades que permanecen para trámite sean aquellas relacionadas con la Seguridad Pública y la procuración de justicia, ya que de acuerdo al propio informe de actividades de la CEDHJ, se especifica que el total de quejas en estos ámbitos ascienden a 2043 quejas.

La lista de presuntos violadores con quejas en trámite en estos rubros, puede ser muy similar a la generada cada año en la historia de la Comisión. Se encuentra en primer lugar la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara, le sigue la Procuraduría General de Justicia del Estado y Dirección General de Seguridad Pública del Estado; la segunda con un marcado descenso que no se explica en el trabajo de la CEDHJ.

Un elemento que nos puede ser útil para ponderar los datos, es el de las quejas por tortura, ya que aparte de desaparecer del “cuadro” de presuntas violaciones más frecuentes, se anuncia la disminución de las inconformidades en un 28 %²⁶. Debe tenerse presente que desde la entrada de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián a la presidencia de la

CEDHJ en 2007, coincidentemente han caído las quejas recibidas por tortura, resulta también coincidente que la disminución de la tortura sea considerada con parámetros en el apartado de Respeto y Justicia del Plan Estatal de Desarrollo 2030 del Poder Ejecutivo del Estado.

Cabe mencionarse que en el reciente Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009 del Cepad, identificamos que la Tortura se mantiene, en Jalisco existen 1343 personas agraviadas por tortura, de las cuales 175 son mujeres y 79 niños ó niñas.

En el mismo periodo la CEDHJ ha emitido históricamente 21 Recomendaciones, pero es en la actual administración de Álvarez Cibrián que a partir de 2008 se registran solamente 14 casos de tortura, la cifra más baja en casi una década, lo cual resulta poco explicable. No se encuentra una clara concordancia con el trabajo de prevención realizado por ese organismo, ya que por ejemplo en 2006, antes de su llegada se recibían 150 inconformidades. Esta inconsistencia sugiere que la forma de procesar la información de los agraviados y agraviadas, así como la forma en que legalmente se califican las inconformidades, permiten el subregistro de casos de tortura a través de figuras relacionadas con el derecho a la integridad personal ó lesiones.

Los datos antes señalados, dan cuenta de como un organismo público cuya misión se encuentra claramente regulada en la ley, requiere también de espíritu y voluntad en la defensa de los derechos humanos. La aplicación de su mandato con criterios jurídicos venidos del excesivo formalismo legal paleolítico, y escudados en viejas prácticas de opacidad, además de consumir la poca legitimidad seguramente están desvirtuando a la instancia como último recurso y como última esperanza de la gente en las instituciones.

Algunas conclusiones

Desde la óptica cualitativa consideramos que la CEDHJ está perdiendo credibilidad ante la sociedad afectada en sus derechos, porque da muestras de poca eficiencia. Los ciudadanos colocan en la balanza el costo de la institución, el aumento desmesurado de los salarios que perciben funcionarios de alto nivel, en oposición al número de quejas adecuadamente resueltas y la calidad en la resolución.

De igual manera los ciudadanos también observan que se solicitan incrementos presupuestales sin proyectos claros de acción y promoción de los derechos humanos en el estado y se observa que los consejeros ciudadanos renuncian aludiendo falta de información y de transparencia. La Comisión podría ganar en confianza ciudadana si se abriera al escrutinio y a la participación.

También en términos de confianza y eficiencia, si bien ha emitido más recomendaciones que en otros años, debe valorarse que resultados significativos han generado. A las recomendaciones aun les falta que contenganla exigencia amplia de

medidas para evitar que los hechos violatorios se repitan y la propuesta de modificaciones estructurales de leyes o prácticas, para que en verdad protejan de fondo a los ciudadanos. En este caso la cantidad debe ir acompañada de mayor calidad.

Pero que la Comisión atienda todos estos temas depende de los ciudadanos. La salida no esta dentro de la Comisión, sino en el fortalecimiento de los ciudadanos organizados que den seguimiento a las quejas, que analicen y juzguen el tratamiento que se les da, que exijan mayor transparencia y más información, que soliciten el seguimiento de las recomendaciones y pidan aportes más trascendentes de éstas. Debe ampliarse la labor de la Contraloría social hacia la Comisión, para que esta cumpla de mejor manera su labor.

Bibliografía y citas aclaratorias

1. “Este año han asesinado a 770”. El Occidental. 6 de diciembre 2010.
2. Los Organismos Públicos de Derechos Humanos en México, Nuevas instituciones, viejas prácticas; Cécile Lachenal, Juan Carlos Martínez y Miguel Moguel. Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC. México; 2009; pág. 40.
3. “La CEDHJ apoya a funcionarios públicos”. Portal del Sendero del Peje, el 12 de noviembre de 2010.
4. “Justifica el Ombudsman de Jalisco alza de 46 % a su salario en tres años”; La Jornada. 21 de septiembre de 2010.
5. “El Ombudsman considera que el presupuesto es insuficiente”. El Informador. 7 de noviembre de 2010.
6. “Instalan Oficina de Derechos Humanos en Palacio Municipal”. Público. 10 de noviembre de 2010.
7. “Acta Tlajomulco Recomendación de la CEDHJ”. DK noticias. 22 de octubre de 2010. En esta nota se menciona que el monto hasta esa fecha acumulado en el tema de reparaciones asciende a 2 millones 205 mil 458 pesos.
8. Consultar la nota “El asquito fue una expresión personal, no en calidad de gobernante: Emilio a la CEDHJ”. La Jornada, Jalisco. 12 de octubre del 2010.
9. “En Jalisco proyecto para curar la homosexualidad”. Artículo de Víctor Manuel López Álvaro. Proceso. Citado por el portal Cadena de Noticias México.
10. “La CEDHJ propone debatir sobre la iniciativa de fuero militar”. El Informador. 11 octubre de 2010.
11. “Nombran a cuatro nuevos consejeros ciudadanos”. Público. 19 noviembre de 2010.
12. Se trata del ex consejero Alejandro Sánchez Gómez, quien actualmente se desempeña procurando fondos para la CEDHJ y antes de ingresar fue coordinador de la carrera de derecho en el Iteco.
13. Cúpula, del periódico Mural, del 20 de noviembre de 2010.
14. Informe de labores 2009 de la CEDHJ; pág. 245
15. Ibid. pág. 246
16. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Jalisco 2009, Cepad. México, pág. 93
17. Informe de labores 2009 de la CEDHJ; pág. 255
18. Informe de actividades de la CEDHJ 2009, pág. 256
19. Las cifras son resultado de la sumatoria de los datos aparecidos como “Quejas archivadas por diversos motivos” que aparecen en las tablas llamadas “Quejas dadas de baja”, en todos los números de las Gacetas de la CEDHJ (2003 – 2006).
20. Estos datos fueron fielmente tomados de las Gacetas de 2006, sin embargo debe mencionarse que puede existir un error en ellos puesto que repiten las mismas cifras en las Gacetas 45 y 46.
21. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Informe Anual 2007. (Guadalajara, CEDHJ. 2007). P. 105.

22. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Segundo Informe Anual 2008. (Guadalajara, CEDHJ. 2008). P. 205
23. En el cuadro no se consideran las inconformidades resueltas por la Tercera Visitaduría General, ya que en el apartado correspondiente solamente aparecen las quejas recibidas y las resueltas, sin hacer diferenciación entre conciliadas o archivadas.
24. Datos tomados en Julio del 2009 de las estadísticas que presenta la CEDHJ. En su página electrónica: <http://www.cedhj.org.mx/estadisticas/2008/quejas2008.pdf>
25. Conductas violatorias principalmente protagonizadas por la Procuraduría General del Estado de Jalisco y la Dirección de Seguridad Pública de Guadalajara.
26. Informe de Actividades de la CEDHJ 2009; pp. 55 y 56

ANÁLISIS DE LA TORTURA EN JALISCO 2000-2009

Resumen Ejecutivo

César Octavio Pérez Verónica

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC

El presente *Resumen Ejecutivo* permite dar a conocer en forma breve el contenido del Análisis de la Tortura en Jalisco 2000-2009 que presentó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, AC (Cepad) el 30 de septiembre de 2010. Dicha investigación fue construida a partir de la exigencia de un derecho fundamental, el de la información, a través de las solicitudes en los términos establecidos por la Ley de Transparencia e Información Pública de Jalisco, a diversas instituciones públicas involucradas en su prevención, investigación, procesamiento y erradicación de tan aberrante práctica.

Es importante señalar que desde la fundación del Cepad, sus integrantes decidieron que una de las prioridades de trabajo del organismo fuera la investigación de la tortura por considerar a ésta no sólo una violación grave de derechos humanos, sino también porque su práctica se revela como sistemática por parte de los servidores públicos de seguridad pública, procuración de justicia y por personal de custodia de personas privadas de su libertad.

Previo al análisis de la información recabada, se consideró importante difundir el trabajo que los organismos internacionales de derechos humanos han realizado en el tema de la tortura. En los Sistemas Universal e Interamericano, existe una gran preocupación porque los Estados acaten sus obligaciones e implementen políticas públicas y legislativas para evitar su práctica mismas que se encuentran en la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante (CAT) y la Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura, respectivamente, así como recomendaciones descritas en la creación del Comité, Protocolos Facultativos, Exámenes Periódicos y del recién creado Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de Naciones Unidas.

Representantes del Subcomité estuvieron en nuestro país en el 2008, y visitaron cinco entidades, entre ellas Jalisco. Debido a la trascendencia del informe que presentaron, en el informe presentado por el Cepad se incluyó un capítulo donde se resumieron los datos más importantes encontrados en los lugares de detención ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, particularmente en la casa de arraigo, y se incluyó el testimonio de un sobreviviente de tortura en ese lugar.

Una de las muchas obligaciones contraídas por el Estado mexicano es establecer el marco jurídico interno para tipificar el delito de tortura en el orden federal y en cada una de las entidades federativas. El 27 de mayo de 1986 se publica en el Diario Oficial de la Federación la *Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura*, sin embargo, su contenido presentaba varias lagunas jurídicas y no estaba armonizado con los instrumentos y principios internacionales en la materia. Fue el 27 de diciembre de 1991 que se publicó una nueva ley que abroga la anterior pero mantenía el mismo nombre y que contempla como ámbito de su competencia los delitos cometidos en el fuero federal y en el Distrito Federal.

En Jalisco, el 21 de diciembre de 1993 fue publicada la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante Ley estatal)¹. Dicha ley establece en su artículo segundo que *comete el delito de tortura, el servidor público que actuando con ese carácter, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con fines de investigación de hechos delictivos o infracciones, para obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como medio intimidatorio, como castigo por una acción y omisión en que haya incurrido o se sospeche que incurrió o la coaccione para que realice o deje de realizar una conducta determinada o con cualquier otra finalidad.*

En la definición contenida en la Ley estatal, se incluyen las características de los dolores o sufrimientos que se señalan en ambas Convenciones, así como la gravedad de éstos de acuerdo a la CAT, y se adhieren las características enunciadas en la Convención Interamericana respecto a que pueden ser físicos o psíquicos. Asimismo, los supuestos y fines que aluden la comprobación del delito tienen acepciones contenidas en ambas convenciones y hacen expresa la responsabilidad por omisión. Sin embargo, no se incluye que el acto de tortura sea perpetrado por la condición de la víctima, esto es, por su condición religiosa, el sexo, su estado de salud, la nacionalidad, su preferencia sexual, su ideología política u otro acto eminentemente discriminatorio, como sí lo enuncia la CAT, al cual, se puede considerar como un elemento de suma importancia para no omitir o desechar los casos que se encuentren en estos supuestos y queden impunes ante la gravedad del acto.

Sin embargo, la Ley estatal no incluye la tentativa de cometer la tortura como elemento material del delito, tal como lo enuncia el artículo 4 de la CAT² y el artículo

6 de la Convención Interamericana³. Esta omisión, permite a funcionarios coaccionar de manera indirecta sin acarrear responsabilidades penales que no se configuran en otra figura, con la consecuente impunidad.

Aún cuando Jalisco es una de las 15 entidades, de las 32 de la República, que han emitido una legislación especial en la materia, su armonización respecto a la Convención de Naciones Unidas, la Convención Interamericana y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, en materia de tortura puede decirse que cumple en un 66.67% , ya que ocho de doce derechos contemplados están armonizados según criterios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)⁴.

El Análisis de la tortura tuvo como principal objetivo visibilizar y comprobar la existencia de la tortura en la primera década del siglo veintiuno. Esto corresponde a tres administraciones estatales: un año corresponde a la administración de Alberto Cárdenas Jiménez (2000); la administración de Francisco Javier Ramírez Acuña (2001-2007) que contempla el interinato de Gerardo Octavio Solís Gómez, y la actual administración de Emilio González Márquez (2007 a diciembre de 2009). Todas estas administraciones se han caracterizado por negar que la práctica de la tortura es sistemática, hasta el extremo de afirmar, en el caso de las dos últimas que la tortura en Jalisco “no existe”.

Las instituciones públicas que el Cepad considero como prioritarias en su investigación, tanto por su involucramiento como por ser las principales involucradas con el tema de la tortura, fueron la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJE), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), la Secretaría de Seguridad Pública, Prevención y de Readaptación Social (SSPPR) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ). Los datos más relevantes obtenidos fueron respecto de las quejas recibidas y recomendaciones emitidas, el número de peritajes realizados y sus resultados, el número de servidores públicos involucrados presuntamente en la tortura, las capacitaciones, talleres y cursos proporcionadas o recibidas para prevenir e investigar los casos de presunta tortura, entre otros cuestionamientos, y se contrastaron entre sí.

En el caso de la PGJE, ésta se encarga, entre otras cosas, de investigar y perseguir los delitos del fuero común auxiliados por la policía investigadora; ejercer la acción penal ante los órganos jurisdiccionales competentes, así como “velar por la legalidad y el respeto a los derechos humanos en la esfera de su competencia, y promover la pronta, completa y debida impartición de la justicia”. Pese a las obligaciones antes indicadas, el personal adscrito a las distintas áreas de la Procuraduría ha sido la institución más señalada en quejas por tortura con un 87.3% de las 932 quejas presentadas ante la CEDHJ durante el periodo comprendido entre el año 2000 a 2009. De ellas, 803 corresponden únicamente a la PGJE.

Consideramos importante hacer notar que el periodo 2007 y 2009 se han unido por falta de claridad en la información que los sujetos obligados han proporcionado en

las solicitudes de información pública. Salta a la luz que las cifras proporcionadas por la CEDHJ como por la PGJE no coinciden, ya que durante el 2008 la CEDHJ dijo haber registrado 14 quejas por presunta tortura y 30 durante el 2009, sumando un total de 44 quejas. De esas 44 inconformidades, 23 fueron de julio del 2008 a diciembre del 2009. En cambio, la PGJE señaló en un periodo más largo, de noviembre del 2007 a diciembre del 2009, que recibió únicamente 14 quejas por parte de la CEDHJ⁶.

Las víctimas en su conjunto sumaron la cantidad de 13437 personas, y que bien vale señalar, sufren además otro tipo de violaciones a sus derechos humanos como a la libertad, integridad, seguridad personal, legalidad y seguridad jurídica, entre otras. Lo anterior resulta escandaloso si contemplamos la “cifra negra” de quejas no presentadas en la CEDHJ por posibles actos de tortura. Pese a la gran cantidad de personas victimizadas, no se entiende la ausencia de acciones claras por parte de la CEDHJ en la atención de los daños, en la capacitación de su personal para dictaminar y atender sus efectos, así como la rehabilitación de las personas afectadas.

Cómo ya se mencionó el Estado de Jalisco cuenta con Ley estatal para prevenir y sancionar la tortura con 17 años de vigencia, sin embargo, a pregunta expresa a la Unidad de Transparencia de la PGJE, respecto del número de averiguaciones abiertas o iniciadas por la comisión del delito de tortura, la respuesta fue que “no ha iniciado una sola averiguación previa por el delito de tortura”⁸.

Por otra parte, el IJCF fue creado en 1998 con el fin de obtener una autonomía técnica en los procesos de impartición y procuración de justicia; ha sido objeto de estudio en torno al tema de tortura por parte del Cepad en otros momentos. Tal como lo mencionamos en nuestro *Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2007-2008* ⁹, este Instituto se encarga de practicar y emitir desde sus áreas periciales los dictámenes con base en los conocimientos aplicados “al estudio, análisis e investigación de los hechos delictuosos y la participación en los mismos de los probables responsables, a través de técnicas basadas principalmente en la química, física, matemáticas y biología, a efecto de proporcionar la información que contribuya a esclarecerlos con objetividad científica”. Es importante recordar que el IJCF es un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Jalisco, con patrimonio y personalidad jurídica propia, cuyo máximo órgano es la Junta de Gobierno, integrada por once vocalías y la presidencia, que paradójicamente recae en el Procurador General de Justicia del Estado de Jalisco.

El IJCF se creó en aras de que los dictámenes periciales y opiniones que emite sean imparciales, por ello pudiera constituirse en un órgano auxiliar fundamental para la investigación relacionada con incidentes de tortura. Lo anterior, mediante sus expertos en medicina y psicología forense, de acuerdo con lo señalado en el Protocolo de Estambul, en su punto 78, que refiere que los investigadores de casos de tortura “[..]

Tendrán autoridad para encomendar investigaciones a expertos imparciales, médicos o de otro tipo, y podrán acceder a sus resultados. Los métodos utilizados para llevar a cabo estas investigaciones tendrán el máximo nivel profesional, y sus conclusiones se harán públicas”.¹⁰

En el periodo que comprende el 2000 al mes de octubre de 2007, le fueron solicitados la elaboración de 377 dictámenes médicos por presuntos actos de tortura física, de los cuales 23 corresponden a mujeres y 354 a hombres; en ambos casos no se proporcionaron el registro de edades. Del total de estudios, solamente en 16 de ellos se concluyó la existencia de la tortura física de acuerdo a la ciencia médica. En el periodo antes señalado le solicitaron la realización de 531 dictámenes psicológicos para determinar la existencia de síndrome de estrés postraumático por presunta tortura. De ellos, 491 fueron practicados a hombres y 40 a mujeres, resultando 52 de los estudios periciales con presencia de dicho patología.¹¹

Las entidades solicitantes de los dictámenes es otro dato sobresaliente, ya que el IJCF señaló que la CEDHJ le solicitó 157 de ellos de tipo médico y 25 por probable existencia de estrés postraumático, lo que contrasta con las 875 quejas registradas ante la CEDHJ en el mismo periodo en que se proporcionó la información (finales de 2007) por presunta tortura; es decir, sólo en el 21% de sus registros de inconformidades decidió solicitar un estudio pericial sobre el asunto sin que exista una clara explicación sobre los restantes, no obstante su clasificación inicial como denuncias por presunta tortura y de que una sola inconformidad puede incluir a más de una persona agraviada.

En cuanto a la capacitación, se encontró que en el periodo del año 2000 a julio de 2009, personal del IJCF recibió solamente cuatro cursos y de los que se tendría que hacer un análisis en relación a los métodos de enseñanza, experiencias impartidas y los impactos de la misma en la práctica forense:

- a) Curso “Tortura”, del 03 al 05 de noviembre de 2004;
- b) Curso “Seminario Internacional para la Implementación del Protocolo de Estambul”, del 30 de noviembre al 02 de diciembre de 2004;
- c) Diplomado “Diplomado en Medicina Legal”, que a partir de 2006 se ha incorporado dentro del “Modulo IV” (sic), y
- d) Curso “Derechos Humanos y Protocolo de Estambul”, del 27 al 31 de octubre de 2008, al que asistieron cinco peritos y dos delegados regionales.

La precaria capacitación e interés por parte del IJCF para atender de manera especializada el tema de tortura, sólo abona a la impunidad en la que se encuentra este flagelo, en perjuicio de las víctimas.

Respecto a la SSPPRS, ésta es la dependencia “encargada de conducir y proporcionar los servicios de seguridad pública en el ámbito de su competencia, prevención y readaptación social, asistencia y apoyo a reos liberados, así como de diseñar e implantar los lineamientos estatales en materia criminal y de prevención del delito, fundando sus acciones en la integridad y derechos de las personas, en la preservación de las libertades y la paz pública y el respeto y preservación de los derechos humanos”.¹²

Es importante mencionar que la información proporcionada por la Unidad de Transparencia de la Secretaría, fue solicitada a cada una de las direcciones o centros que integran esa dependencia, como son las direcciones generales de: Seguridad Pública del Estado, Jurídica, Prevención y Readaptación Social, Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco (Reclusorio Preventivo de Guadalajara); la Inspección General de Policía, y las direcciones del Centro de Readaptación Social del Estado de Jalisco, el Centro Preventivo y de Readaptación Femenil del Estado, los Centros Integrales de Justicia Regionales (Sur sureste, Costa Norte, Costa Sur, Ciénega Chapala, Alto Sur, Altos Norte, Valles Ameca, Valles Tequila) y el Centro de Observación, Clasificación y Diagnóstico del Estado.

La información aportada por la SSPPRS señala que el Reclusorio Preventivo del Estado de Jalisco (anteriormente llamado Reclusorio Preventivo de Guadalajara) no cuenta con quejas por tortura en contra de su personal dentro del periodo del año 2000 al mes de agosto de 2009; en cambio, por otros actos recibió 119 quejas presentadas ante la CEDHJ. De ellas, 10 fueron por lesiones. De éstas, 08 involucran a 23 servidores públicos (un director y 22 custodios), mientras que en las restantes no se especifica el número de implicados.

Sin embargo, la CEDHJ tiene registradas seis quejas por tortura en contra del personal del entonces Reclusorio Preventivo de Guadalajara, que tienen como número: 1561/2003, 1651/2003, 3/2006, 10/2006, 1409/2006 y 2558/2006¹³. Lo que evidencia el subregistro de los casos por tortura. De ser falsa la información proporcionada por el sujeto obligado, puede incurrir en responsabilidad administrativa, civil o penal de acuerdo con la legislación de la materia¹⁴.

En lo que respecta al Centro de Observación para Menores del Estado de Jalisco, la SSPPRS señala no contar con quejas por actos de tortura, mientras que la queja 2063/2004 ante la CEDHJ está dirigida en contra de personal de este Centro¹⁵.

Mientras tanto, la CEDHJ juega un papel fundamental en nuestro estudio por ser una institución de Estado que tiene como finalidad esencial “la defensa, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos”.¹⁶

A la CEDHJ se le solicitó información relacionada con las quejas registradas por presuntos actos de tortura, los servidores públicos involucrados, las características de las personas afectadas, las recomendaciones emitidas, los cursos y capacitaciones

proporcionadas a las instituciones públicas municipales y estatales para prevenir y erradicar la tortura, entre otras, generada durante el 2000 al 2009.

Al observar las quejas registradas en la CEDHJ de enero a diciembre de 2006, la calificación de dicha violación se encontraba con un total de 246 quejas por amenazas, 185 por intimidación, 691 quejas por lesiones y 150 quejas por tortura.

Para el 2007, en el cuadro de las supuestas violaciones más frecuentes registradas por la CEDHJ, aparecen solamente 245 por amenazas, 277 por intimidación (92 quejas más), por lesiones 713 registros (22 quejas más que el año anterior). Mientras que la tortura dejó de registrarse como una violación frecuente¹⁷.

En el 2008, en el cuadro de “supuestas violaciones más frecuentes”, apareció como una categoría a la par de las amenazas, las intimidaciones, y las lesiones, la propia Violación al derecho a la integridad y seguridad personal, aspecto que resulta contradictorio, ya que se trata de la categoría que engloba a las restantes.

En ese año, lesiones llegan a 475 señalamientos, amenazas 166, intimidación 164 y por violación al derecho a la integridad y seguridad personal 115, sin que en este aspecto se encuentre un criterio formal que las diferencia de las quejas por presunta tortura. Para el 2009, el número de quejas registradas fueron: lesiones 359, amenazas 386, intimidación 213 y por la violación al derecho a la integridad antes señalada 1729 quejas.

La desaparición inexplicable del registro de quejas por “tortura” desde el 2007, en las “violaciones más frecuentes”, permite suponer ante la carencia de elementos formales como por ejemplo la aprobación por parte del Consejo Ciudadano de la CEDHJ de algún “principio general de actuación”, que se encuentra incluida en el rubro genérico de *violación al derecho a la integridad y seguridad personal*. Lo que nos pondría frente al escenario, de encontrarse dentro de las 1729 inconformidades que se recibieron en 2009 por ese motivo.

El número de quejas presentadas ante la CEDHJ y categorizadas específicamente como tortura, tienen un aumento exponencial del 2001 al 2007, para caer en sus cifras pasado ese periodo sin causa justificada.

Asimismo, el 9 de septiembre de 2009, Emilio González Márquez durante un acto oficial sobre la *Contextualización del Protocolo de Estambul*, declaró públicamente que en Jalisco no se practicaba la tortura, y que por su compromiso con erradicarla no existía una sola queja durante su administración, afirmación respaldada por el Procurador del Estado.¹⁸

El Gobernador de Jalisco añadió: “Jalisco es enemigo de la tortura, y una prueba de esto es que en lo que va del año no hay una sola queja de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por esta materia, porque nos lo hemos propuesto como objetivo, que estos principios aterricen en el terreno de la práctica”,¹⁹. Este objetivo del Poder Ejecutivo se da cuando, en la práctica, la CEDHJ elimina en los hechos el rubro de

tortura de sus registros y posiblemente lo incluye en el rubro de violación al derecho a la integridad, con lo cual podemos preguntarnos si este es un caso de rendición de la autonomía del propio organismo público de protección a los derechos humanos.

Para el año 2008 la cifra negra del delito en el estado, se encontraba en el 90%²⁰, es decir, 9 de cada 10 delitos no son denunciados ante la autoridad encargada de investigar los mismos; por tanto, si la autoridad encargada de investigarlos es la más señalada por practicar la tortura ante el organismo público de derechos humanos, difícilmente una persona sobreviviente de la tortura o un familia depositarían su confianza en la institución cuyo personal le infringió los sufrimientos físicos o mentales. Lo representa una violación más a los derechos humanos de las víctimas relacionadas con el acceso a la justicia.

El presente informe evidencia la grave situación de la práctica de la tortura en Jalisco, y el pobre papel que las instituciones han realizado en el periodo de estudio para prevenir, investiga, sancionar y erradicar ésta grave violación a los derechos humanos.

Desde 1993 entró en vigor la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura, sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta investigación, no se ha registra una sola averiguación previa consignada por la PGJE ante un órgano jurisdiccional por el delito de tortura, pese a que existen peritajes médicos y psicológicos elaborados por personal del IJCF, los cuales emitieron durante el 2000 al 2007 un total de 281 casos positivos de probable tortura.

El factor impunidad juega un papel importante en este tema, pues pese a las denuncias públicas por organizaciones defensoras de derechos humanos locales, nacionales e internacionales sobre las prácticas de actos de tortura en las instalaciones de la PGJE y de la SSPRS contra decenas de jóvenes en la tarde noche y días subsecuentes al 28 de mayo de 2004 en Guadalajara, a la fecha no se ha iniciado una sola investigación por tales hechos.

Durante los primeros nueve años del presente siglo, se han registrado 933 quejas por tortura ante la CEDHJ, 803 de ellas dirigidas contra el personal de la PGJE. En las quejas contra la instancia responsable de investigar los delitos se tienen señalados 973 servidores público de cometer tortura contra 1343 personas.

Los datos más reveladores sobre el comportamiento de la tortura en Jalisco, son los proporcionados por la CEDHJ, pues luego de recibir un promedio de 150 quejas anuales durante el 2001 al 2006, con la llegada en el 2007 de Felipe Álvarez Cibrian a la presidencia de dicho organismo, recibió 82 quejas, en el 2008 fueron 14 y 30 en el 2009. En julio de 2008, dicho funcionario justifico su disminución a la capacitación que impartida al personal de la PGJE, sin embargo, al solicitarle información básica sobre tal capacitación, no pudo acreditar su afirmación.

En la visita del Subcomité de las Naciones Unidas contra la tortura ocurrida en el 2008, inusualmente logró acreditar en la casa de arraigo de la PGJE, casi el mismo número de víctimas de tortura, que el número de quejas recibidas por la CEDHJ durante todo ese año.

Para prevenir y erradicar la tortura se requiere la atender las obligaciones del Estado mexicano en esta materia, de las cuales las autoridades de Jalisco no pueden substraerse de ellas. Además, se no se observa la intención de las principales autoridades de Jalisco de cambiar el actual estado de las cosas, que prohíban su práctica y el respeto por los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan por la entidad. Lo anterior implica contar con servidores públicos con sensibilidad y la calidad moral para encabezar las instituciones públicas involucradas en el presente estudio.

Bibliografía y citas aclaratorias

1. LIII Legislatura del Estado de Jalisco 1992-1995 mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
2. Artículo 4“1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal. Lo mismo se aplicará a toda tentativa de cometer tortura y a todo acto de cualquier persona que constituya complicidad o participación en la tortura. 2.[...]”. Convención contra la Tortura de la ONU.
3. Artículo 6 “[...] Los Estados partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad [...]” Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.
4. Armonización de la Legislación de las Entidades Federativas respecto de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, Prevención y Sanción de la Tortura, CNDH Tortura. Disponible en línea: http://www.cndh.org.mx/armonlegv3/legTema.asp?Id_Tema=8
5. Respuestas de la CEDHJ a Solicitud de Información Pública, CEDHJ, Expediente UT/36/2009, oficio SE/UT/157/2009, fechada al 29 de agosto de 2009, punto 2: 19 quejas del 29 de julio del 2008 al 31 de julio del 2009 y Expediente UT/04/2010, oficio SE/UT/2010, fechado al 11 de marzo de 2010, punto 2: 4 quejas del 1 de agosto de 2009 a 31 de diciembre de 2009.
6. Respuestas de la PGJE a solicitudes de información pública, PGJE, No. Folio INFOMEX 00640109, Expediente 134/2009 punto B: 09 quejas de noviembre de 2007 al 29 de julio de 2009; Acuerdo fechado al 12 de marzo de 2010, punto B: 05 quejas del 31 de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2009.
7. Se especifica como aproximado por la posibilidad de contar con un margen de error en las últimas cifras del 2008 y 2009 debido a la falta de claridad y las limitaciones al intentar obtener cifras certeras por parte de los órganos públicos a los que se requirió información.
8. Ibid puntos E y G respectivamente, así como Acuerdo del 22 de noviembre de 2007 CGJ/6172/2007-J, Oficio CGJ/6172/2007 punto G.
9. Informe sobre la situación de derechos humanos en Jalisco, 2007-2008. Una mirada a las instituciones públicas encargadas de prevenir, investigar y sancionar la tortura en Jalisco. Pérez Verónica, César. Pág. 55 citando al artículo 3, fracción II y artículo 8 de la Ley Orgánica del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

10. Protocolo de Estambul, Capítulo III, Investigación Legal de la Tortura, puntos 78.
11. Respuesta del IJCF a solicitud de información pública, Expediente 27/2007/UT/IJCF, oficio 1104/2007/C.A.A.J. fechado al 07 de noviembre de 2007, puntos I, VI Y VII.
12. Artículo 38 bis, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
13. En algunas de las quejas se encuentran involucradas hasta en dos ocasiones otras dependencias, entre ellas la PGJE.
14. Artículo 102 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco.
15. Respuesta de la CEDHJ a solicitud de información pública, Expediente 026/2007, oficio 055/2007/UT , anexos (H) *Servidores Públicos y Dependencias a las que pertenecen, registrados en las quejas por presunta tortura 2000-octubre 2007*, pág. 12
16. Segundo párrafo del artículo tercero de la Ley Estatal de Derechos Humanos
17. Consultar en la página de la CEDHJ <http://www.cedhj.org.mx/estadisticas/2007/violaciones2007.pdf>
18. G. Partida, J., Propone Álvarez Cibrián homologar acciones de CEDHJ, IJCF y PJE para erradicar la tortura. La Jornada Jalisco, julio 2008. Disponible en línea: <http://www.lajornadajalisco.com.mx/2008/07/24/index.php?section=politica&article=009n1pol>
19. Mensaje del Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, durante la inauguración del Curso de Contextualización del Protocolo de Estambul. Salón de Eventos, Casa Jalisco, Guadalajara el 9 de septiembre de 2009.
20. Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, AC, Sexta Encuesta Nacional sobre la Inseguridad 2009, disponible en: <http://www.icesi.org.mx/documentos/encuestas/encuestasNacionales/ENSI-6.pdf>

ÍNDICE DE AUTORAS Y AUTORES

Arteaga Godínez, David

Egresado de psicología en enero del 2006. Coordinador del área de psicología en El Mesón de la Misericordia. Experiencia en acompañamiento y apoyo emocional a personas con VIH y sus familias, en fase avanzada. Ha diseñado y llevado a cabo charlas y capacitaciones de prevención del VIH y SIDA en diversos espacios incluyendo participaciones en la Vigilia Internacional y Día Mundial en Respuesta al VIH. Experto en consejería en VIH para la realización de la prueba de detección del virus.

Barba Ochoa, Blanca Aminta

Egresada de la Licenciatura en Derecho, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara (2003-2007). Colaboró como pasante de Derecho en MDR Abogados Y Abogados Asociados. De febrero de 2009 a agosto de 2009 colaboró en la junta distrital 08, Instituto Federal Electoral como Asistente del Consejero Electoral, el Lic. Carlos Rogelio Galván López. A partir de Abril de 2010 inició actividades en la AJAGI, Dentro de las funciones principales desempeñadas dentro de la Asociación se encuentran: la redacción y presentación de demandas relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en específico al pueblo Wixárika (huichol). Seguimiento de los casos de las comunidades wixaritari (huicholas), a través de informes de seguimiento, ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, así como ante la Organización Internacional del Trabajo.

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD)

Organismo de la sociedad civil, autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos (tipo o paradigmático) de violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos, con vinculaciones e interacción con organizaciones sociales e instituciones públicas y civiles, que al intervenir

desactiva los mecanismos de violación a los Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Este proceso se realizará con una perspectiva de complejidad (entrelazando acciones de investigación, articulación, formación, defensa e incidencia pública), con el objeto de contribuir a un cambio estructural que mejore la calidad de vida de las personas y devenga en una sociedad que experimente los valores de la paz, el diálogo, la justicia y el desarrollo. Más información: www.cepad.org.mx

Contreras Macías, Arturo

Profesor de Educación Primaria en el estado de Jalisco. Es Secretario de Educación Integral y Desarrollo Sustentable de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado (SNTE) e integrante del Movimiento de Bases Magisteriales.

Cortes Almaguer, María de los Ángeles

Lic. Psicología por la U de G Colaboradora en Colectivo Ollin con el programa Yolliliztli, Propuesta Educativa de Abordaje en Sexualidad con niñas, niños y jóvenes para prevención del abuso, la violencia de género y el VIH/Sida desde 2005. Certificada por “ Proyecto Binacional de certificación para consejeras y consejeros en prevención y /o detección temprana del VIH y del Abuso sexual” por la WOAR y TPACWHCI de Filadelfia.

Lorenzana Aguilar, Nora Berenice

Egresada de la Carrera de Derecho del Instituto y Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente ITESO (2003-2006). Colaboradora del área jurídica en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13 (2004-2005). Posteriormente colaboradora en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, dentro de la Sub. Delegación Jurídica (2005-2006). Actualmente colaboradora en el Área de Defensoría de la Asociación Jaliscience de Apoyo a Grupos Indígenas (2007 – a la fecha). Dentro de las funciones principales desempeñadas dentro de la Asociación se encuentran: la redacción y presentación de demandas relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en específico al pueblo Wixárika (huichol). Seguimiento de los casos de las comunidades wixaritari (huicholas), a través de informes de seguimiento, ante organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, así como ante la Organización Internacional del Trabajo.

Macías Medina, Francisco

Egresado de la carrera de Abogado de la Universidad de Guadalajara (1991-1996). Maestro en Derecho por la misma casa de estudios con especialidad en Administración

de Justicia y Seguridad Pública. Ha trabajado como auxiliar del Ministerio Público; como apoderado de la Banca de Desarrollo; de visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco; así como promotor y co-creador del programa Jornadas Municipales y Programa Preventivo Contra la Tortura. También ha sido colaborador de la extinta Academia Jalisciense de Derechos Humanos y del Comité Pro Derechos Humanos Anacleto González Flores, AC. Es responsable del panorama de derechos humanos y justicia de la Revista de análisis Nueva Síntesis. Actualmente imparte clases de “Ética profesional y derechos humanos” en la Universidad Marista de Guadalajara. Desde 2006 trabaja en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en donde se encarga de la dirección ejecutiva, además de la sistematización y desarrollo institucional.

Martínez Barba, Martha Patricia

Periodista e integrante de GDL en Bici, AC. Becaria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y de la Fundación Prensa y Democracia. Es pasante de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano y tiene un diplomado en Contraloría Social. Trabajó en el periódico Público, como reportera; en el despacho AU Consultores, en la elaboración del Plan Maestro de Movilidad No Motorizada para el Área Metropolitana de Guadalajara; y actualmente es parte del equipo de Comunicación Social del ITESO.

Pedroza Veloz, Cecilia

Graduada en la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara (2001-2005). Lleva nueve años de trabajando en la causa del VIH/Sida, dentro del Mesón de la Misericordia Divina, A.C., realizando principalmente labores enfocadas a la atención de pacientes hospitalizados. Capacitada en el tema del VIH/Sida, con participación en acciones de educación y prevención que realiza la institución. Formación a través de cursos, talleres y ponencias sobre tanatología y cuidados paliativos. En el 2010 egresada del Centro San Camilo tras haber cursado el Diplomado en Cuidados Paliativos y Atención al Enfermo Crónico-Terminal.

Peralta Varela, Carlos Armando

Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el CIESAS de Occidente. Tiene estudios de maestría en Desarrollo Humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (Iteso). Fue coordinador del Proyecto de Educación y Organización Popular de Servicios Educativos de Occidente (SEDOC AC), en Ciudad Guzmán (1986-1990); trabajó en el Área de Educación en Derechos Humanos y la Paz del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (1990- 1995). Desde 1995 ha sido profesor-investigador (titular) del Centro de Investigación y Formación Social del

Iteso y ha coordinado el Programa Universitario de Derechos Humanos; el Programa de Formación e Incidencia Ciudadana; e imparte clases en diversas instancias y programas académicos. Desde 2008 es Presidente del Consejo Directivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC.

Pérez Verónica, César Octavio

Egresado de la Carrera de Derecho del ITESO (1991-1995). Desde entonces ha ejercido la profesión de abogado litigante independiente en Guadalajara. Fue Secretario Técnico del Colectivo de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Jalisco (2001-2002). Miembro fundador de la Red de Profesores de Derechos Humanos coordinada por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México (2002). Investigador en el Diagnóstico sobre la Educación Jurídica en materia de Derechos Humanos en las Universidades en México coordinada por la UIA y la American University de Washington, DC (2002). Representante de la Agenda Sectorial de Derechos Humanos del Poder Ciudadano Jalisco (2001-2002). Profesor en la asignatura de “Derechos Humanos” en el ITESO. Dentro del Cepad se encarga de la defensa jurídica de los casos calificados como estratégicos desde una perspectiva integral.

Quezada Esquivias, Alondra Viridiana

Estudiante de la Licenciatura Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Laboró como locutora y productora de programas radiofónicos sobre temas migratorios; supervisora y capacitadora del Programa de Matemáticas Constructivas de la SEJ; asistente de la coordinación estatal del Programa Nacional Construye T de la SEP y PNUD, con sede en el ITESO; y en el diseño e implementación de talleres de promoción de la lectoescritura y expresión creativa. Actualmente coordina el Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas (EAMI).

Ramírez Cuevas Villanueva, Jade

Periodista y gestora cultural. Publica en medios electrónicos seguimiento periodístico sobre políticas y prácticas culturales, derechos humanos y denuncia. Fue becaria del programa PRENDE para periodistas Fundación Prensa y Democracia A.C. en 2005, dos veces nominada al Premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que preside García Márquez, su trabajo en varias emisiones de la Bienal Internacional de Radio ha merecido distinciones, así como mención especial del Premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Es Premio Internacional de Periodismo Rey de España 2009. Actualmente trabaja para la DGM de la Universidad de Guadalajara, dirige Cultura en Red.org y asesora iniciativas de intervención cultural.

Rodríguez Salguero, Adriana Verónica

Educadora en Vih/Sida y sexualidad, con formación académica en ámbito de salud, y realización de trabajo en educación para la paz y los derechos humanos, especializada en educación y atención relacionadas a Vih/Sida con énfasis en jóvenes, poblaciones urbano marginales, derechos humanos, con incursión en medios de comunicación, así como desempeño laboral para instancias gubernamentales, privadas y de la sociedad civil, investigador especializado en infancia en situación de riesgo (calle y explotación sexual comercial infantil), coautor de textos de investigación, fotógrafa y arteterapeuta en proceso.

Salcedo Alfaro, José Manuel

Egresado de la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara (1999-2004) y maestrante en Filosofía y Ciencias Sociales por parte del ITESO (2006-2009). Fue coordinador del Centro de Atención Integral en VIH –SIDA A.C. y actualmente es director del Mesón de la Misericordia Divina A.C., ambas organizaciones dedicadas a responder a la problemática del VIH y Sida, campo de acción al que ha dedicado su vida profesional.

Venegas Camarena, Bertha

Egresada de la escuela de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara (1967-1970). Trabajó de 1979 a 1983 en el Sistema DIF Jalisco en el Centro Comunitario Lomas del Paraíso y posteriormente se integró y fue fundadora del Mesón de la Misericordia Divina A.C. lugar donde actualmente se desempeña como Coordinadora de Trabajo Social, así también, ha participado en diferentes diplomados y ponencias relacionadas con el VIH y Sida.

Viniegra Martínez, Alfredo

Papá de Alfredo Emmanuel Viniegra Aceves Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, generación 1979-1984. Cursando la carrera le entregaron los premios “Ignacio L. Vallarta” y “Mariano Otero”. Titulado en 1985, con tesis “Prescripción en la Ley General de Salud”, laboró en la Controlaría del Estado y en el departamento jurídico del Centro Empresarial de Jalisco, principalmente materia Laboral. Desde 1989 se dedicó al comercio, actualmente tiene un establecimiento en Medrano 2005, (zona del vestir) y desde 1999 junto con su familia buscan “justicia” en favor de Alfredo Emmanuel “Freddy”.

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO AC (CEPAD)

Misión

Somos un organismo de la sociedad civil, autónomo, independiente y profesional, que a través de un proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos (tipo o paradigmático) de violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos, con vinculaciones e interacción con organizaciones sociales e instituciones públicas y civiles, que al intervenir desactiva los mecanismos de violación a los Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Este proceso se realizará con una perspectiva de complejidad (entrelazando acciones de investigación, articulación, formación, defensa e incidencia pública), con el objeto de contribuir a un cambio estructural que mejore la calidad de vida de las personas y devenga en una sociedad que experimente los valores de la paz, el diálogo, la justicia y el desarrollo.

Valores

1. Respeto a los Derechos Humanos

La definición de este valor está enmarcada en la complejidad, ya que se construye día a día y muta constantemente. El Centro se adhiere a las definiciones internacionales que se han trabajado sobre este concepto. Sin embargo, independientemente de los grandes debates, el respeto a los Derechos Humanos (DH) son aquellas acciones o abstenciones que propician una mayor humanización mediante el ejercicio pleno de la libertad. El Centro no podrá realizar acción alguna que viole los DH de quienes integran el proyecto, ni de sus usuarios, ni de terceros.

2. Criticidad

La criticidad implica las siguientes consideraciones: una lectura y análisis complejo de la realidad desde sus diferentes dimensiones; problematizar el entorno desde la reflexividad y la transdisciplinariedad; y una postura crítica, siempre con independencia ante los diferentes sistemas sociales, políticos, económicos, y de poder.

3. Transparencia

Forma sistemática de trabajo en la que se privilegia la comunicación entre los miembros de la organización, así como con los actores públicos con los que se relacionará (organizaciones pares, contrapartes, beneficiarios, Estado, financiadoras, medios de comunicación, y sociedad en general). El Cepad se compromete a difundir información de su quehacer, sus políticas, sus valores, sus finanzas, entre otras.

4. Justicia

Entorno del que surge el deber de actuación para reconstituir el respeto a la persona, a los grupos más vulnerables y al entorno en el que se desenvuelven, con el fin de contribuir a la exigibilidad y justiciabilidad de los Derechos Humanos. La justicia debe ser una expresión de realidad en lo cotidiano, así como en la vida de social e institucional. La justicia es una expresión de la lucha en contra de la impunidad y la corrupción.

5. Paz

Valor fundamental que permite el ejercicio de los Derechos Humanos en la sociedad. La paz se entiende no como ausencia de conflicto, sino como una herramienta de resolución de diferencias, para la convivencia social y política.

6. Responsabilidad Social

Es la toma de postura en favor de un cambio social, privilegiando la sinergia y vinculación con agentes e instituciones de la sociedad civil.

7. Servicio profesional

La realización de actividades con capacidad, oportunidad, eficacia, eficiencia, originalidad, calidad intelectual y responsabilidad.

8. Desarrollo

Medio y fin para que las personas y grupos tengan la posibilidad de una mejora en el ámbito económico, cultural, social y político, donde puedan realizarse plenamente el cumplimiento de los Derechos Humanos.

9. Diálogo

Mecanismo de construcción de acuerdos desde las coincidencias, que permiten impulsar el cambio social dentro de un marco de democracia.

10. Independencia

Es la cualidad que permite privilegiar los principios éticos contenidos en los derechos

humanos, sobre otros de tipo partidista o de credo.

11. Perfil público responsable

El Cepad, como un actor social dentro del espacio público, construirá cotidianamente un capital político a partir de su propio trabajo. Este capital deberá estar alejado de la estridencia, y tendrá que ser manejado de forma responsable, razonada y justa.

Líneas estratégicas de trabajo

Reingeniería

Reflexión y renovación sistemática de los métodos de trabajo del Centro y sus resultados, que permitan sostener la misión, así como la calidad de vida de sus miembros.

Creación y aplicación de procesos de exigibilidad y justiciabilidad

Creación y aplicación de estrategias que incidan socialmente en la mejora de la calidad de vida de las personas a través de una labor multidisciplinar y compleja.

Construcción de un actor político

Acciones de comunicación política responsable que posibiliten ser contraparte del Estado y los poderes fácticos e interlocutor de alto nivel ético e intelectual ante instituciones públicas y privadas, así como ante agentes sociales de Jalisco.

DIRECTORIO

Directorio de Organismos de la Sociedad Civil
Y MOVIMIENTOS SOCIALES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2010

OSC Y/O MOVIMIENTOS SOCIALES	CONTACTO	DIRECCIÓN	Página Web o Grupo en Facebook
1 Acción Ciudadana para la Educación, la Democracia y el Desarrollo A.C. ACCEDDE	<i>tt_ctl@hotmail.com</i>	Calle Reforma # 1010, Col. Villaseñor	<i>www.accedde.org</i>
2 Amigos en el Crucero A.C.	<i>amigoscrucero@gmail.com</i>	Calle Juan Manuel 1176, Col, Americana, Gdl, Jal.	<i>Facebook: Amigos en el crucero</i>
3 Asociación Jalisciense de Apoyo a grupos Indígenas A.C. AJAGI	<i>ajagi1@prodigy.net.mx</i>	Constitución 102, Centro, Tonalá, Jal.	
4 Bases Magisteriales	<i>comaideasqueunan@ gmail.com</i>	Calle Madero 836, Col. Americana Oriente, Gdl, Jal.	<i>http:// basesmagisteriales. blogspot.com</i>
5 Víctimas de violencia vial A.C.	<i>almaguth@hotmail.com</i>		<i>www. victimasdeviolenciavial. com</i>
6 “Casa de Mujeres”			
7 Acción y Reflexión SUMA A.C.		Calle San Juan de los Lagos 23, Vallarta Pte., Jal.	
8 Centro de Atención Integral en VIH SIDA A.C. Vihas de Vida	<i>vihas_derechos@hotmail. com</i>	Calle Madero 836, Col. Americana Oriente, Gdl, Jal.	<i>www.vihasdevida.org. mx</i>
9 Centro de Reflexión y Acción Laboral A.C. CEREAL	<i>jbarajas@iteso.mx</i>	Calle Madero 836, Col. Americana Oriente, Gdl, Jal.	
10 Ciudad para Todos	<i>unespaciounmovimiento@ gmail.com</i>		<i>http://www. ciudadparatodos.org</i>
11 Colectivo Manos a la Tierra	<i>colectivomanosalatierra@ gmail.com</i>	Tepic, Nayarit	<i>Facebook: Colectivo Manos A La Tierra</i>
12 Colectivo Oscar Arnulfo Romero	<i>colectivoromero@hotmail. com</i>	Calle Reforma 105, Col. Centro, Gdl, Jal.	

13	Colectivo Pro Derechos de la Niñez CODENI A.C.	<i>direccion.codeni@hotmail.com</i>	Calle Cruz Verde 19, Col. Centro, Gdl, Jal.	<i>www.codeni.org.mx</i>
14	Comunidad Crece	<i>mujerescrece@gmail.com</i>	Calle Puerto Melaque 36, Col. Miramar, Zapopan, Jal.c	<i>www.comcrece.org</i>
15	Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas EAMI	<i>eami.coordinacion@gmail.com</i>	Calle Madero 836, Col. Americana Oriente, Gdl, Jal.	<i>Facebook: Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas</i>
16	Gdl en Bici	<i>fmadrigal@gdlenbici.org.mx</i>		<i>www.gdlenbici.org.mx</i>
17	Mujeres indígenas mixtecas	<i>eami.coordinacion@gmail.com</i>	Calle Madero 836, Col. Americana Oriente, Gdl, Jal.	<i>Facebook: Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas</i>
18	Comité Salvabosque Tigre II	<i>salvabosquetigre2@yahoo.com.mx</i>		<i>http://comitesalvabosquetigre2.blogspot.com/</i>
19	Comité LesBiGay de Occidente COLEGA O A.C.	<i>isigbanuelos@hotmail.com</i>	Calle 28 de Enero 368 Col. Analco CP 44450, Gdl, Jal.	<i>www.colegaac.org</i>
	Esperanza Romero (PERIODISTA)	<i>ehromero@hotmail.com</i>		
20	Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el Sida AC CHECCOS AC	<i>checcosac@hotmail.com</i>	Calle Coronel Calderón 613, Col Barranquitas, Gdl, Jal.	<i>www.checcos.org.mx</i>
21	Colectivo Ollín, Alternativas para la Comunicación, la Sexualidad y el Desarrollo Comunitario A.C.	<i>colectivoollin@hotmail.com</i>	Calle Jesús 78 Col. Centro, Gdl, Jal.	<i>www.colectivoollin.org</i>
22	Cohesión de Diversidades para la Sustentabilidad A.C. CODISE	<i>rodrigo.rincon@codise.org.mx</i>	Calle Mariano de la Bárcena 685 Col. Centro, Gdl, Jal.	<i>www.codise.org.mx</i>
23	Mesón de la Misericordia Divina A.C.	<i>direccion@mesondelamisericordia.org</i>	Calle San Felipe 637 Col. Centro, Gdl, Jal.	<i>www.mesondelamisericordia.org</i>
24	Grupo de Apoyo Psicosocial	<i>grupoapoyopsicosocial@gmail.com</i>	Calle Lopez Cotilla 875-2 , Col. Americana, Gdl, Jal.	
25	Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados A.C.	<i>acastellanos@mama.org.mx</i>	Calle Libertad 1416, Col. Americana, Gdl, Jal.	<i>www.mama.org.mx</i>
26	Tu Techo Mexicano de Occidente A.C.	<i>natalia.alvarez@tutecho.org.mx</i>	Calle Lerdo de Tejada 2076-A, Col. Americana, Gdl, Jal.	<i>www.tutecho.org.mx</i>

Donaciones o aportaciones voluntarias

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad) es una organización civil sin fines de lucro y que trabaja por la construcción de una sociedad democrática que garantice el respeto de los derechos humanos. Si quieres hacer donaciones o colaborar como voluntaria o voluntario, comunícate a nuestras oficinas:

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad):

Calle Francisco I. Madero 836.

Colonia Americana Oriente CP. 44160.

Guadalajara, Jalisco, México.

Teléfono y fax: +52 (33) 36134066.

Correo electrónico: cepad@cepad.org.mx

Página electrónica: www.cepad.org.mx

Blog. cepadorg.blogspot.com

Grupo facebook

Esta publicación se terminó de editar en diciembre de 2010, en las oficinas del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC, ubicadas en Calle Francisco I. Madero 836. Colonia Americana Oriente CP. 44160. Guadalajara, Jalisco, México.

INFORME

SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN JALISCO

-2010-

Se terminó de imprimir en Enero del 2010
en los Talleres Gráficos de Prometeo Editores,
S.A. de C.V.

Libertad 1457, Col. Americana, Guadalajara, Jalisco
C.P. 44160 Tel. 01 (33) 38262726
E-mail: prometeoeditores@prodigy.net.mx

El tiraje fue de 300 ejemplares
Impreso en México *Printed in Mexico*